



Este libro evidencia resultados del proyecto de investigación “*Políticas públicas, ruralidades y medioambiente en el periurbano bonaerense. El partido de La Matanza*”, financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y desarrollado en la Universidad Nacional de La Matanza. La pertenencia de los miembros del equipo a universidades del Conurbano Bonaerense con fuerte trabajo territorial permitió elaborar herramientas y propuestas para políticas de una agenda pública de desarrollo de los gobiernos local, provincial y nacional, mediante una metodología multidisciplinaria, combinando Sociología, Geografía, Antropología, Economía, Nutrición, Biología y Química.

La Matanza es el distrito más grande del país y caso testigo de algunas dinámicas singulares del Área Metropolitana de Buenos Aires: el sistema territorial metropolitano más complejo y denso en población, tal vez el menos planificado del país, con fragmentación y descoordinación entre jurisdicciones.

Con prólogo de Beatriz Giobellina y coordinación de María Carolina Feito, los investigadores María Abelina Acosta Felquer, Andrés Barsky, Susana Carmen Battista, Mariano Jäger, María Carolina Feito, Joaquín Pérez Martín, Alejandra Ricca y Noelia Vera, muestran cómo la Agricultura Familiar (AF) se manifiesta territorialmente en un tejido complejo entre lo urbano, lo industrial, los servicios, con alguna supervivencia de lo agropecuario.

Presentando información cualitativa y, sobre todo, cuantitativa de la que no se disponía, se avanza hacia un debate teórico sobre el desarrollo rural y territorial, que encuadre políticas, ideologías y metodologías con teorías para repensar la sustentabilidad social, ambiental y territorial de los sistemas alimentarios. Los capítulos presentan el entrecruzamiento de diferentes lógicas y tamaños de AF en el mismo distrito, evidenciando la importancia del pequeño canal corto de comercialización de una feria virtual desarrollada en pandemia, contrapuesto con el Mercado Central, con volúmenes extraordinarios y logística muy compleja. Se caracteriza la producción agropecuaria matancera, mediante resultados de una encuesta original desarrollada en el marco del proyecto, y se ilustra con interesantes fotografías, todas ellas con poemas escritos para la ocasión.

El libro completa “el gran mosaico de conocimiento faltante sobre los periurbanos y los sistemas socio-ambientales que seguirán alimentando en el Siglo XXI las ciudades de nuestro país”.

www.riocultura.com.ar



RíoCuLtura Ediciones

María Carolina Feito (Coord.)

Políticas públicas, agricultura familiar, producción y comercialización agroalimentaria en el periurbano bonaerense. El partido de La Matanza

Políticas públicas, agricultura familiar, producción y comercialización agroalimentaria en el periurbano bonaerense. El partido de La Matanza

María Carolina Feito
Coordinadora



RíoCuLtura Ediciones

RíoCuLtura Ediciones

**POLÍTICAS PÚBLICAS,
AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA
EN EL PERIURBANO BONAERENSE.
EL PARTIDO DE LA MATANZA**



**POLÍTICAS PÚBLICAS,
AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA
EN EL PERIURBANO BONAERENSE.
EL PARTIDO DE LA MATANZA**

MARIA CAROLINA FEITO
(Coordinadora)



Feito, María Carolina (coordinadora)

Políticas públicas, agricultura familiar, producción y comercialización agroalimentaria en el periurbano bonaerense : el partido de La Matanza / María Carolina Feito (coordinadora) ; [prólogo de Beatriz Giobellina]. -- 1a ed. -- Buenos Aires : RCL Río Cultura, 2021.

226 p. : tablas, gráficos, mapas ; 23 x 16 cm.

ISBN 978-987-47020-5-0

1. Agricultura familiar. I. Giobellina, Beatriz, prologuista. II. Título.
CDD 630.982

RCL Río Cultura Ediciones

México 470

(C1097AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: +54 11 4342-9650

info@riocultura.com.ar

www.riocultura.com.ar

Diseño de tapa: Diego Soler

Diseño de interior: Donagh I Matulich

Foto de tapa: María Sol Ciccioli

Fotos de las carátulas por: María Carolina Feito (capítulos I-IV), Juan Pablo Lepore (capítulo V) y Sofía Macarena Torrejón (capítulo VI).

Poemas de: Susana Novick

Todas las fotos de personas sin barbijo fueron tomadas antes de la pandemia de COVID-19.

Todos los derechos reservados.

La reproducción total o parcial de este libro, en cualquier forma que sea, idéntica o modificada, escrita a máquina, por sistema "multigraph", mimeógrafo, impreso por fotocopia, fotoduplicación, etcétera, no autorizada por los editores, viola derechos reservados. Cualquier utilización debe ser previamente solicitada.

Primera edición, agosto 2021.

Impreso en Argentina. Printed in Argentina

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

© 2021 RCL Río Cultura Ediciones

ISBN 978-987-47020-5-0

*A la memoria del Ing. Agr. Camilo Polti († 2020),
técnico de la EEA AMBA INTA
y compañero de aventuras en La Matanza*



ÍNDICE

Prólogo	9
<i>Beatriz Giobellina</i>	
Introducción y agradecimientos	15
<i>María Carolina Feito y Susana Carmen Battista</i>	
CAPITULO I	
Caracterización de productores agropecuarios del partido de La Matanza	37
<i>María Carolina Feito</i>	
CAPITULO II	
Algunas consideraciones económicas de los productores de la agricultura familiar en La Matanza	93
<i>Mariano Jäger</i>	
CAPITULO III	
Consideraciones teóricas: políticas públicas y desarrollo rural	133
<i>María Abelina Acosta Felquer</i>	
CAPÍTULO IV	
Políticas públicas y gestión para productores agropecuarios matanceros . .	149
<i>María Carolina Feito</i>	

CAPÍTULO V

El rol del Mercado Central de Buenos Aires como autoridad metropolitana de concentración frutihortícola.

Implementación y trayectoria 175

Andrés Barsky y Joaquín Pérez Martín

CAPÍTULO VI

Acortando los tiempos de la ciencia para actuar en emergencia.

Comercialización de la agricultura familiar en contexto de pandemia como herramienta para el desarrollo territorial: “La Feria con Vos” 199

Alejandra Ricca, María Carolina Feito y Noelia Vera

Los/las autores/as 217

PRÓLOGO

Beatriz Giobellina

Es un placer poder prologar este libro debido a varias circunstancias que quiero comentar: en primer lugar, por mi admiración y respeto por los investigadores que forman parte del equipo. A algunos los conozco desde hace varios años, en especial Carolina Feito y Andrés Barsky, con quienes nos hemos encontrado y colaborado en distintos eventos científicos, jornadas y redes multisectoriales, congresos y foros especializados en periurbanos y Agricultura Familiar (AF). Espacios donde compartimos nuestra preocupación y vocación por trabajar para la visibilización de una temática bastante ausente de la Academia y de la Agenda pública: la protección de los cinturones verdes, la producción de alimentos de proximidad, el desarrollo territorial de sistemas alimentarios muy complejos y multi-actorales, estratégicos para el futuro del abastecimiento de comida fresca y saludable de las ciudades, como lo vienen siendo desde la historia de fundación de las mismas. Estos sistemas productivos variados, diversos y muy necesarios para la seguridad y soberanía alimentaria, están fuertemente amenazados por la competencia por el suelo y el agua con otras actividades económicas, pero sobre todo por el avance de una frontera urbana imparable, producto de la debilidad en la planificación municipal y de la miopía social, política y técnica, que reemplaza huerta por ladrillo y cemento, frutales o tambos por calles y autopistas.

Entiendo que esa es la principal motivación para el conjunto de artículos que componen este libro, porque sus autores y autoras saben que es imperiosa la necesidad de generar políticas integrales para su promoción y mantenimiento, y también para el rediseño del territorio donde se asientan los sistemas alimentarios históricos de nuestro país —cada vez con menos familias productoras y más vulnerables—, sin los cuales no podemos pensar un futuro seguro.

Es un gusto, por otro lado, poder conocer un caso tan particular como es el Partido de La Matanza; dicho sea de paso: la segunda ciudad más

grande del país después de Buenos Aires y a pesar de no ser capital de provincia. Y no es un tema menor, sino que es un caso testigo de algunas de las dinámicas singulares del AMBA: el sistema territorial metropolitano más complejo, más denso en cantidad de habitantes y tal vez el menos planificado del país, debido a la fragmentación y descoordinación entre jurisdicciones. El territorio que se viene conformando año a año, según olas migratorias, con políticas incompletas e insuficientes, más definido por las fuerzas del mercado inmobiliario formal e informal, ocupado en sus intersticios por la necesidad y la pobreza, y atenuado o acentuado según la capacidad de reacción y sensibilidad social (u otras afinidades sectoriales) de gobiernos locales y provinciales, que no siempre priorizan atender las enormes desigualdades en el desarrollo y en el acceso a las condiciones básicas de calidad de vida que merece la sociedad en su conjunto. Recordemos que el acceso a la alimentación es un derecho humano básico que no siempre se garantiza, ni mucho menos se valora y protege a quienes la proveen. ¡Este es el tema de fondo de este libro!

Llama mucho la atención cómo la AF se manifiesta territorialmente en un tejido complejo que ha recibido tanta presión, tanto crecimiento demográfico por ser parte de la región más atractora del país, que desde mediados del siglo XX recibe la migración interna nacional, tanto interurbana como rural. Un territorio que se debate entre lo urbano, lo industrial o los servicios, con alguna supervivencia de fragmentos de lo agropecuario. A pesar de que hay un porcentaje muy alto del territorio que todavía es rural, el número real de productores está disminuyendo, según lo demuestran las investigaciones.

Estos artículos aportan un conocimiento de base para esas políticas públicas tan necesarias, que deben garantizar lo esencial para el mantenimiento de la vida. Una información cualitativa y, sobre todo, cuantitativa de la que no se disponía, así como recomendaciones para quienes toman decisiones, impulsan acciones y propuestas que pueden (y deben) definirse a escala local —como ya se está haciendo según da cuenta este libro—, pero que necesariamente requieren también de una articulación metropolitana y nacional. Porque lo que está en juego, desde la pequeña escala local hasta la más general del sistema urbano argentino, es el cómo se garantizará el futuro de la alimentación para toda la población actual y los millones que se sumarán en las próximas décadas. Una alimentación fresca, natural y saludable, según los parámetros actuales de la salud pública.

“Argentina alimenta al mundo”; “ser el supermercado del mundo” y cuantas frases y mitos de ese tipo circulan para justificar solo la parte más visible (y rentable) del campo, de la producción agropecuaria industrial, del negocio agroexportador. Este que aporta “las divisas que necesitamos para...”. Y ¿cuántas veces se planifica garantizar la supervivencia de las familias agricultoras que desarrollan la actividad más sacrificada del mundo rural, la que produce los alimentos frescos que llegan cada día a nuestras mesas, los herederos de las antiguas quintas y chacras, los migrantes de los países vecinos que resuelven la falta de recambio generacional del sector fruti-hortícola; esas producciones que no generan dólares, sino lechuga, acelga, tomate, miel, huevos...? Este libro se propone contribuir a revertir la invisibilización de este sector. Cuando nos muestran dónde están, qué producen, cómo lo hacen, cuántos son... nos ayudan a mirar, entender, valorar a quienes nos alimentan.

Por otra parte, no solo aportan datos cuantitativos y cualitativos de esa AF, sino que avanzan hacia un debate teórico sobre el desarrollo rural y territorial, que encuadre políticas, ideologías y metodologías con algunas teorías para repensar la sustentabilidad social, ambiental y territorial de los sistemas alimentarios y de las personas que los sostienen en nuestro país. Un enfoque que se complementa en forma sorprendente y curiosa —teoría y realidad histórica— con la muy interesante evolución del Mercado Central de Buenos Aires; el más grande, situado en La Matanza, que representa una tipología y un instrumento de escala metropolitano y nacional, basado en modelos internacionales. Así se puede entender parte de la historia de cómo se pensaba y diseñaba el abastecimiento de nuestro país, la vinculación entre los distintos gobiernos y sus ideas e intereses, los períodos históricos contradictorios, los enfoques que conformaron en el transcurso de décadas la gestación y la vida del Mercado Central. Y desde las miradas sobre el territorio y el desarrollo: la producción de alimentos y su distribución espacial; el fenómeno de la extralimitada y gigantesca conformación de la metrópolis bonaerense, con sus desequilibrios espaciales; las pugnas políticas y de grupos de interés; la incompletitud de los programas de diferentes gobiernos y signos políticos; y los proyectos a largo plazo que parece que siempre nos faltan, con la recurrente incapacidad de sostener procesos de planificación que evolucionen, en lugar de dar giros absurdos o retrocesos, donde siempre parece que hay que comenzar de cero, sin aprender de la historia.

Es una interpelación para las generaciones actuales: ¿alguna vez seremos capaces de diseñar nuestro futuro, nuestro territorio y un modelo de desarrollo

que garantice un rumbo ético, donde esté incluida la totalidad de la población, con iguales oportunidades de desarrollo, con calidad de vida, con defensa de sus derechos humanos?

Finalmente, el artículo último sobre las ferias universitarias y municipal como estrategia adaptativa y resiliente de la AF y de la comunidad en red; personas que vienen enredándose, trabajando lazos de cooperación y solidaridad en el territorio, y que muestra esa capacidad creativa de enfrentar las amenazas y las profundas modificaciones de contexto, como es el COVID-19, que pone al mundo “patas para arriba”. Pero que también logra poner blanco sobre negro para quien quiera ver: porque vuelve la mirada sobre lo esencial, sobre la vida, sobre la salud y sobre la muerte... Si no fueran tan duras las imágenes de las UCI y de los fallecidos, si no fuera cada vez más cercana y tangible la amenaza, se podría decir que es un mal sueño, o que no existe, porque hay un negacionismo que no entiende o no quiere que se entienda lo que representa. Pero esa realidad está ahí y la percibe la mayor parte de la humanidad, que hace lo que está a su alcance para sobrevivir. Esta experiencia nos hace pensar cuán vulnerables y frágiles son los cuerpos y los territorios, cuando hay una concatenación de riesgos, cuando un nuevo mal se superpone a males pre-existentes.

El relato de la experiencia de la “Feria con vos” es un canto a la vida: muestra cómo en La Matanza se reproduce, con las características propias del lugar y sus actores, el mismo fenómeno que estamos observando en el resto del país: la auto-organización de productores y consumidores, facilitada o no por técnicos, en pos de garantizar una alimentación saludable que disminuya la vulnerabilidad de los cuerpos ante este virus del que vamos descubriendo sus efectos. Pero también que avanza en superar la dicotomía vida-salud o economía, porque contribuye al mantenimiento de una economía social y familiar, tanto para productores como para consumidores.

En otros lugares del AMBA, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en muchísimas ciudades y pueblos de la Argentina, donde ya estaban emergiendo los sistemas alimentarios agroecológicos, alternativos y de la AF de proximidad, se repiten formas de producir y vender en canastas o bolsones, mediante nodos nuevos de distribución, con entregas a domicilio, con el uso de internet y redes sociales. Algo que ya existía pero que adquiere una escala mayor y una nueva visibilidad y masa crítica. Todo esto acompañado de otro fenómeno urbano-nutricional o de hábitos alimenticios, que tiene que ver con las formas de vida y de trabajo: la cuarentena deja a las personas en el hogar y

con mayor tiempo para preparar sus alimentos, para escoger productos frescos más sanos, para abandonar gran parte de la comida rápida, en la calle... Esta situación ha disparado la demanda de frutas y verduras, y una mejor selección de los alimentos. No llega a ser un movimiento tipo “Slow Food”, pero se parece en algunos aspectos.

En el caso de “La Feria con vos”, se pone en evidencia la importancia del pequeño canal corto de comercialización que una feria universitaria ha sentado como base y práctica territorial, y se contrapone en escala con el gran canal del Mercado Central, con volúmenes extraordinarios y logística muy compleja, acorde al tamaño de las poblaciones que abastece. En ambos se entrecruza la AF de diferente tamaño. Esto no significa que millones de habitantes pueden basar su alimentación en canales cortos, pero sí que éstos son muy importantes dentro del sistema y cumplen un rol que todavía falta dimensionar. Mantener la capacidad de respuesta local ante amenazas como la pandemia, o como podrían ser eventos climáticos extremos o de otros tipos, puede ser una alternativa para atenuar sus efectos, disminuir vulnerabilidades y sostener una economía a pequeña escala local.

Para finalizar, destaco el fondo del debate de los autores que ponen en valor, al tiempo que demandan, políticas públicas articuladas con la trama de actores locales y sectoriales, con continuidad y crecimiento evolutivo, con mirada estratégica y compromiso social y ambiental. Pero también el libro aporta una generosa oferta de propuestas, de ideas para debatir y analizar, de experiencias, de ofrecimientos de colaboración para ser copartícipe de la gestación de otras formas de desarrollo local y territorial; una forma en la que el rol del sistema científico-técnico nacional es fundamental, como lo demuestran los artículos. Por último, destacar el papel de las universidades nacionales del conurbano, que demuestran su función social y el compromiso de sus profesores/as y científicos/as.

Gracias colegas por permitirme acompañarles y sigamos completando el gran mosaico de conocimiento faltante sobre los periurbanos y los sistemas socio-ambientales que seguirán alimentando en el Siglo XXI las ciudades de nuestro país.

Beatriz Giobellina
Córdoba, junio 2021



INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTOS

María Carolina Feito
Susana Carmen Battista

El libro que presentamos se propone reflejar los resultados del proyecto PICT 1389-2015 titulado “*Políticas públicas, ruralidades y medioambiente en el periurbano bonaerense. El partido de La Matanza*”, financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), y siendo la Institución Beneficiaria la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y la Unidad Administradora, el Departamento de Ciencias Económicas de dicha universidad. Con un plazo inicial de desarrollo previsto entre el 02-02-2017 y el 02-02-2019, la ejecución de las actividades planificadas en el marco del proyecto resultó alterada por la discontinuidad en la liberación de los fondos por parte del FONCyT durante el año 2019, que fueron retomadas recién en junio de 2020, en plena época de pandemia y restricción presencial de actividades académicas. De allí que se otorgara una prórroga para la finalización del proyecto, con fecha 23-11-2020. Esta circunstancia determinó la decisión de incorporar al informe algunas actividades realizadas con posterioridad a la fecha inicial prevista.

Nuestra pretensión es aportar un paquete de propuestas para las políticas públicas municipales y contribuir a optimizar estrategias de intervención que consideren el territorio como estructura activa de los procesos de desarrollo, al tiempo que fomentar la producción agroecológica (entendida como aquellas modalidades productivas que busca maximizar la producción minimizando el uso de insumos externos, respetando y poniendo en valor la cultura local y protegiendo el medioambiente). El planteo de nuestra investigación pretende abordar herramientas para pensar en una concepción de las políticas públicas integral, que trascienda la esfera de una dependencia municipal y que pueda

articular acciones con otras jurisdicciones y sectores de la comunidad. El rastreo de antecedentes sobre el desarrollo de esta temática en La Matanza en la última década, nos ha permitido comprender que los programas vinculados a las políticas hacia el sector agropecuario se han desarrollado a partir de convenios entre la Secretaría de Desarrollo Social y el IMDES (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Social) por el lado del municipio (en algunos casos con intervención de la Secretaría de Medio Ambiente) y organismos nacionales y/o provinciales. Como ejemplo pueden citarse convenios firmados por el municipio, que tuvieron como contraparte al INTA (Programa Pro-Huerta) o el Programa Huertas Bonaerenses en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, nos parecía relevante detectar las acciones instrumentadas y en curso, en relación con la temática agropecuaria en el ámbito del municipio, las secretarías involucradas, los grados de colaboración entre las mismas y la predisposición para elaborar políticas y ejecutar acciones en forma conjunta.

Dadas las particularidades del territorio, las actividades agropecuarias se caracterizan por desarrollarse en estrecha relación con las áreas urbanas, lo que permite encuadrarlas dentro del concepto de agricultura periurbana, entendida ésta como un territorio de producción alimentaria de proximidad. Incorporamos este partido, porque el estudio de su sector agropecuario no posee mucha tradición y las producciones que allí se asientan, responden mayormente a esfuerzos e iniciativas privadas o de organizaciones sociales.

Una serie de proyectos de investigación desarrollados entre los años 2012-2017 en la UNLaM en el marco del Programa de Incentivos para Docentes Investigadores (PROINCE) y dirigidos por la Lic. Susana Battista, abordaron temáticas vinculadas al proyecto que aquí presentamos (Battista et al, 2014)¹. Entre los años 2012 y 2013, el proyecto de investigación denominado: “*Caracterización del sector agrícola en el Partido de La Matanza. Sustentabilidad económica, social y ambiental*”, abordó la temática de la agricultura dentro del partido de La Matanza, intentando sistematizar los escasos y dispersos aportes sobre la misma. Trabajos previos sobre los sectores productivos locales, nos condujeron a percibir la “invisibilidad”

1. Dos integrantes del Grupo Responsable del PICT aquí presentado, la Dra María Carolina Feito como integrante y la Lic. Susana Carmen Battista como Directora, participaron en los proyectos citados.

que el sector de la agricultura poseía para la política del distrito, situación que resultaba especialmente llamativa frente al hecho de que las áreas rurales constituyen la tercera parte de la superficie de La Matanza. Entre los años 2014 y 2015 otro proyecto se propuso trascender los aspectos descriptivos para aportar elementos para determinar “*La potencialidad del sector agrícola matancero para un proceso de desarrollo sustentable: actualidad, antecedentes y perspectivas futuras* “. En esta oportunidad, se persiguió avanzar en el análisis del sector agrícola matancero intentando detectar cómo sus características de desarrollo permitían determinar su inserción en un proceso de desarrollo sustentable. Entre los años 2016 y 2017, un nuevo proyecto denominado: “*Las ferias y mercados de la Agricultura Familiar (AF) y su aporte al desarrollo territorial con inclusión social en el Periurbano Oeste Bonaerense*”, se propuso abordar la importancia de la comercialización de ferias y mercados de proximidad para el desarrollo de la producción agrícola local.

Desde esas investigaciones, y con otros aportes del Instituto de Medioambiente de la UNLaM (cuyo director, el Dr. Mariano Jäger, es miembro del equipo del proyecto que aquí presentamos) detectamos que las políticas públicas locales han abordado de manera insuficiente al sector agropecuario, de manera que no resulta posible ponderar con exactitud su contribución actual y potencial a la economía del distrito y mucho menos, orientar esta información al análisis de la incidencia de este sector para el desarrollo de una economía amigable con el medioambiente. Dado que la agricultura periurbana de proximidad puede ofrecer mayores posibilidades para una producción sustentable, creemos que el sector agropecuario de La Matanza puede constituir una oportunidad para el desarrollo de proyectos empresariales y sociales con impacto en el empleo local, así como la proximidad de las explotaciones agropecuarias puede ofrecer mejores posibilidades de abastecimiento para los mercados locales.

Durante los años 90, el concepto de desarrollo fue revisado y discutido desde diversas perspectivas que intentaron mostrar la relación entre el fracaso y los efectos perversos de tantas políticas y proyectos. El discurso clásico contemplaba al progreso como un proceso difusionista que llevaría gradualmente a toda la humanidad a compartir un bienestar material generalizado. Sin embargo, la relación entre el proceso histórico de transición hacia la economía capitalista y el aumento de la calidad de vida es insostenible porque el proceso de modernización aplicado durante la segunda mitad del siglo XX

en los países del Tercer Mundo ha extendido la pobreza y la marginación social hasta límites sin precedentes (Viola Recasens, 2000). Desde los '70, las expectativas de un progreso acumulativo, limitado y universal implícitas en el discurso desarrollista comenzaron a quebrarse, surgiendo el "posdesarrollo", corriente que formula una sistemática deconstrucción del concepto. Arturo Escobar (1995) aportó el intento más innovador y polémico en este sentido. Los acontecimientos sociopolíticos ocurridos en Argentina con la llegada del siglo XXI colapsaron las bases conceptuales e ideológicas del modelo de desarrollo imperante en la década de los '90. Corrupción generalizada, poder económico concentrado, exclusión social, atomización del Estado, afectaron las bases mismas de la representatividad política que le dieron sustento a las propuestas neoliberales. En lo referente al desarrollo rural, comienza a reconocerse la existencia en el territorio de numerosos actores vinculados al desarrollo, otorgando valor a la necesidad de articular el trabajo con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil. Se reconoce la complejidad de las nuevas demandas de los diferentes sectores y regiones y la necesidad de considerar la totalidad de los aspectos productivos, económicos, sociales, culturales y organizativos (INTA, 2012).

Existe cada vez más consenso sobre la necesidad de reconceptualizar las visiones del desarrollo rural, en razón de que una *nueva ruralidad* está emergiendo como consecuencia del cambio de época. La preocupación creciente por la protección del medioambiente pone al campo en el centro de atención. La nueva sensibilidad social hacia el mundo del campo, concebido como un espacio de confluencia de la naturaleza, el paisaje, la cultura y la historia, define un nuevo contexto traducido en nuevas demandas que la sociedad formula a lo rural. Las funciones que se le asignan a lo rural trascienden lo meramente productivo, enfatizando su papel de motor de la economía sobre la mayor parte de las actividades de servicios. El desarrollo de esta nueva visión se corresponde con un nuevo sector rural participativo, diversificado, dinámico, con economías competitivas, generadoras de empleo (Alemany, 2003). Consideramos que el desarrollo no puede concebirse sólo a escala física, sino que implica potenciar capacidades existentes en los actores y grupos sociales (Feito, 2005). Para ello, se tornan imprescindibles a considerar para generar estrategias de desarrollo rural sostenible: una formulación diferenciada de políticas a los actores rurales, incorporación de la dimensión ambiental y el manejo sostenible de los recursos naturales. Esto significa otorgar especial importancia a *priorizar la mirada desde lo local, donde lo cotidiano pasa a te-*

ner relevancia, descentralizando las decisiones de asignación de los recursos y promoviendo la participación de la población en el diseño, formulación y ejecución de los programas y proyectos (Feito, 2005). Es necesario reformular y recrear al Estado capaz de preservar y fortalecer su capacidad estratégica a fin de poder constituirse efectivamente en promotor del desarrollo y catalizador de las iniciativas sociales, con formas de acción que incorporen sistemáticamente la concertación, la valoración de lo local y el fortalecimiento de las redes sociales. Este enfoque plantea una *estrategia integrada de acción interinstitucional*, en el que la gestión del sistema se traduce en términos de facilitación del proceso de innovación, más que del control mismo, centrando la intervención preferentemente en la calidad del proceso y la capacitación de los actores intervinientes durante el mismo, y no únicamente en el producto de la innovación (INTA, 2001).

Los modelos políticos están relacionados explícita o implícitamente con ciertas interpretaciones teóricas o estrategias metodológicas (Long, 1992). Concibiendo al Estado como una forma de la práctica social y no por fuera de la sociedad, las políticas públicas pueden entenderse como un “conjunto de sucesivas tomas de posición del Estado frente a cuestiones socialmente problematizables” (Oszlak, 1980, citado en Alfaro, 2000). En Argentina, las actuales intervenciones estatales implementadas en el mundo rural, obedecen a una lógica distinta que la que las ordenaba unas décadas atrás, cuando eran concebidas como *políticas agrarias*. Hoy, en cambio, dichas intervenciones pueden pensarse como un tipo específico de *política social*, planteando modificaciones a nivel de la concepción de desarrollo y en la relación entre Estado y sociedad civil. Las políticas públicas están en esta nueva forma de intervención, fuertemente condicionadas por las dificultades fiscales y la autolimitación financiera del Estado. El debate que fue otorgando distintos papeles al Estado y a los demás actores en los procesos agrarios globales, construyó modelos interpretativos de procesos sociales agrarios, de los cuales surgen recomendaciones de política agraria² corporizados en determinadas modalidades de acción estatal en el agro. El

2. Con “política agraria “ nos referimos a un tipo de acción estatal destinada a operar sobre la estructura agraria, utilizando ciertas herramientas (reforma agraria; política de tierras; programas de colonización; programas de reconversión productiva, etc), diferenciándolas de las “políticas agrícolas” (políticas de precios; de créditos; de tecnología y de insumos; políticas cambiarias, arancelarias o de subsidios).

nuevo modelo interpretativo de políticas diferenciales para el sector rural jerarquiza la participación de los actores sociales en el desarrollo agrario, planteando al mismo tiempo un rol activo del Estado. Lo destacable de este enfoque es que necesita reintroducir la acción social en las explicaciones, considerando que las estructuras pueden ser modificadas desde la acción política (Bourdieu, 1988). El paradigma centrado en la perspectiva del actor plantea que las formas de intervención externas necesariamente son mediadas y transformadas por los mismos actores, quienes modifican el mundo social y las determinaciones estructurales.

Actualmente, la antigua dicotomía campo-ciudad se diluye en un continuo que integra y conduce por gradaciones —como una especie de gran cadena- del ser urbano o continuum urbano-rural—, a los espacios circundantes. Nuevas posiciones académicas se refieren a la *neorruralidad* o al *neorruralismo* para explicar estos fenómenos de penetración de las lógicas urbanas en el medio rural. El espacio *rururbano* “puede asociarse a la de continuo rural urbano desarrollada por antropólogos como Redfield o Lewis, quienes contribuyeron a matizar la dicotomía que se expresa a través de la oposición campo-ciudad”(Barros, 1999). La nueva ruralidad se relaciona con la globalización, porque ambos tipos de procesos forman parte de un amplio conjunto de reestructuraciones neoeconómicas y reacomodos geopolíticos que tienen lugar a diferentes niveles (global, nacional, local), pero que en cada país o localidad del planeta, asumen sus propias peculiaridades (Llambí, 1994). Los espacios se reestructuran en función de intereses turísticos y ambientales; se diversifica el empleo y surgen redes de relaciones sociales no basadas fundamentalmente sobre relaciones agrarias. El concepto de periurbano es utilizado para denominar a las zonas de transición, en cuyo espacio se desarrollan actividades urbanas y agrícolas que compiten por el uso del mismo suelo. Las tensiones que esto provoca, se expresan en los modos de uso del suelo, en el contexto de un territorio caracterizado por su accesibilidad, el precio elevado de la tierra, la intensa competencia entre valores de producción, consumo y preservación. Las situaciones precedentes conducen a la necesidad de establecer formas de regulación del espacio rural a fin de establecer pautas de relación entre intereses y situaciones caracterizadas por la heterogeneidad y a fin de gestionar los posibles conflictos que surgen en la escala local (Barsky, 2013). El periurbano constituye un “territorio de borde” sometido a procesos económicos relacionados con la valorización capitalista del espacio, como consecuencia de la incorporación

real o potencial de nuevas tierras a la ciudad. Entre la diversidad de actores sociales intervinientes en estos espacios es posible distinguir a actores locales, neolocales (instalados recientemente) o extralocales (capaces de influir en los ámbitos rurales en cuestión). La Agricultura Urbana y Periurbana (AUPU), es destacada como de gran importancia por diferentes autores, en relación con sus múltiples funciones (dependiendo del contexto en el que se desarrolla y de las instituciones y organizaciones que la promocionan): producción de alimentos en zonas cercanas a los centros de consumo, aprovechamiento de recursos subutilizados, mejoramiento de las condiciones del hábitat urbano y mejora de las condiciones de vida de la población pobre, (Barsky, 2005; Benencia et al, 2009; Feito, 2005; Feito, 2014 y Feito y Barsky, 2020, entre otros). Aún no se la reconoce como una actividad viable y quienes la practican sufren múltiples limitaciones. El incremento sostenido de la pobreza urbana en el mundo transforma en estratégico el desarrollo de la AUPU, ya que los hogares concentrados en las grandes urbes destinan parte importante de sus ingresos a la alimentación. Una combinación de datos de censos nacionales, encuestas por hogares y proyectos de investigación señalan que hasta dos tercios de los hogares urbanos y periurbanos participan en la agricultura. El potencial de la AUP para una gestión urbana sostenible es cada vez más reconocido en todo el mundo y, en particular, en ciudades de América Latina y el Caribe por las organizaciones internacionales y nacionales que actúan en relación a ella³. En diversas ciudades del mundo se ha probado que la AUPU tiene un impacto positivo, especialmente en los sectores de menores recursos. Además de la producción para el autoconsumo, grandes cantidades de alimentos son producidos para abastecer otros sectores de la población.

La organización espacial de la Región Metropolitana de Buenos Aires a lo largo del siglo XX, se consolidó geográficamente en un punto central (ciudad capital), sucediéndose en sus alrededores series de suburbanizaciones sucesivas desarrolladas al compás de distintos procesos socioeconómicos (Benencia et al, 2009; Gutman et al.,1987). El Conurbano Bonaerense está

3. Recientemente, se vienen desarrollando iniciativas como son los programas regionales de la Red AGUILA, el Grupo de Trabajo de Ciudades en Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria y el Programa “Agricultura Urbana y Alimentación de las Ciudades de América Latina y el Caribe”, manejado por IDRC, PGU-ALC e IPES, los cuales aportan a la promoción y el desarrollo de la AU en las ciudades de la región.

integrado por veinticuatro partidos que rodean a la ciudad de Buenos Aires y otros seis partidos que intensifican su integración urbana con la ciudad de Buenos Aires. Según la proximidad a ella, los municipios pertenecen al primer, segundo o tercer cordón. Conviven barrios residenciales, junto a espacios periurbanos con posibilidades de desarrollo agro-productivo familiar, empresas, industrias, con un cinturón verde hortícola e intersticios productivos urbanos (Barsky, 2005). Las principales producciones agropecuarias en este territorio son hortalizas, frutas, frutas finas, productos y subproductos de granjas, flores, mezclas y sustratos, plantas ornamentales, arbustos, forestales, césped, hongos comestibles, animales para peletería fina, etc. Estas producciones son ofertados mayoritariamente en el mercado de consumo de la CABA, del Gran Bs. As, el interior del país y en algunos casos, en mercados externos (Pares, 2009).

La Matanza es el único municipio de la Región Metropolitana Oeste que integra los tres cordones de la megalópolis. Los procesos de periurbanización agrícola se producen en los partidos del segundo y tercer cordón, (que en La Matanza comprende zonas de las localidades González Catán, Virrey del Pino, 20 de junio). Esto se traduce en fraccionamiento del suelo, subdivisión y venta de campos, loteos para quintas, pymes y micropymes, emprendimientos agroproductivos con tecnologías intensivas y establecimiento de parques industriales. Son casi inexistentes las urbanizaciones cerradas. Existen escasos estudios socioeconómicos y ambientales sobre este partido, entre los pioneros estudios de Nemirovsky (2002 y 2005) sobre la colectividad portuguesa en áreas rurales y el más reciente de Parés (2009). Este distrito que es el municipio más grande del país, inicia un importante crecimiento demográfico constante a partir de la década del 30 con el aporte de distintas corrientes migratorias europeas y migraciones internas. En 2010 tenía 1.772.130 habitantes, distribuidos en un territorio de casi 326 km² (INDEC, 2010), en el cual conviven barrios residenciales, espacios periurbanos con producciones agropecuarias familiares, pymes y micropymes, así como fábricas de alta tecnología que producen para exportación como para el mercado interno. La crisis social cuyas manifestaciones se hicieran más notorias a partir de fines de los 90, tuvo en La Matanza una gravedad que condujo al gobierno municipal a encarar diversas medidas para paliar la emergencia. Se creó por ordenanza el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Social (IMDES) como ente autárquico (Battista, 2003), desarrollando junto con la Secretaría de

Desarrollo Social local, algunas iniciativas recientes para el sector agropecuario matancero (Battista et al, 2014). En 2002, La Matanza contaba con una superficie de aproximadamente 20.900 has de explotaciones agropecuarias, distribuidas en 72 establecimientos con límites definidos (INDEC, 2002). Esto se potencia si tomamos en cuenta la AUPU, no dimensionada correctamente en la información censal. Es destacable el reconocimiento de esta actividad por parte de varios organismos del gobierno nacional que a través de distintas iniciativas colocaron este tipo de producción en la agenda pública⁴. Conviven explotaciones familiares e intensivas, con una tercera parte del área rural (un 34%, es decir, alrededor de 4.000 hectáreas) sembradas con soja (Asiaín, 2013). El resto de la producción agropecuaria está preponderantemente en manos de pequeños y medianos productores hortícolas. El avance de la soja produjo un desplazamiento de quintas de frutas y verduras que abastecen al AMBA⁵, compitiendo con producciones agroecológicas. La Agroecología es una ciencia que estudia los principios sobre los cuales se debe basar el diseño de una agricultura sustentable (Altieri, 1983). Esta sustentabilidad implica el desarrollo de una agricultura ambientalmente sana, diversificada y que rompa el monocultivo como estrategia productiva, eliminando así la dependencia de insumos agroquímicos externos que son caros y ecológicamente peligrosos. A su vez, debe complementarse con políticas agrarias que busquen la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales y la eliminación de la pobreza rural; condiciones que permitirían pensar en la existencia de una agricultura sustentable desde lo económico, lo social y lo ambiental. La recurrencia a los lineamientos de la agroecología permitiría poner fin a las

4. En relación con ello, resulta importante destacar que en los últimos años se han creado, desde el sector público, una serie de organismos relacionados con la Agricultura Familiar y la Agricultura Urbana y Periurbana, tales como: la Subsecretaría de Agricultura Familiar, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Programa Nacional de Agricultura Periurbana, la Estación Experimental de Agricultura Urbana y Periurbana para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AUPU-AMBA) del INTA, y el Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF) del INTA.

5. Los campos utilizados para los cultivos de soja requieren superficies más amplias: entre 30 y 50 Ha. Las zonas sembradas con soja se encuentran camino a Cañuelas, sobre la Ruta Nacional 3 y sus alrededores, a partir del kilómetro 38. En la mayoría de los casos, se trata de superficies que se operan bajo el sistema pooles de siembra y llegan hasta las 200 hectáreas.

crisis alimentarias y ayudar a afrontar los retos vinculados a la pobreza y al cambio climático. El informe anual 2011 de Naciones Unidas⁶, consideraba que: (i) la evidencia científica demuestra que la agroecología supera al uso de los fertilizantes químicos en el fomento de la producción de alimentos, sobre todo en los entornos desfavorables donde viven los más pobres; (ii) las inversiones deben concentrarse menos en el acceso a pesticidas y fertilizantes químicos y más en la enseñanza de prácticas que les permitan a los agricultores depender menos de estos elementos y producir más con menos; (iii) los agricultores pequeños podrían duplicar la producción de alimentos en una década si utilizan métodos productivos ecológicos.

El objetivo general del proyecto aquí presentado, sobre la base de la profundización de la indagación sobre el rol desempeñado por la Agricultura Familiar para la provisión de alimentos sanos y de proximidad para las comunidades locales, fue relevar el estado de situación del sector agropecuario en el Municipio de La Matanza, identificar y describir las políticas públicas existentes y proponer lineamientos de políticas públicas para el distrito amigables con el medioambiente. La pertenencia de los miembros del Grupo Responsable a universidades del Conurbano Bonaerense, con fuerte trabajo territorial⁷, hizo que también nos propusiéramos elaborar propuestas para las políticas públicas municipales y contribuir a optimizar estrategias de intervención que consideren el territorio como estructura activa de los procesos de desarrollo, al tiempo que fomentar la producción agroecológica (entendida como aquellas modalidades productivas que busca maximizar la producción minimizando el uso de insumos externos, respetando y poniendo en valor la cultura local y protegiendo el medioambiente). El planteo de nuestra investigación pretendía abordar herramientas para pensar en una concepción de las políticas públicas integral, que trascendiera la esfera de una dependencia municipal y que pudiera articular acciones con otras jurisdicciones y sectores de la comunidad. Entre los objetivos específicos nos propusimos: a) relevar en qué medida inciden las políticas locales en la configuración de la producción agropecuaria del

6. <http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/detail/171954.html>

7. Los integrantes del Grupo Responsable fueron: Dra María Carolina Feito (Investigadora Responsable), Lic. Susana Battista, Dr Mariano Jager (los tres de la Universidad Nacional de La Matanza) y Dr Andrés Barsky (Universidad Nacional de Gral Sarmiento).

partido: I) analizando acciones y/o políticas públicas para el sector; II) identificando desde qué enfoque/s se concibe el desarrollo en dichas políticas y III) descubriendo percepciones de los actores sociales participantes del sector y b) realizar un análisis económico de la incidencia de la producción agropecuaria actual y su proyección: I) identificando tipos y metodologías de producción, experiencias de transición agroecológica, canales de comercialización y tecnologías utilizadas, valor agregado y destinos de la producción y II) estudiando la posibilidad de existencia de un patrón de distribución espacial de la producción respecto del consumo y viceversa.

Para llevar adelante estos objetivos, se utilizó una metodología de trabajo multidisciplinaria que combinó aspectos de la Sociología, la Geografía, la Antropología y la Economía (disciplinas de formación de base del Grupo Responsable), que permitió abordar con mayor profundidad y captar los aspectos multidimensionales de nuestro objeto de estudio. Nuestra unidad de análisis fueron los actores participantes del sector agropecuario matancero y/o que residan o desarrollen sus actividades en territorio rural del partido. Utilizamos un enfoque cuali-cuantitativo de investigación y apelamos a fuentes primarias y secundarias de información.

Se realizó un relevamiento de información secundaria en estadísticas municipales y provinciales del Ministerio de Asuntos Agrarios, y del INDEC (Censo Agropecuario, Censo Nacional de Población y Vivienda, Encuesta Permanente de Hogares); así como relevamiento bibliográfico de estudios sobre el partido. Se realizó también trabajo de campo etnográfico con *entrevistas en profundidad* a: (i) funcionarios municipales; (ii) técnicos y funcionarios de INTA que trabajan con productores del partido; (iii) productores tradicionales y nuevos; (iv) agentes extralocales instalados recientemente en zonas rurales, o relacionados con actividades económicas rurales en el partido; así como *observación participante* en las fincas y en reuniones de organizaciones de productores, para recopilar información sobre: historia y caracterización territorial del partido; diversidad de agentes socioeconómicos; políticas locales; asociativismo; situación de exclusión y conflictos; percepciones de los actores sociales. Uno de nuestros mayores aportes fue la encuesta cuantitativa realizada a productores agropecuarios matanceros, dado que desde el Censo Agropecuario de 2002, no había antecedentes de un estudio de tamaño alcance territorial en el distrito de La Matanza.

Organizamos el material en seis capítulos.

En el Capítulo I, *María Carolina Feito* presenta una caracterización de los productores agropecuarios matanceros, mediante resultados de la encuesta realizada en el marco del proyecto, demostrando que pueden considerarse dentro de la categoría de Agricultores Familiares.

En el Capítulo II, *Mariano Jäger* muestra, utilizando resultados de la misma encuesta, algunos aspectos económicos de la producción de esta agricultura familiar matancera, apuntando particularmente al acceso a los mercados; las condiciones de producción; la descripción de la intensidad de capital; la sanidad de la producción y al apoyo técnico recibido. El lector encontrará información similar a la expuesta en el capítulo anterior, ya que son utilizados los mismos datos provenientes de la encuesta realizada en el marco del proyecto, analizándolos desde un abordaje diferente.

En el Capítulo III, *María Abelina Acosta Felquer* presenta un marco teórico con la discusión sobre las nociones de desarrollo, incluidas las de desarrollo rural, visto como un proceso conflictivo en búsqueda de la autonomía, a la vez que se conceptualiza la política pública, fundamental para entender cómo se encara la gestión del municipio de La Matanza y para desarrollar el objetivo general del proyecto de investigación que originó este libro.

En el Capítulo IV, *María Carolina Feito* adopta una perspectiva antropológica de observación de las prácticas y de los intereses en conflicto, analizando la implementación de los programas de desarrollo en el distrito La Matanza e identificando alternativas de gestión para la agricultura urbana y periurbana, particularmente los agricultores familiares.

El Capítulo V, realizado por *Andrés Barsky* y *Joaquín Pérez Martín*, muestra un análisis histórico acerca de cómo se llevó a cabo la institucionalización y puesta en funcionamiento del mayor mercado mayorista de la Argentina, el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), dando cuenta de los alcances y limitaciones que ha encontrado esta iniciativa desde el momento de su nacimiento como proyecto en el papel hasta su puesta en funcionamiento y posterior trayectoria, con una reflexión de cierre acerca del potencial de coordinación para ordenar el abasto metropolitano que aún conserva este organismo, el cual continúa siendo uno de los espacios de transacción comercial que mayor volumen de frutas y hortalizas opera en el mundo (1,36 millón de toneladas anuales en 2019), constituyendo una referencia ineludible en precios y volumen para el mercado nacional. Máxime en un contexto de accesibilidad alimentaria en situación crítica, como es la que se

registra actualmente en la actual coyuntura, agravada por el surgimiento de la pandemia del Covid-19.

Finalmente, en el Capítulo VI, *Alejandra Ricca, María Carolina Feito y Noelia Vera* presentan una experiencia de reconversión de feriantes, dado que por la normativa del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) dictado por el gobierno nacional desde el 20 de marzo de 2020, se suspendió la realización de las ferias presenciales, con lo cual un equipo de trabajo desprendido del proyecto, puso en práctica la iniciativa de distribución de canastas de productos elaborados artesanalmente, con entregas periódicas a domicilio en CABA y retiro en puntos determinados del Periurbano Oeste. Esta iniciativa realizada con el apoyo de la Estación Experimental Agropecuaria Area Metropolitana de Bs As (EEA AMBA) del INTA, se denomina “La Feria con Vos” y es definida como un Mercado Virtual de Productores de la Economía Popular de Ferias de zona oeste GBA. Posee una página de Facebook que es utilizada para difusión, junto a otras redes de afinidad y profesionales.

La prolongación no buscada de los plazos de ejecución del proyecto y la coincidencia de este tiempo con la aparición de la pandemia de Covid 19, llevó a que revalorizáramos el encuadre propuesto en nuestro trabajo. La consolidación de la identidad del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como espacio de elaboración y ejecución de políticas públicas, valorizó la necesidad de conocer los circuitos productivos y de comercialización de productos alimenticios. Tomaron mayor relevancia el conocimiento y la consideración de los circuitos de circulación y transporte de alimentos frescos, la trazabilidad de los productos comercializados y la incidencia de estos aspectos en la elaboración de normas para manipulación y traslado de alimentos.

Los resultados de este proyecto aquí presentados tendrán impacto positivo a nivel local y regional, ya que generarán herramientas y propuestas para una agenda pública de desarrollo para los gobiernos locales, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Para la especialidad del problema y los objetivos a tratar, se produjo conocimiento e información decisiva que no existía, ya que no hay estudios rurales sobre La Matanza focalizados a generar política pública.

Agradecemos profundamente a todos aquellos agricultores/as, así como a los técnicos/as extensionistas de la EEA AMBA INTA y a los funcionarios/as municipales, de la provincia de Bs As y nacionales, que nos recibieron

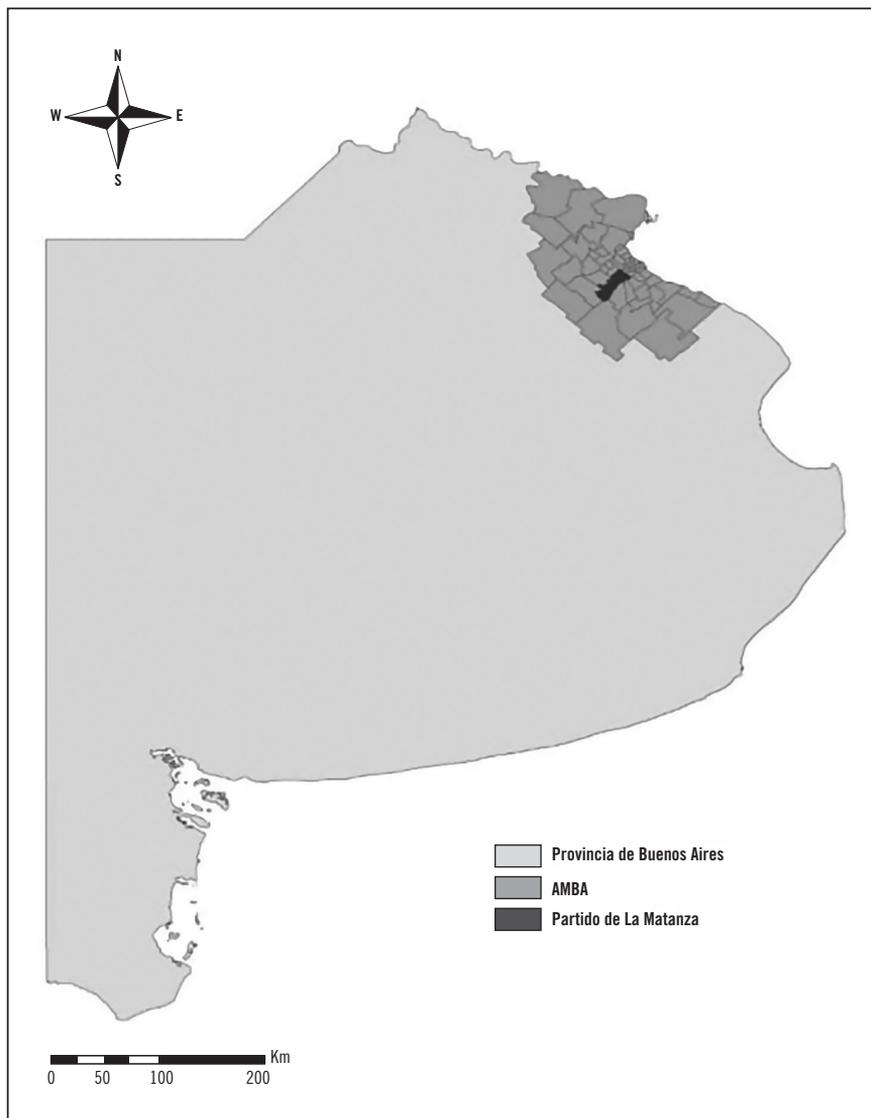
anónima y desinteresadamente, por su predisposición durante la realización de nuestro trabajo de campo, así como a los técnicos que permitieron la realización de la encuesta cuantitativa: en el armado del cuestionario (Alejandra Pérez y Alicia Lezcano), en el levantamiento de datos (Camilo Polti †, Facundo Cavanna, Leonardo Motta) y en el procesamiento final (Andrea Lorenzetti y Pablo Tiscornia). Un agradecimiento especial a la Dra Beatriz Giobellina, quien aceptó gentil y desinteresadamente prologar este libro; a la Dra Susana Novick, quien aportó los hermosos poemas para algunas de las fotos aquí publicadas; a María Sol Ciccioli, a Juan Pablo Lepore y a la pequeña Sofía Macarena Torrejón, quienes nos permitieron utilizar sus fotos para la tapa y los Capítulos V y VI respectivamente (el resto son de autoría de la Coordinadora del libro), y a Rocío Scarso, quien realizó la edición fotográfica de todas las fotos del libro; a María Abelina Acosta Felquer, integrante del Grupo Colaborador del PICT, quien elaboró los precisos e ilustrativos mapas que presentamos a continuación, que ubicarán al lector en el espacio territorial analizado en los distintos capítulos de este libro. Un agradecimiento especial al Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) que financió este trabajo, a la Universidad Nacional de La Matanza, institución donde realizamos la investigación, y a los editores Pablo Somma, Javier Alfredo Vázquez y Ezequiel Sebastián Vázquez de Rio Cultura Ediciones, quienes confiaron en nuestro trabajo para lograr esta publicación.

Mapa N° 1
Localización del Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-
en la provincia de Buenos Aires, República Argentina.



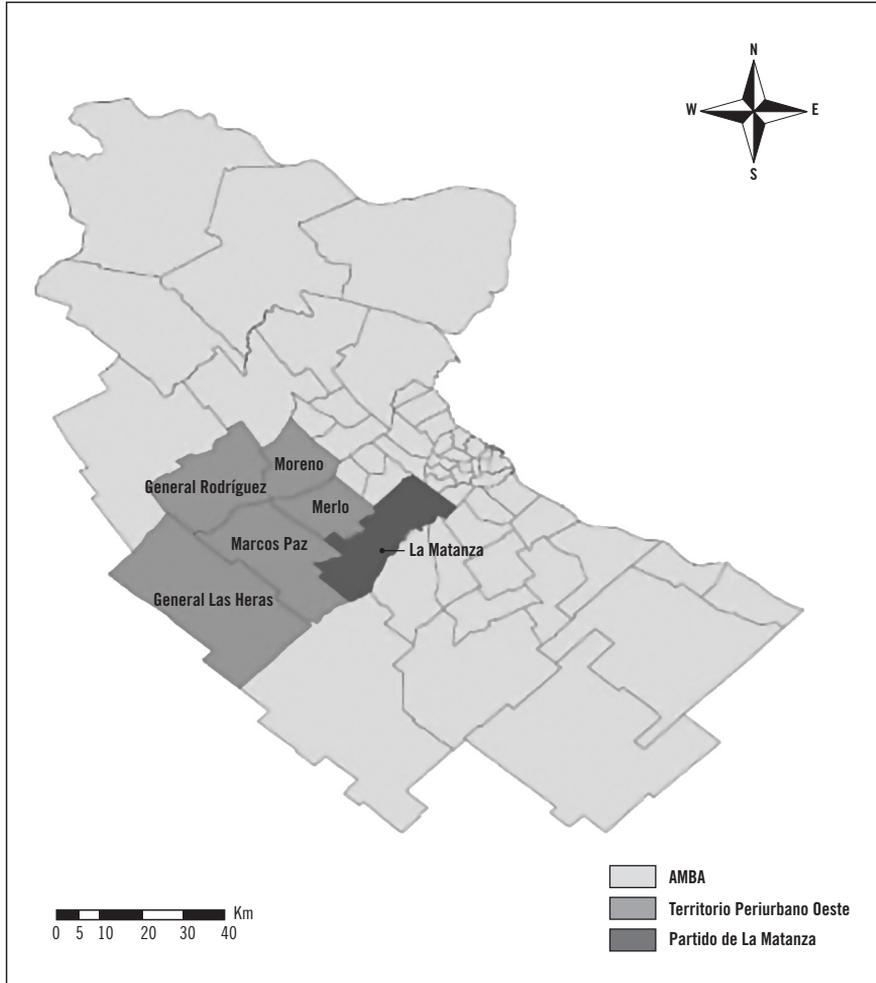
Fuente: María Abelina Acosta Felquer en base al Instituto Geográfico Nacional. 2020.
<https://www.ign.gov.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG>.
El shape de los países de Sudamérica fue descargado de <https://tapiquen-sig.jimdofree.com/descargas-gratuitas/sudam%C3%A9rica/>

Mapa N° 2
Localización del partido de La Matanza en el Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-
en la provincia de Buenos Aires.



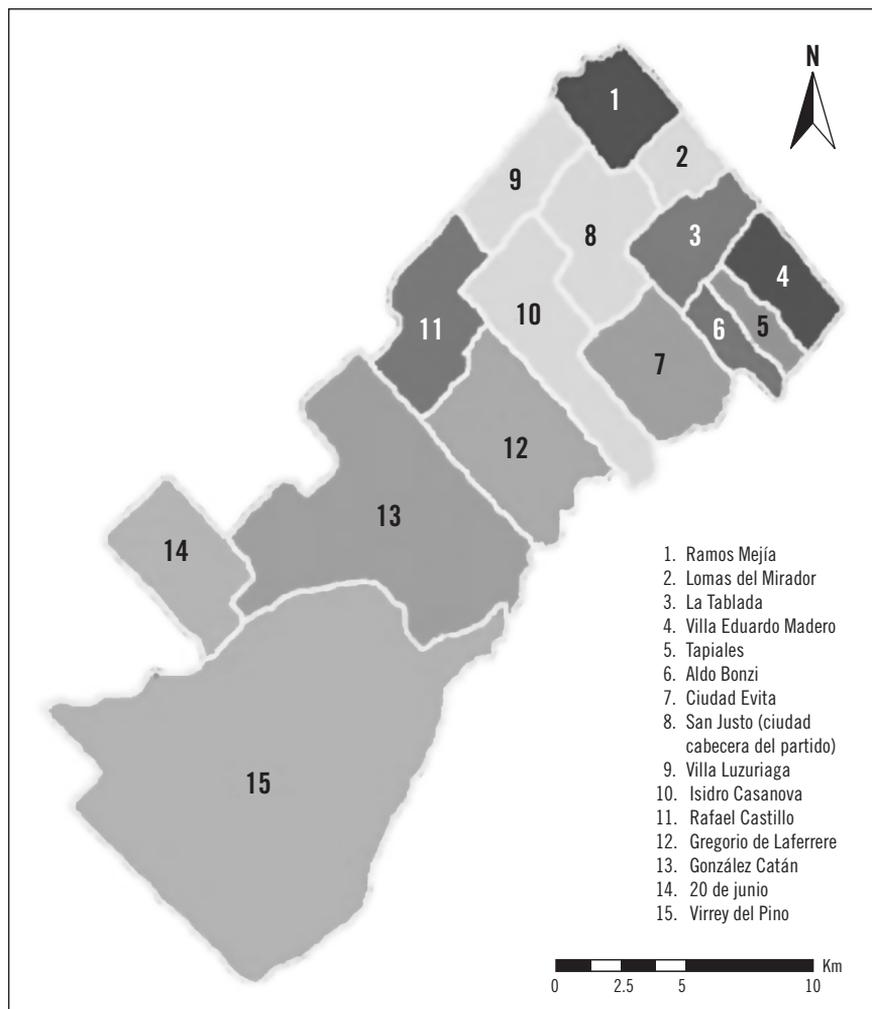
Fuente: María Abelina Acosta Felquer en base al Instituto Geográfico Nacional. 2020.
<https://www.ign.gov.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG>.

Mapa N° 3
Localización del partido de La Matanza dentro del Territorio Periurbano Oeste en el Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-.



Fuente: María Abelina Acosta Felquer en base al Instituto Geográfico Nacional. 2020.
<https://www.ign.gov.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG>.

Mapa N° 4
Localidades del partido de La Matanza.



Fuente: María Abelina Acosta Felquer en base al Atlas del Conurbano Bonaerense (<http://www.atlasconurbano.info/pagina.php?id=216>)

Bibliografía

- Alemaný, C. (2003).** Apuntes para la construcción de los períodos históricos de la Extensión Rural del INTA. En Thornton, R. & Cimadevilla, G. (Ed.), *La Extensión en debate. Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur*: (pp.137- 171). Buenos Aires. Ediciones INTA.
- Alfaro, María Inés (2000)** “Modalidades de intervención estatal y actores sociales en el mundo rural: el caso de Santiago del Estero”. Tesis de Maestría en Administración Pública, Mimeo. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas, UBA.
- Asiaín, Andrés (2013).** “González Catán y Virrey del Pino, la soja matancera hace su aparición”. En: Diario NCO <http://noticiasconobjetividad.wordpress.com/2013/03/27/gonzalez-catan-y-virrey-del-pino-la-soja-matancera-hace-su-aparicion/>
- Altieri, M. (1983)** “Agroecología, Bases Científicas de la Agricultura Alternativa”. División de Control Biológico. Universidad de California, Berkeley.
- Barros, C. (1999)** De rural a rururbano: Transformaciones territoriales y construcción de lugares al sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires. *Scripta Nova*, I Coloquio Internacional de Geocrítica, 1999, vol. 51, N° 45.
- Barsky, A. (2005).** El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires. *Scripta Nova*, Vol. IX, núm. 194 (36). Recuperado el 26/06/2020 de: <https://bit.ly/3i8iqvH>
- Barsky, Andrés (2013)** “Gestionando la diversidad del territorio periurbano desde la complejidad de las instituciones estatales. Implementación de políticas públicas para el sostenimiento de la agricultura en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires (2000-2013)”. Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, España.
- Battista, Susana C. (2003)** “Municipio y promoción del emprendedorismo : el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Social (IMDES) en el Partido de La Matanza ”. En: Actas Congreso “ Emprendedorismo y Desarrollo Local ”, Universidad Provincial del Sudoeste/Universidad Nacional del Sur. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Pigüé 21 y 22 de agosto de 2003.
- Battista, Susana y otros (2014)** “La potencialidad del sector agrícola matancero para un proceso de desarrollo sustentable: actualidad, antecedentes y perspectivas futuras”, Informe de Avance Proyecto PROINCE, UNLaM.

- Benencia, R. y otros (1997):** "Area Hortícola Bonaerense. Cambios en la producción y su incidencia en los sectores sociales". Ed La Colmena, Bs As.
- Benencia, R.; Quaranta, G. y Souza Casadinho, J. (comps.) (2009)** "Cinturón Hortícola de la Ciudad de Buenos Aires. Cambios sociales y productivos". Ed CICCUS, Buenos Aires.
- Bourdieu, P. (1988).** La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.
- Escobar, A. (1995).** Encountering development. The making and unmaking of the third world. Princeton: Princeton University Press.
- Feito, M C. (2005)** "Antropología y desarrollo. Contribuciones del abordaje etnográfico a las políticas sociales rurales. El caso de la producción hortícola bonaerense". Buenos Aires: Ed La Colmena.
- Feito, MC (2014).** "Ruralidades, agricultura familiar y desarrollo. Territorio del periurbano norte de la provincia de Buenos Aires". Editorial La Colmena, Bs As.
- Feito, MC y Barsky, A. (2020):** Periurbano (1080-2020). En: Diccionario del Agro Iberoamericano, 2da edición. Ed. Tesseo Press, Bs As.
- Guber, Rosana. (2001)** "Etnografía. Método, campo y reflexividad". Buenos Aires: Norma.
- Gutman, P.; Gutman, G., y Dascal, G. (1987)** "El campo en la ciudad: la producción agrícola en el Gran Buenos Aires", CEUR, Bs As.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2002) Censo Nacional Agropecuario
- INDEC (2010) Censo Nacional de Población y Vivienda
- INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) (2001) "Propuesta para la transformación y fortalecimiento del Sistema de Extensión y Transferencia de Tecnología", Buenos Aires: Ediciones INTA.
- INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2012)** *Agricultura Urbana y Periurbana en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Creación de la estación Experimental Agropecuaria AMBA.* Bs As: Ed. INTA. <https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-creacin_eea_amba.pdf>
- Long, N. (1992)** "From paradigm lost to paradigm regained? The case for an actor-oriented sociology of development". En: Long N. Y Long A. (1992). *Battlefields of knowledge. The interlocking of theory and practice in social research and development.* UK: Routledge.
- Llambí, L (1994)** "Globalización y Nueva Ruralidad en América Latina. Una agenda teórica para la investigación», en: *Revista Latinoamericana de Sociología Rural*, 2.Valdivia.

Parés, Gonzalo (2009) “Las funciones de la agricultura urbana y periurbana en La Matanza, desde la óptica de los propios agricultores, en la primera década del s.XXI”. Tesis de Maestría en Desarrollo Local. Universidad de Gral. San Martín/Universidad Autónoma de Madrid.

Nemirovsky, Ada (2002) “Tendencias en la dinámica social del partido de La Matanza (1900-2000)” Documento de Trabajo N° 88 Universidad de Belgrano. Disponible en la red: http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/88_nemirovsky.pdf

Nemirovsky, Ada (2005) “Tradicionalismo y modernización. Las quintas portuguesas del partido de La Matanza”. Documento de Trabajo N° 134, Universidad de Belgrano. Disponible en la red: http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/134_nemirovsky.pdf

Viola Recasens, Andreu (2000) “La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo”. En: Viola, Andreu (comp.) Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina. Barcelona: Editorial Paidós Studio.

Huerta

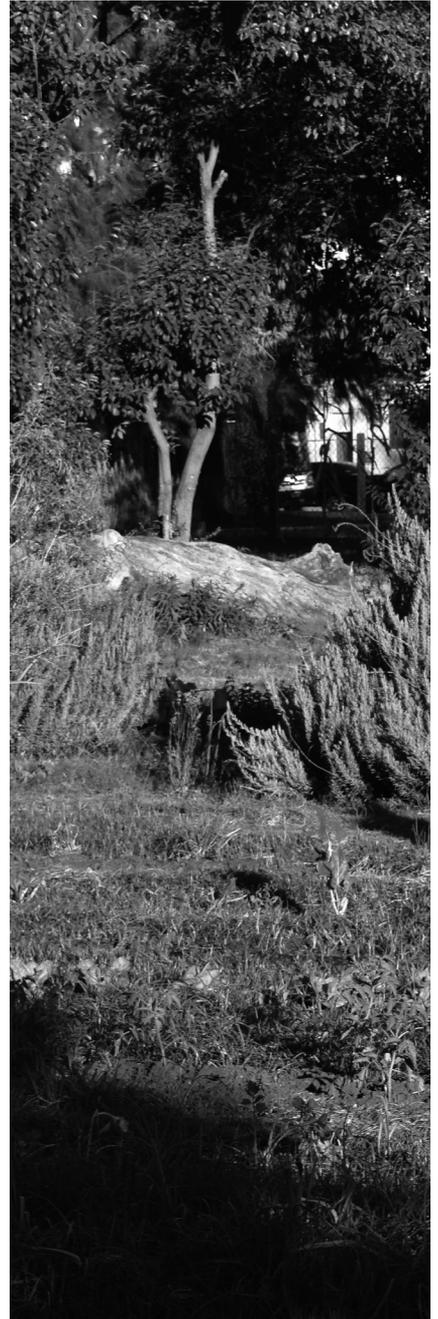
Ada lleva en sus manos
colibríes menta y jengibre
cosecha húmeda
de abril y otoño

Una tierra azul se abre
sostiene su paso
hacia una pava caliente
que murmura y silba

Ada no tiene miedo
conoce a sus plantas
con ellas dirime
tormentas y escamas

La huerta bordada
recoge salvia cedrón y brisas
el humus amanece espiga
cuando el aire descansa.

Poema: **Susana Novick**
Foto: **María Carolina Feito**







CAPÍTULO I

CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PARTIDO DE LA MATANZA

María Carolina Feito⁸

1. INTRODUCCIÓN

La Agricultura Urbana y Periurbana (en adelante, AUPU) se desarrolla al interior de las ciudades y en territorios circundantes, ubicación que deriva en conflictos por uso de tierra, agua y capital humano. La Agricultura Familiar (en adelante, AF) es un actor significativo en el periurbano bonaerense, la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas, la agricultura es la principal ocupación y fuente de ingresos del grupo familiar y la familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo.

El estudio de la temática agropecuaria en La Matanza no posee mucha tradición académica y las producciones que allí se asientan, responden mayormente a esfuerzos e iniciativas privadas o de organizaciones sociales. El sector agropecuario matancero tiene escasa vinculación con el resto de la economía del partido y es incipiente el reconocimiento por parte de las políticas públicas locales del carácter económico de estas actividades, particularmente de la AF. Un tercio de la superficie del municipio está dedicado

8. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada por la autora en las XI Jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales argentinos y latinoamericanos (Bs As, del 5 al 8 de noviembre de 2019), agradecemos los comentarios de Roxana Albanesi a esta primera versión.

a la producción agropecuaria. Sin embargo, la información cuantitativa disponible más confiable es la del Censo Nacional Agropecuario CNA 2002, que obviamente resulta desactualizada como herramienta para diseño de políticas públicas⁹. La importancia de relevar estas producciones, históricamente invisibilizadas por las distintas gestiones del gobierno local (Battista et al, 2017), nos llevó a realizar una encuesta cuantitativa que nos permitiera una descripción socioeconómica de los productores, ensayando posibles explicaciones para estos fenómenos.

Caracterizamos a productores agropecuarios de un partido muy poco estudiado¹⁰, presentando resultados de una encuesta realizada a productores agropecuarios de las localidades de Virrey del Pino, González Catán y 20 de junio, que aporta información cuantitativa novedosa y actualiza la escasa existente, tan necesaria para análisis académicos y diseño e implementación de políticas. Analizamos diversas variables: condición jurídica; tenencia y uso de la tierra; familia y nivel educativo; economía; construcciones, instalaciones y mejoras; maquinarias, equipos y vehículos; vivienda, población y mano de obra; modalidades de gestión; asociativismo; comercialización.

9. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realizó un nuevo CNA entre septiembre 2018 y marzo 2019, cuyos resultados preliminares se publicaron en noviembre de 2019, pero son fuertemente cuestionados, dado que por primera vez se utilizaron para el relevamiento nuevas herramientas informáticas, basando el operativo en el reemplazo de los cuestionarios, mapas y planillas de seguimiento en papel por medios electrónicos (tableta, aplicación móvil, sistema de gestión informático), que presentaron numerosos problemas de implementación. Ver al respecto: Paz, Raul y Jara, Cristian (2014). *Censos Y Registros De La Agricultura Familiar En Argentina: Esfuerzos Para Su Cuantificación*. En: Eutopía - Revista de Desarrollo Económico Territorial · December 2014. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/275223310>.

10. Son clásicos los estudios sobre los productores de La Matanza realizados por Ada Svetlitz de Nemirovsky en los años 80 y 90; otra de las pocas fuentes de información sobre el partido es la tesis de maestría de Gonzalo Parés de 2009, así como un informe del INTA (2012) que toma gran parte de esa tesis, y articula información dispersa de registro de productores del SENASA, Censos Hortiflorícolas provinciales y datos relevados por los técnicos de terreno de la institución.

2. CONCEPTUALIZANDO EL PERIURBANO Y LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA: IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

El estudio del periurbano supone encarar un complejo territorial que expresa una situación de interfaz campo-ciudad. De difícil definición conceptual y delimitación, se trata de un territorio inestable en cuanto a la constitución de redes sociales, en el marco de una gran heterogeneidad en los usos del suelo (Barsky, 2005; Feito y Barsky, 2020). La producción agropecuaria allí realizada forma parte del concepto de AUPU. Sintetizando distintas definiciones existentes, la misma puede entenderse como la producción agropecuaria, su procesamiento y comercialización, realizados en entornos urbanos y periurbanos. Diversos autores¹¹ destacan sus posibles beneficios: ahorro energético (por las cortas distancias de traslado de productos), provisión de servicios ecosistémicos, estructuración del paisaje, preservación de tejido denso de unidades productivas y áreas verdes, encuadre de procesos de urbanización, mejora de acceso y disponibilidad de alimentos frescos en áreas urbanas, que permite aumentar la seguridad alimentaria¹². Por otra parte, en un contexto de crecimiento de los espacios urbanos y desde el punto de vista de su ordenamiento territorial, la AUPU contribuye a la estructuración del paisaje. Tiene el potencial de vincularse con modelos de producción sustentables en un sentido integral, como

11. Andrés Barsky, Pablo y Graciela Gutman, Horacio Bozzano Roberto Benencia, Guillermo Hang, Roberto Ringuet, Pedro Tsakoumagkos, Jorge Morello, Silvia Mateucci, Javier Souza Casadinho, Ada Svetlitz, Ana María Bocchicchio, Germán Quaranta, Cynthia Pizarro, Beatriz Nussbaumer, Matías García, Julie Le Gall y la autora, entre otros, realizaron diversos estudios sobre la agricultura periurbana bonaerense (Feito y Barsky, 2020).

12. El concepto de Seguridad Alimentaria es definido como “ un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”. FAO (2011) *El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2011*. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Existen cuatro dimensiones características de la Seguridad Alimentaria: disponibilidad (existencia de alimentos en cantidad suficiente); acceso (recursos monetarios suficientes para acceder a los alimentos o a los recursos apropiados para producirlos); utilización (se garantiza a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica); estabilidad (disponibilidad sin grandes variaciones estacionales ni de precios que pongan en riesgo el acceso a los alimentos en períodos de crisis económica. Carballo, Carlos. (2014) “*Soberanía alimentaria y producción de alimentos. Situación actual y desafíos para la transición*”. En Seguridad y soberanía alimentaria (13-38). Buenos Aires: Akadia.

es la agroecología, como modo de producción que busca maximizar la producción minimizando uso de insumos externos, respetando y poniendo en valor la cultura local y protegiendo el ambiente, pagando salarios justos¹³. Se busca desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumos de energía, lo que conlleva la diversificación agrícola intencionalmente dirigida a promover interacciones biológicas y sinergias benéficas entre los componentes del agroecosistema, de tal manera que permitan la regeneración de la fertilidad del suelo y el mantenimiento de la productividad y la protección de los cultivos (Altieri, 2002). Sin embargo, la AUPU no es sinónimo de “producción sustentable”, ya que puede coexistir en ella la agricultura familiar (AF) con producción agroindustrial extensiva asociada a un paquete tecnológico que utiliza intensivamente agroquímicos. También puede generar situaciones conflictivas como la tenencia de la tierra, revalorizada por intereses inmobiliarios residenciales que desplazan la producción agropecuaria (Feito, 2019^a).

Es relevante la participación de la AF en la denominada AUPU. La AF en Argentina es “una categoría en construcción. Su definición y sus alcances son objeto de múltiples negociaciones en las que intervienen científicos sociales, técnicos, administradores y organizaciones agrarias” (Schiavoni, 2010: 43). Definimos este concepto (objeto de intensos debates) articulando diferentes autores, como un tipo de producción en la cual la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas. La agricultura es la principal ocupación y fuente de ingresos del grupo familiar y la familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo. La racionalidad del productor familiar es muy diferente a la lógica empresarial, ya que tiene como finalidad la reproducción de las unidades domésticas, distinguidas por el perfil familiar de la unidad, la fuerza del trabajo familiar, la mercantilización parcial de la producción, la indivisibilidad del ingreso familiar, la preferencia por tecnologías intensivas en mano de obra y la pertenencia a un grupo territorial; siendo en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias

13. La agroecología es un modo de producción que busca maximizar la producción minimizando uso de insumos externos, respetando y poniendo en valor la cultura local y protegiendo el ambiente, pagando salarios justos. Se busca desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumos de energía, lo que conlleva la diversificación agrícola intencionalmente dirigida a promover interacciones biológicas y sinergias benéficas entre los componentes del agroecosistema, de tal manera que permitan la regeneración de la fertilidad del suelo y el mantenimiento de la productividad y la protección de los cultivos (Altieri, 2002).

(Schejtman, 1983; Schiavoni, 2010; Feito, 2014; Obstchatko, Foti y Roman, 2006; FONAF, 2006).

3. GEODIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES EN LA MATANZA

La Matanza es el Municipio más grande del país: en sus 325,71 km² de superficie, tenía en 2001, 1.255.288 habitantes, cifra que creció en 2010 a 1.775.816 habitantes, implicando una variación relativa de 41,5%. Las localidades de Virrey del Pino y González Catán son las que más crecieron en el último decenio, con el 19,5% de la población del partido, y en ellas se ubica la mayoría de AUPU. Este distrito integra el Territorio Periurbano Oeste (junto con otros cinco del Área Metropolitana de Buenos Aires¹⁴) donde las actividades productivas se desarrollan en estrecha relación con las áreas urbanas, constituyendo un territorio de producción alimentaria de proximidad que posee un potencial de desarrollo para una producción sustentable, mediante abastecimiento de productos frescos, saludables y accesibles para el consumo popular (Feito, 2019^a). Es el único distrito que, geográficamente, comprende espacios entre el primer y tercer cordón del AMBA¹⁵.

14. Estos distritos son: Marcos Paz, Moreno, Merlo, Gral Rodríguez y Gral Las Heras.

15. Actualmente la primera corona incluye los partidos más cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un tejido urbano consolidado, densidad de población elevada, población envejecida y sectores de clase media amplios y mayor densidad de centros comerciales e industrias. En la segunda corona, los partidos tienen un tejido urbano en consolidación, con espacios vacantes entre corredores, crecimiento demográfico acelerado, baja densidad de población pero altos índices de hacinamiento y necesidades básicas insatisfechas, población joven y sectores de clase media-baja y baja amplios. Las redes cloacales y de agua potable no llegan al 5% de la población de cada partido, evidenciando ausencia de gestión integrada. Este cordón explica la mayor parte del crecimiento vegetativo absoluto del AMBA. Aquí hay una pobreza estructural profunda que requiere urgente intervención urbanística y económica en estas ciudades tipo dormitorio. Los partidos de la tercera corona tienen procesos de fraccionamientos productivos, loteos para quintas, emprendimientos agroproductivos con tecnologías intensivas, parques industriales, urbanizaciones cerradas, que transforman el medio rural a semi-rural y este último a urbano. Geográficamente, llega a unos 90 kilómetros del centro de la ciudad y abarca la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) y ciudades satélites de entre 50 y 200 mil habitantes (Barsky, 2013).

El sector rural abarca la tercera parte del territorio matancero. Las zonas rurales se encuentran fundamentalmente en las localidades de Virrey del Pino, Gregorio de Laferrere, González Catán y 20 de Junio. Sin embargo, el distrito fue conocido históricamente por la importancia de su sector industrial, por ello la inclusión del sector agropecuario en las políticas públicas requiere su visibilización social y política (Battista et al, 2015).

El estudio de este partido se justifica por el desarrollo, historia y nivel de participación social de la AUPU, en la extensión geográfica y en la diversidad de situaciones sociales. Existe un contexto de desigualdades sociales, desempleo, precarias condiciones laborales, tendencia a concentración espacial de sectores pobres y debilitamiento de lazos comunitarios, compartiendo muchos de estos rasgos con la gran ciudad. Esta configuración social y geográfica es determinante de las posibilidades de desarrollo local (Parés, 2009).

La estructura social agraria de La Matanza se caracteriza por un desequilibrio en el control de la tierra: un sector de medianos y grandes propietarios hortícolas que domina la producción y comercialización, comprando o arrendando parcelas a pequeños quinteros que abandonaron (Svetlitz de Nemirovsky, 2002). De acuerdo al CNA 2002, existían en aquel momento en La Matanza sólo 72 explotaciones agropecuarias en 20.900 has.

La tesis de maestría de Gonzalo Parés (2009) es uno de los pocos trabajos que cuantificaron la producción agropecuaria del partido, donde más de 6.000 familias realizaban actividades agropecuarias, como respuesta a un contexto de desocupación, pobreza y debilidad del estado. En el territorio de La Matanza, Parés encontró asentamientos urbanos agregados, asentamientos urbanos dispersos, pastizales y áreas de cultivo, situándose las más distantes a áreas urbanas a unos 8 km (Correa Ayram, 2005, citado en Parés, 2009). La actividad agropecuaria era, en aquel momento, en general de tiempo parcial, combinándose con actividades urbanas. En el mismo trabajo se destaca que en 2008, la cantidad de explotaciones hortícolas y florícolas del partido era de 32 establecimientos, ocupando 1.072 has de las cuales 917 eran hortícolas, 13 florícolas y 138,5 de viveros. Las unidades de agricultura urbana (AU) (huertas o granjas) contabilizaban 3.250 familiares, 54 escolares y 24 comunitarias (Parés, 2009). Las producciones más importantes desde el punto de vista de los volúmenes producidos eran la horticultura orgánica, la cría de aves y conejos y el cultivo de frutales

(Informe 2008 Prohuerta INTA, citado en Parés, 2009). Existían otras como cultivo de aromáticas y medicinales, reciclado de materia orgánica, cría de cerdos, ovejas y vacas y cultivo de forraje para alimentación animal. La mayor cantidad de actividades de agricultura urbana eran huertas familiares realizadas en terrenos privados (5.182 unidades familiares sobre un total de 5.280). Le seguían en importancia las huertas escolares y luego las comunitarias (realizadas por grupos de vecinos, asociaciones civiles, asociaciones de productores urbanos, hospitales, cárceles y centros de rehabilitación), unas 30, sumando en total 5.280 unidades de AU. Un 10% de las unidades de AUPU también realizaban actividades de granja. En el año 2012, funcionaban 3.377 huertas (3.303 familiares, 67 escolares y 7 comunitarias), según información del Programa ProHuerta INTA (INTA, 2012). Desde principios de la década de 2010 conviven explotaciones familiares e intensivas, con una tercera parte del área rural (un 34%, es decir, alrededor de 4.000 hectáreas) sembradas con soja, que desplazaron las quintas de frutas y verduras (Asiaín, 2013). El resto de la producción agropecuaria está preponderantemente en manos de pequeños y medianos productores hortícolas. Se destacan los cultivos hortícolas y frutilla, por magnitud, nivel de tecnificación y participación en el mercado. Un informe del INTA contabiliza 32 establecimientos que ocupan 1.072 has (INTA, 2012). Los sistemas productivos en este territorio son históricamente muy variados: hortalizas, frutas, frutas finas, productos y subproductos de granjas, flores, mezclas y sustratos, plantas ornamentales, arbustos, forestales, césped, hongos comestibles, cría de animales de granja, animales para peletería fina, etc. Se venden mayoritariamente en la ciudad de Bs As y otras del periurbano, el interior del país y, en menor medida, se exportan. Muchos productores se dedican a actividades de procesamiento de producción primaria (conservas y alimentos preparados en base a frutas y hortalizas), siendo el principal destino de estas actividades el autoconsumo (tanto familiar, como comunitario). Los excedentes se venden en ferias locales, en negocios minoristas y puerta a puerta, así como mediante trueque entre vecinos.

4. CARACTERIZACIÓN ACTUAL DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES DE LA MATANZA¹⁶

Presentamos resultados de una encuesta estructurada realizada en el marco de un proyecto de investigación financiado por el FONCyT¹⁷, que consideramos, como ya mencionamos, viene a llenar un vacío de muchos años de falta de información cuantitativa, fundamental para elaborar diagnósticos y confeccionar políticas para este sector. En investigaciones anteriores¹⁸, venimos comprobando la invisibilización histórica de estos productores, tanto desde la academia como desde la gestión pública, en un partido que definió su perfil territorial como industrial. La información cuantitativa disponible sobre las producciones agropecuarias del partido se concentra en la agricultura urbana porque proviene del Programa Prohuerta INTA. Es por ello que decidimos realizar un relevamiento cuantitativo, seleccionando la localidad de Virrey del Pino, el territorio rural donde hay mayor presencia de productores. La confección del cuestionario llevó varios meses de reuniones y debates entre los miembros del equipo de investigación y los técnicos de la Agencia de Extensión INTA Marcos Paz (que tiene bajo su jurisdicción la localidad donde se realizó el relevamiento), chequeando la versión final con una estadística que participó en la gestión de los Censos Nacionales Agropecuarios¹⁹. Se tomó como base el cuestionario del Censo Agropecuario 2002, adaptando algunas variables a la realidad del área a

16. Agradecemos los aportes y comentarios de Susana Battista para la elaboración de este apartado.

17. El proyecto PICT 1289/2015 “*Políticas públicas, ruralidades y medioambiente en el periurbano bonaerense. El partido de La Matanza*” que dirige la autora y fue ejecutado entre 2017/2020 en el Dpto Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza.

18. Los proyectos PROINCE/UNLaM dirigidos por Susana Battista: “*La potencialidad del sector agrícola matancero para un proceso de desarrollo sustentable: actualidad, antecedentes y perspectivas futuras*” (2015-2016); “*Las ferias y mercados de la Agricultura Familiar y su aporte al desarrollo territorial con inclusión social en el Periurbano Oeste Bonaerense*” (2016-2017).

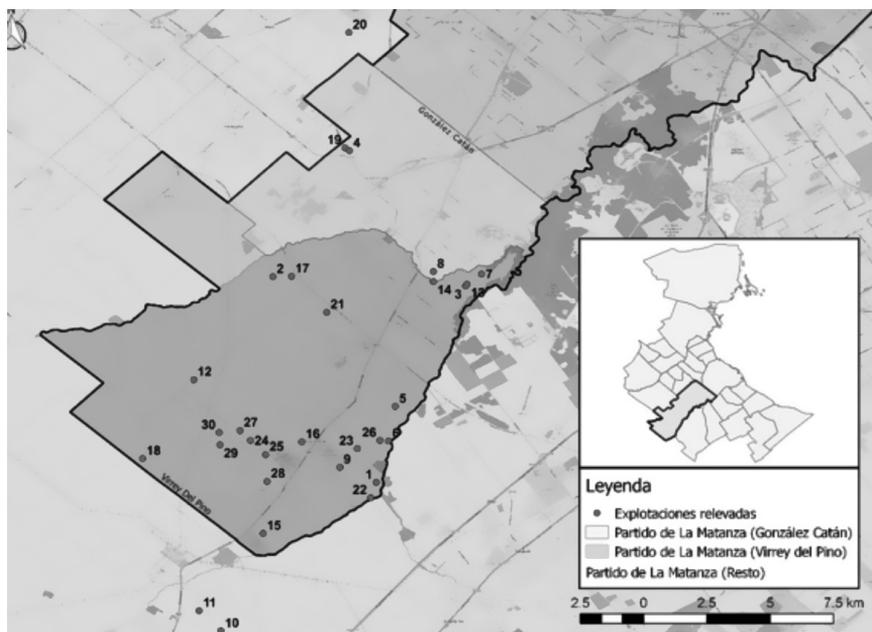
19. Miembros del equipo de investigación: Susana Battista, Mariano Jager y la autora. Miembros del equipo INTA: Leonardo Motta (Coordinador Agencia Extensión Marcos Paz), Camilo Polti (†2020) y Facundo Cabana. Colaboró la Lic. en Matemática y Lic. en Cs de la Computación Silvia Alejandra Pérez, ex miembro del equipo de gestión estadística del Censo Nacional Agropecuario del INDEC.

relevar. Decidimos incorporar la mayor cantidad de variables, aún a riesgo de lograr menor nivel de profundidad, con el objetivo de lograr una caracterización cuantitativa general de estos productores.

El cuestionario final aplicado contó con cincuenta y siete preguntas divididas en bloques temáticos para recabar información sobre las siguientes variables: identificación y condición jurídica del productor; identificación de la explotación; régimen de tenencia de tierra; familia y nivel educativo; uso de la tierra; actividades productivas; prácticas culturales; economía; construcciones, instalaciones y mejoras; maquinaria, equipos y vehículos; vivienda, población y mano de obra; modalidades de gestión; asociativismo; comercialización de productos; razones de ingreso a la actividad; problemas actuales; futuro de la actividad; políticas para el sector. Seleccionamos como encuestadores a estos mismos técnicos por su amplio conocimiento del territorio y la confianza desarrollada con los productores después de varios años de participar en diversas intervenciones de desarrollo. Se relevaron 30 casos (24 en Virrey del Pino —que conforman casi la totalidad de casos existentes en esa localidad— más 3 en González Catán y otros 3 en las proximidades del límite externo del partido) entre los meses de julio y diciembre de 2018. El procesamiento de los datos fue realizado por un equipo de estadísticos²⁰.

20. Los Lic Pablo Tiscornia y Andrea Lorenzetti. Los diagramas, cuadros y el mapa aquí presentados son de autoría de Pablo Tiscornia.

MAPA N°1.
Ubicación de las explotaciones relevadas en encuesta a productores agropecuarios de La Matanza



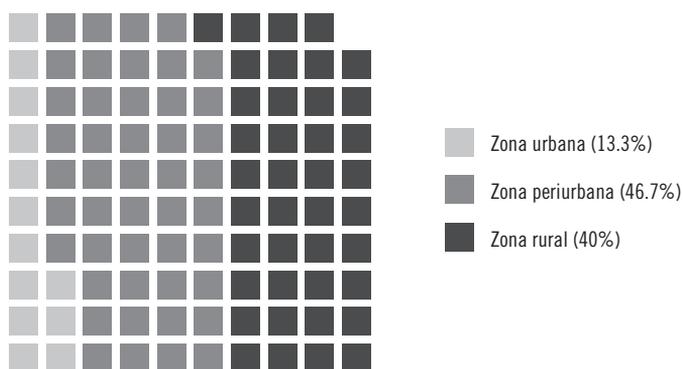
Fuente: PICT- 1389/2015

Desarrollaremos a continuación la caracterización socioeconómica de los productores analizados, mediante resultados del análisis aplicado sobre los datos cuantitativos procesados, con el objetivo de demostrar que se trata de productores de la AF. Para ello, tomaremos diferentes indicadores.

4.1. Identificación de la explotación

Las unidades económicas se localizan principalmente fuera de las zonas urbanas: cuatro de cada diez residen en zonas rurales (40%) y casi cinco de cada diez integran las zonas periurbanas (46,7%).

Gráfico N°1.
Zona donde se ubica la unidad económica

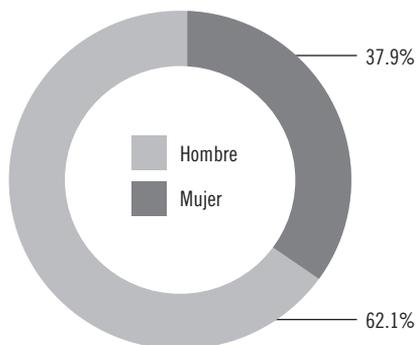


Fuente: PICT- 1389/2015

4.2. Identificación del productor y su familia: sexo, lugar de nacimiento, composición del hogar y nivel educativo

Se destaca la mayor presencia de varones en las EAPs. Dos de cada tres productores remiten a esta categoría.

Gráfico N°2.
Sexo del/la jefe/a del hogar



Fuente: PICT- 1389/2015

Asimismo, los hogares que conforman están mayoritariamente integrados por hasta tres hijos (90,5%), con una leve sobrerrepresentación de varones

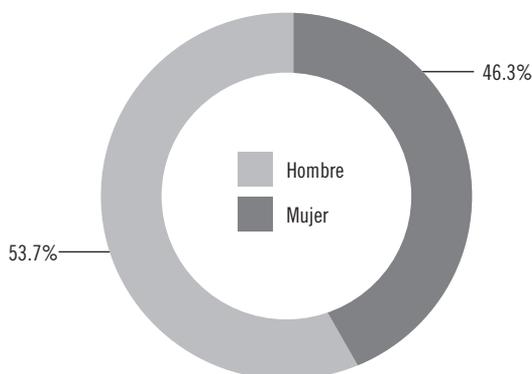
(53,7%) y en su mayoría oriundos del lugar donde residen (7 de cada 10 hijos/as nacieron en La Matanza).

Tabla N°1.

¿Cuántos hijos/as tiene?	%
1	28.6%
2	33.3%
3	28.6%
6	4.8%
12	4.8%
TOTAL	100%

Fuente: PICT- 1389/2015

Gráfico N°3.
Sexo del/la hijo/a



Fuente: PICT- 1389/2015

La presencia de familiares en la unidad económica caracteriza a este tipo de establecimientos, mostrando una yuxtaposición entre unidad económica y unidad doméstica. Esto último se refuerza por la presencia de familiares asociados al productor principal, por los atributos domésticos presentes en el proceso de trabajo. Del total de familiares del jefe presentes en el hogar, el 77,4% se identifica como esposo/a o pareja del productor destacándose en

segundo término la presencia de la madre (9,1%). Hay mayor presencia de mujeres dentro de los trabajadores familiares.

Tabla N°2

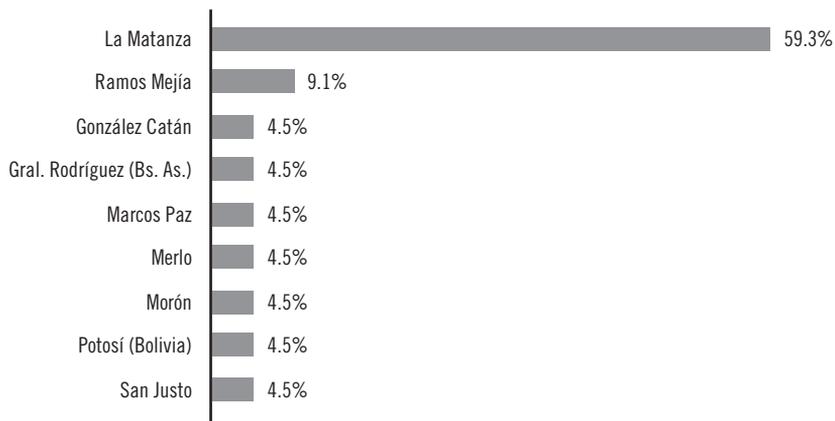
Presencia de familiares del/la jefe/a en el hogar	%
Abuelo/a	4.5%
Esposa/o - Pareja	77.4%
Hermano/a	4.5%
Madre	9.1%
Padre	4.5%
Total	100%

Fuente: PICT- 1389/2015

Ante la pregunta “¿dónde nació?”, hubo respuestas dispares: se mencionaron el nombre del partido, diferentes localidades del mismo, otros partidos del AMBA o ciudades bolivianas. Con relación al lugar de nacimiento de los familiares asociados a la unidad económica, 77,4% son nativos del partido (si sumamos el total de los que declararon nacer en “La Matanza” o en algunas localidades pertenecientes al partido, como González Catán, Ramos Mejía o San Justo), lo que le da a dicha actividad un carácter muy relacionado con la idiosincrasia local del lugar. Sólo un 4,5% es nacido en Bolivia²¹ y el resto se reparte en porcentajes iguales entre otros partidos del AMBA (Gral Rodríguez, Marcos Paz, Merlo y Morón), sumando un 18%. Esto define que un 95,4% de los encuestados son nativos del AMBA.

21. En este partido, a diferencia de otros del periurbano bonaerense (profusamente estudiados por Roberto Benencia, Andrés Barsky, Matías García, Julie Le Gall, Diego Castro, Cynthia Pizarro y la misma autora), hay muy pocos productores bolivianos. Ver. Feito, MC y Basky, A (2020).

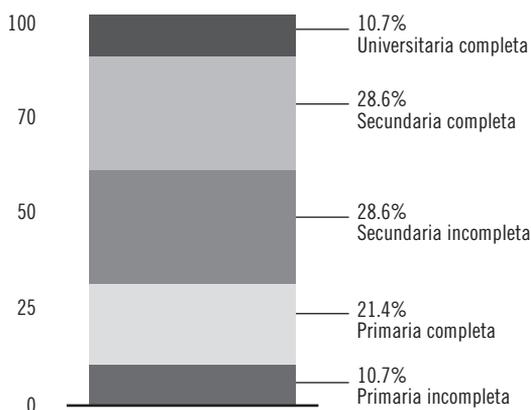
Gráfico N°4.
Lugar de nacimiento de los familiares del/la jefe/a de hogar



Fuente: PICT- 1389/2015

El nivel educativo alcanzado es un indicador de saberes necesarios para el desarrollo de la actividad laboral. En el caso de los ayudantes familiares de la unidad, siete de cada diez declara no haber completado el nivel secundario. Sólo uno de cada diez productores completó el nivel universitario; concentrándose mayoritariamente (60,7%) en el grupo de hasta secundario incompleto.

Gráfico N°5
Nivel educativo del/la jefe/a del hogar

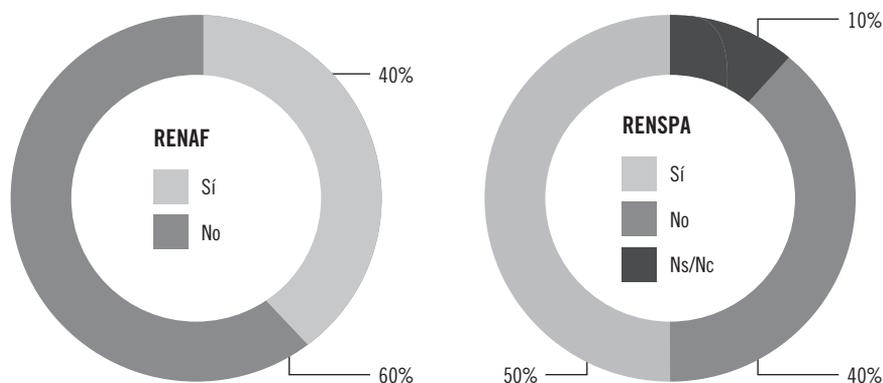


Fuente: PICT- 1389/2015

4.3. Condición jurídica del productor

Sólo cuatro de cada diez productores están inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF)²² y cinco de cada diez en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA)²³.

Gráfico N°6
Inscriptos/as en...



Fuente: PICT- 1389/2015

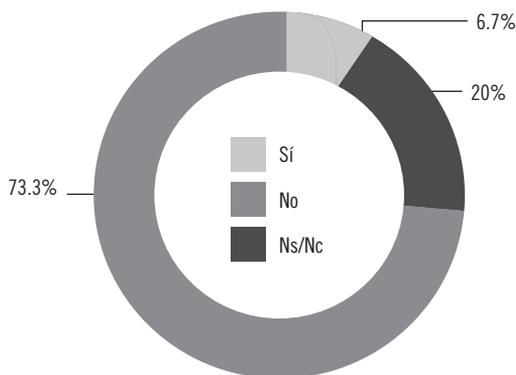
Este bajo nivel de registración se complementa con el casi inexistente aporte a la seguridad social ya que sólo el 6,7% declara tener monotributo social²⁴.

22. El Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF) es una herramienta creada para visibilizar y fortalecer el trabajo de los Agricultores y Agricultoras Familiares en todo el país.

23. El RENSPA es el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios que abarca a todas las actividades agrícolas ganaderas y/o forestales y asocia al productor con la producción y el predio.

24. Al momento de realizar la encuesta, el gobierno nacional 2015-2019, ya había eliminado el Monotributo Social Agropecuario.

Gráfico N°7
Está inscripto en el monotributo social



Fuente: PICT- 1389/2015

Esto los ubica en una situación de precariedad en su condición jurídica, agravada por las normativas dictadas entre 2016 y 2019 por el gobierno nacional (Feito, 2019b)²⁵.

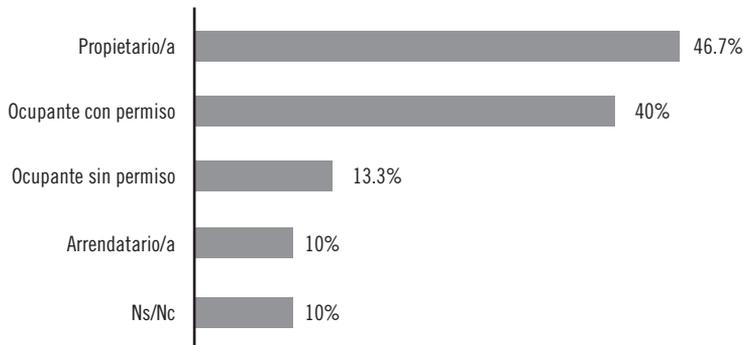
4.4. Régimen de tenencia de la tierra

Se destaca que casi la mitad (46,7%) es propietario de las parcelas que explota. Si bien este tipo de vínculo con uno de los factores de la producción es el que predomina, se verifica, también, una importante presencia relativa de ocupantes con permiso (40%), pudiendo dar cuenta de procesos de subarrendamiento de la tierra para su trabajo. Un porcentaje menor (13,3%) se reconoce como ocupante sin permiso reflejando una situación de mayor endeblez. Si

25. Nos referimos al hecho de que, en el contexto económico social neoliberal promovido por el gobierno nacional que asumió en diciembre del año 2015, se desarticulaban políticas, programas, proyectos y organismos públicos de apoyo a la AF, que no sólo detuvieron el proceso de acompañamiento técnico estatal a estas producciones agropecuarias, sino que a la vez pusieron en riesgo el aprovisionamiento de alimentos para la población de las ciudades, ya que, al reducir drásticamente la planta de agentes de extensión rural que recorrían el territorio atendiendo las problemáticas de los productores, disminuyeron los niveles productivos en las fincas, al tiempo que se vulneraron las cadenas cortas de comercialización de alimentos (muchas de las cuales, como ferias, distribución de bolsones de mercadería, compras estatales, etc, habían sido desarrolladas en años anteriores, gracias al apoyo de este personal técnico de las instituciones estatales).

sumamos el total de ocupantes, se eleva a 53,3%, es decir, son la mayoría. Sólo uno de cada diez remite a la categoría de arrendatario (lo cual podría relacionarse con la baja proporción de bolivianos, quienes, en otras partes del periurbano, tienen esta forma de tenencia de tierra como principal) (Feito, 2014).

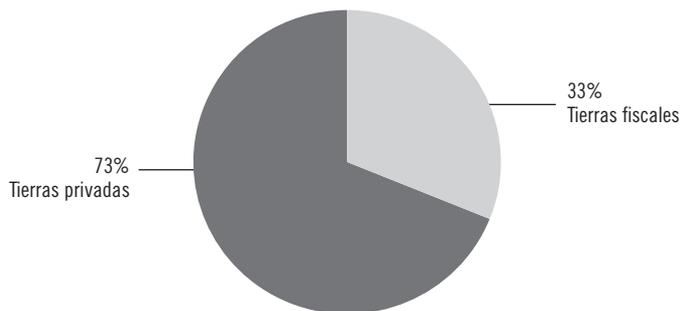
Gráfico N°8
Régimen de tenencia de la tierra



Fuente: PICT- 1389/2015

En cuanto al carácter de la unidad económica, siete de cada diez son de gestión privada mientras que los tres restantes, refieren a tierras fiscales, cedidas u ocupadas para realizar actividades productivas asociadas a la agricultura familiar.

Gráfico N°9
Sector de pertenencia de la unidad económica



Fuente: PICT- 1389/2015

4.5. Uso de la tierra

4.5.1. Actividad agrícola: En cuanto al promedio de superficie implantada, se registran valores cercanos a las 2,4 hectáreas con un máximo de 12 y un mínimo de 0,2.

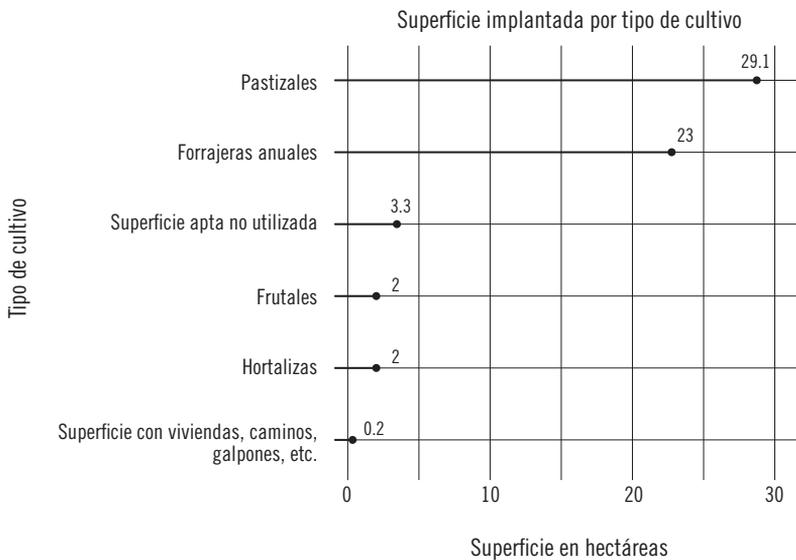
Tabla N°3
Superficie implantada (en has.)

Superficie promedio	Superficie mediana	Superficie mínima	Superficie máxima
2.42	2	0.2	12

Fuente: PICT- 1389/2015

Para forrajes anuales la superficie implantada es de 23 hectáreas y para pastizales 29,09. Las hortalizas son las que menos superficie ocupan (sólo 2 has).

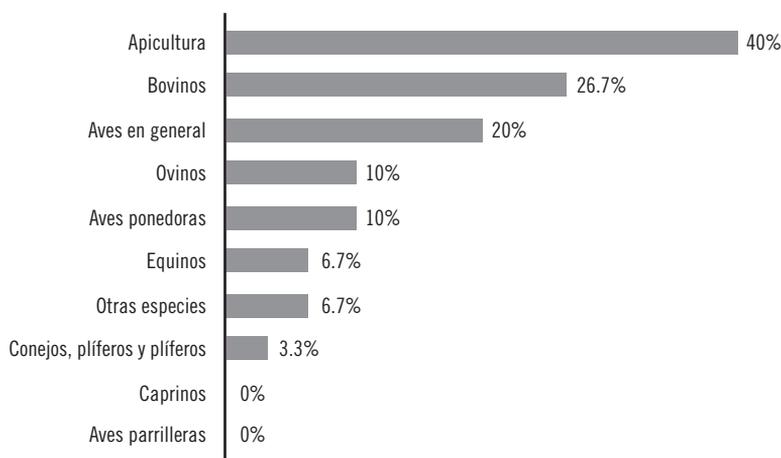
Tabla N°4



Fuente: PICT- 1389/2015

4.5.2. Actividad pecuaria: En cuanto al uso de la tierra para producción animal, se registra un predominio de la apicultura (40%), a la que sigue en importancia los bovinos (26,7%). También se crían aves en general (20%); ovinos (10%); aves ponedoras (10%); equinos (6,7%); otras especies (6,7%); conejos, pelíferos y plíferos (3,3%). No se registraron aves parrilleras ni caprinos.

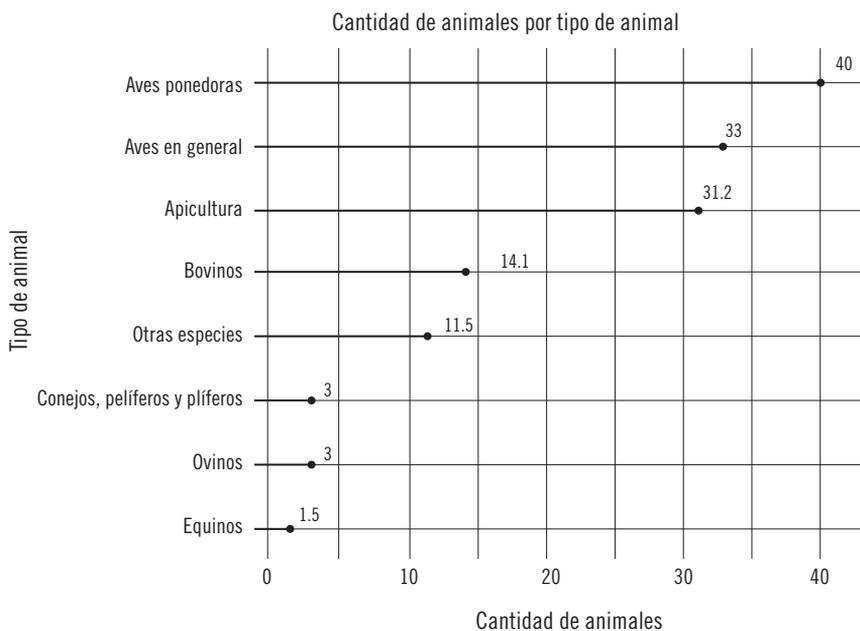
Gráfico N°10
Unidades económicas que producen...



Fuente: PICT- 1389/2015

Si se caracteriza a los productores por la cantidad y tipo de animales que crían, la cantidad promedio de aves ponedoras por productor es de 40. En el otro extremo, los ovinos alcanzan a tres en promedio por productor. Cabe señalar la presencia de la apicultura como la actividad pecuaria más extendida en la zona.

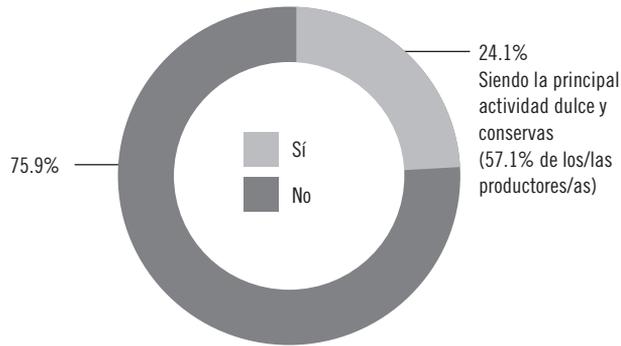
Tabla N°5



Fuente: PICT- 1389/2015

4.5.3. Otras actividades primarias: Es interesante observar que los productores encuestados se dedican principalmente a una sola actividad. Sólo uno de cada cuatro reconoce desarrollar más de un tipo de producción en la unidad económica en la que trabaja (24,1%). De éstos, más de la mitad complementa su tarea principal con la elaboración y envasado de dulces y conservas (57,1%), lo que evidencia la importancia del valor agregado en origen. El resto realiza como actividad primaria no principal, las siguientes, en un porcentaje de 14,3% cada una de ellas: fraccionamiento de miel, cria de aves, ovejas, cabras, cultivo de frutilla, huerta. Por otro lado, ninguno de los productores entrevistados desarrolla actividades de turismo rural.

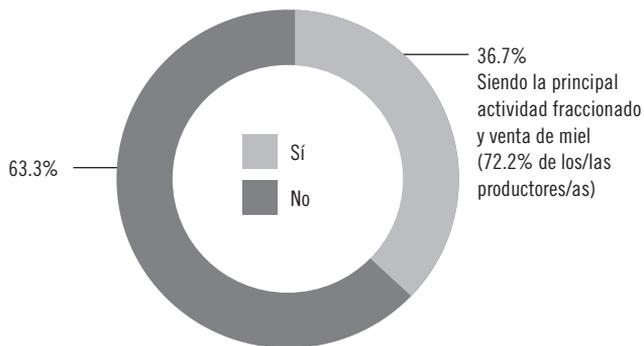
Gráfico N°11.
¿Realiza otras actividades primarias?



Fuente: PICT- 1389/2015

4.5.4. Otras actividades comerciales: Algo más de un tercio (36,7%) de los productores declara realizar otras actividades con fines comerciales a partir de su producción en el establecimiento, desarrollando tareas que suponen un mayor nivel de división y especificidad del trabajo al interior de la unidad económica. Como es de esperar, en función del perfil productivo de la zona, en la cual predomina la apicultura, estas pequeñas unidades económicas se dedican principalmente al fraccionado y venta de miel (72,2%). En menor medida (27,3%) se registran aquellos productores que comercializan la masa para la mozzarella. El resto realiza conservas, hidromiel y licores, cada una de ellas en un 9,1%.

Gráfico N°12
Realiza actividades con fines comerciales a partir de su producción en el establecimiento

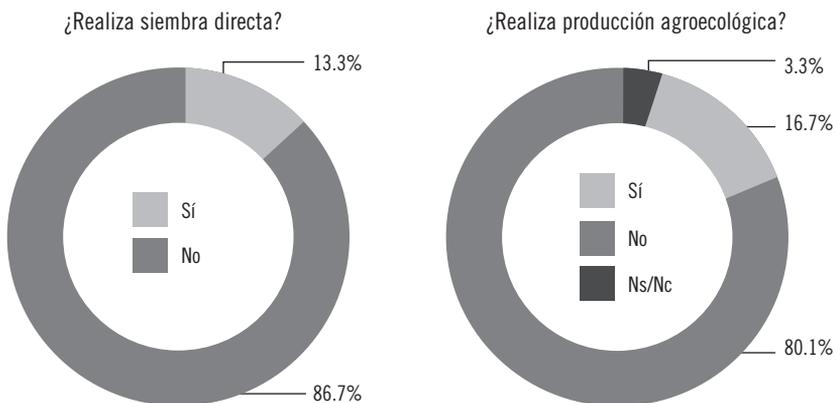


Fuente: PICT- 1389/2015

4.6. Prácticas culturales

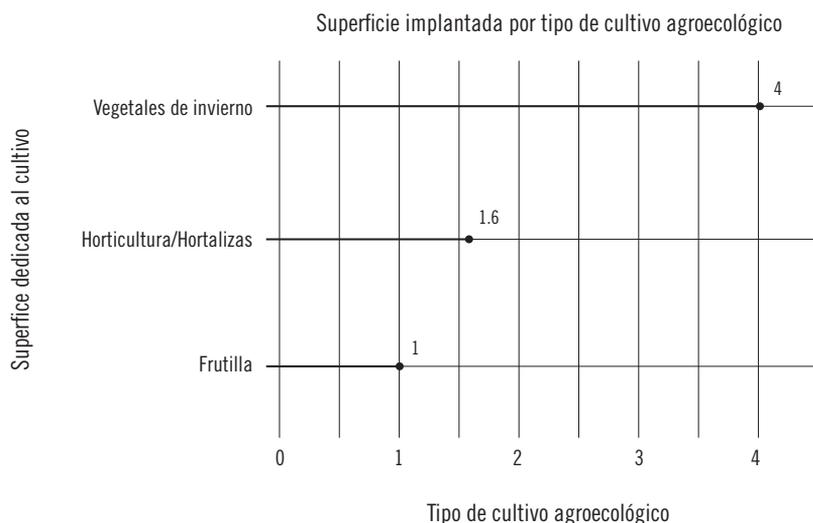
Es de destacar que el 100% respondió negativamente a la pregunta sobre si utiliza agroquímicos o semillas transgénicas en el proceso de trabajo. Al preguntar si realiza siembra directa, sólo el 13,3% de los productores respondió afirmativamente. En tanto, al preguntar si realiza agroecología, la gran mayoría (83,3%) responde negativamente, lo cual muestra que en la región prima la agricultura convencional. Esta contradicción aparente (consistente en que el 100% declara no usar agroquímicos, mientras el 83,3% dice no realizar agroecología), nos lleva a preguntarnos...¿entonces, cómo cultivan estos últimos, si es que no hacen agroecología pero tampoco aplican agroquímicos? Creemos que esta inconsistencia en las respuestas (que no es estadística) puede deberse al concepto de agroecología que manejan los encuestados, ya que pueden considerar agroecología no sólo la “no aplicación de agroquímicos”, sino como un uso más complejo de los factores ecológicos del predio, con lo cual creemos que habría que profundizar esta temática en estudios futuros, realizando entrevistas en profundidad. Por su parte, entre aquellos que responden afirmativamente que cultivan agroecológicamente, la mayor superficie implantada de cultivos agroecológicos corresponde a vegetales de invierno, con la mayor cantidad de hectáreas promedio cultivadas (4 has. por productor). Le siguen la horticultura y hortalizas con 1,6 has. promedio y la frutilla con 1ha. promedio.

Gráfico N°13
Prácticas culturales



Fuente: PICT- 1389/2015

Tabla N°6

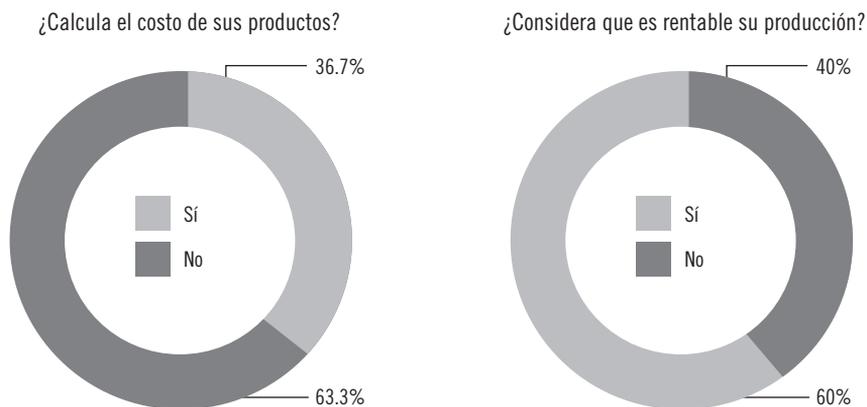


Fuente: PICT- 1389/2015

4.7. Economía

Uno de cada dos productores (63,3%) no efectúa algún tipo de *cálculo del costo* de los bienes que produce (elemento que consideramos decisivo a desarrollar para potenciar perspectivas laborales futuras). De este modo, la gran mayoría desconoce los gastos necesarios que debe efectuar para poder seguir desarrollando la actividad, así como también estimar el beneficio que por ella obtiene. Por otra parte, seis de cada diez productores (60%) consideran que la producción que realizan es rentable. Esto también requiere una exploración más detallada, dado que si la mitad de los productores no calculan costos... nos preguntamos: ¿cómo consideran que su producción es rentable?

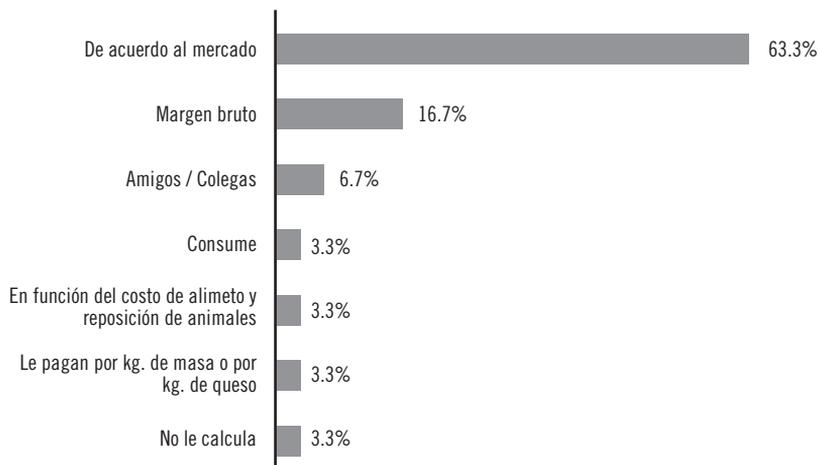
Gráfico N°14
Costo de productos y rentabilidad de producción



Fuente: PICT- 1389/2015

La variedad de modalidades que utilizan los productores para calcular el precio de sus productos es muy amplia, siendo la principal, de acuerdo al precio de mercado (63,3%), y en menor medida, estimar un porcentaje de ganancia sobre las ventas (16,7%) (pregunta abierta).

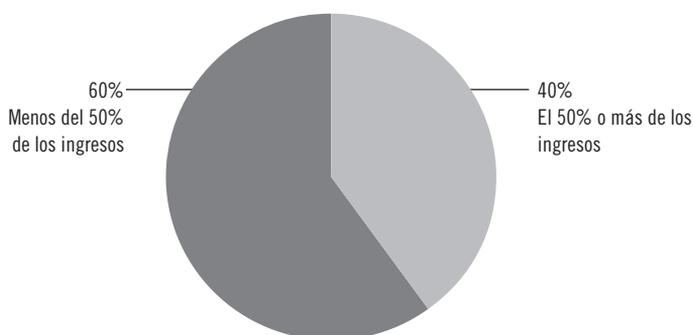
Gráfico N°15
¿Cómo calcula el precio de los productos?



Fuente: PICT- 1389/2015

A su vez, el 40% de los encuestados declara que el 50% o más de sus ingresos proviene de la actividad agropecuaria. Esto confirma la importancia económica de esta actividad para el sostén de las familias.

Gráfico N°16
¿QUÉ porcentaje de sus ingresos proviene de la actividad agropecuaria?

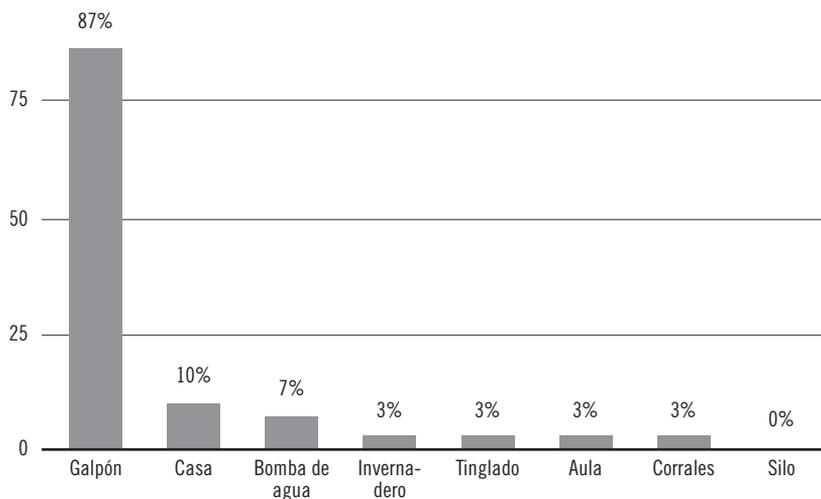


Fuente: PICT- 1389/2015

4.8. Construcciones, instalaciones y mejoras

La actividad se desarrolla principalmente en galpones (87%) o en menor medida en una casa utilizada como vivienda (10%). El uso principal que se le da a las instalaciones está relacionado con actividades de depósito, ya sea de manera exclusiva (17,9%) o combinado con otras actividades tales como el fraccionamiento o la extracción de miel (14,4%).

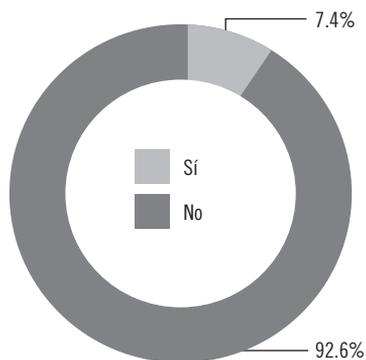
Gráfico N°17
Instalaciones con las que cuenta la explotación



Fuente: PICT- 1389/2015

Una muy baja proporción de productores (el 7,4%) declara contar con un invernadero, lo que les imposibilita cuidar a sus cultivos ante cualquier contingencia climática. Esto es acorde a lo que se observa en otros partidos del periurbano Oeste, que tienen poco desarrollo de la producción bajo cubierta, en comparación con las regiones Sur y Norte (INTA, 2012).

Gráfico N°18
¿Tiene invernáculos?



Fuente: PICT- 1389/2015

La superficie promedio de los invernáculos es de 85 m², lo cual, dado el pequeño tamaño, podría indicar también que el productor es familiar y no empresarial. Un estudio realizado en la zona sur del periurbano bonaerense sostiene que “los sistemas productivos hortícolas familiares serían de hasta 2 ha totales, con una superficie de entre 0,5 y 1,5 ha bajo cubierta con el arrendamiento como forma de tenencia de la tierra a cargo de una familia. De las entrevistas a productores de la región surge que hasta 1 ha bajo cubierta el trabajo que este demande puede ser cubierto con mano de obra familiar, complementando los momentos de mayor demanda con mano de obra contratada por día o por tanto” (Cieza et al, 2015: 135)

Tabla N°7
Superficie de invernáculos (en m²)

Superficie promedio	Superficie mediana	Superficie mínima	Superficie máxima
85.07407	68	1	300

Fuente: PICT- 1389/2015

4.9. Maquinarias, equipos y vehículos

Algo más de la mitad de los productores (57%) dispone de un transporte que en su gran mayoría (47%) es de su propiedad. Esto podría relacionarse con la importancia de tener movilidad propia para llevar sus producciones a los mercados del AMBA. El 30% tiene maquinarias y equipos diversos (de ellos, el 27% es propio). Sólo el 10% posee tractor, el 7% implementos de labranza, un 3% sembradora y ninguno posee cosechadora. Estos indicadores también podrían dar cuenta de que son productores familiares, ya que el desarrollo de la AF tiene, entre otros requerimientos, la necesidad de contar con aportes de tecnologías apropiadas —entre ellas máquinas y herramientas— que faciliten el trabajo familiar y que contribuyan a la realización de procesos de producción, transformación y agregado de valor con uso eficiente de las energías, en lo posible renovables (INTA, 2011). Existe en general un desarrollo tecnológico (en herramientas, maquinarias e instalaciones agropecuarias) que fue pensado y diseñado para el sector empresarial agropecuario que trabaja bajo condiciones y lógicas de producción diferentes a las del sector

de la AF (Giordano, 2013). Los pequeños productores, en cambio, supeditan el cambio tecnológico a criterios distintos a los seguidos por los productores capitalistas (Cáceres et al, 1997).

Tabla N°8.
Maquinarias, equipos y vehículos

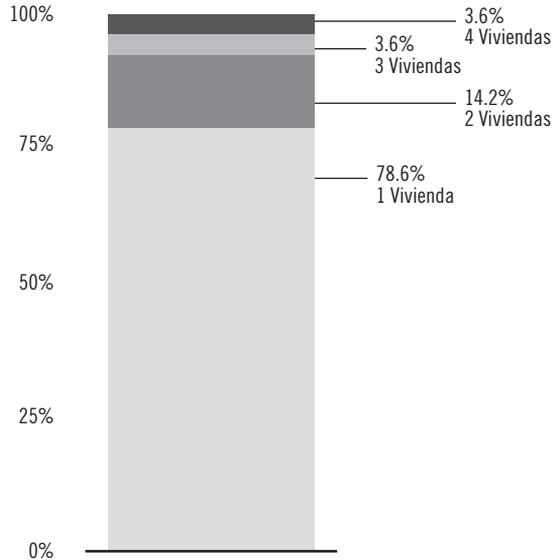
Maquinaria	Propios	No propios	Total
Vehículos de transportes	47%	10%	57%
Máquinas y equipos diversos	27%	3%	30%
Tractores	7%	3%	10%
Implementos de labranza	7%	0%	7%
Sembradora	3%	0%	3%
Cosechadora	0%	0%	0%

Fuente: PICT- 1389/2015

4.10. Vivienda, población y mano de obra

El 78,6% de las explotaciones tienen sólo una vivienda, habiéndose registrado hasta cuatro por finca. Esto último puede explicarse por la costumbre de convivir en un mismo predio varios grupos familiares parientes entre sí.

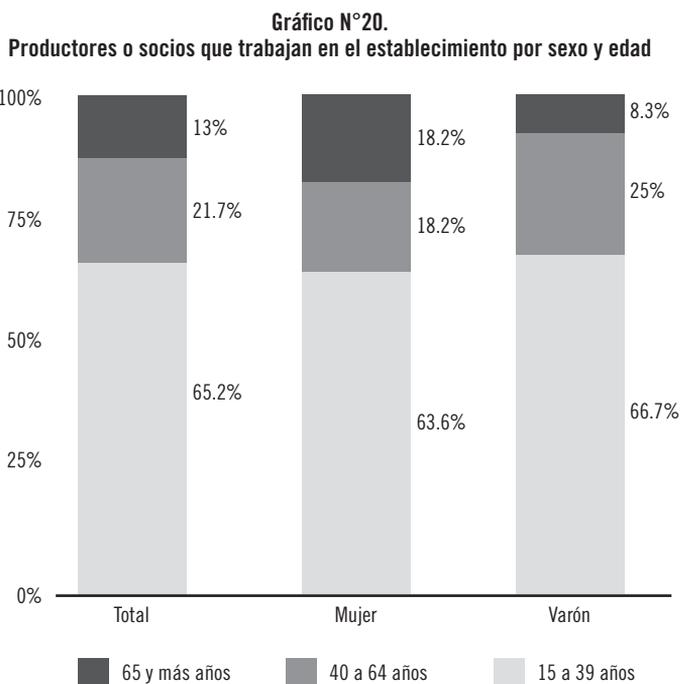
Gráfico N° 19.
Cantidad de viviendas en la explotación



Fuente: PICT- 1389/2015

4.10.1. Mano de obra permanente

Del análisis del total de productores o socios que trabajan en el establecimiento en forma permanente por sexo y edad, dos de cada tres (65,2%) tiene entre 15 y 39 años, lo cual muestra cierta prevalencia de la juventud entre los que gestionan la producción. No se presentan diferencias en la distribución por sexo. Es de destacar la mayor presencia femenina en este universo laboral si se lo compara con la distribución por sexo de la población ocupada, dónde alrededor del 40% son mujeres.

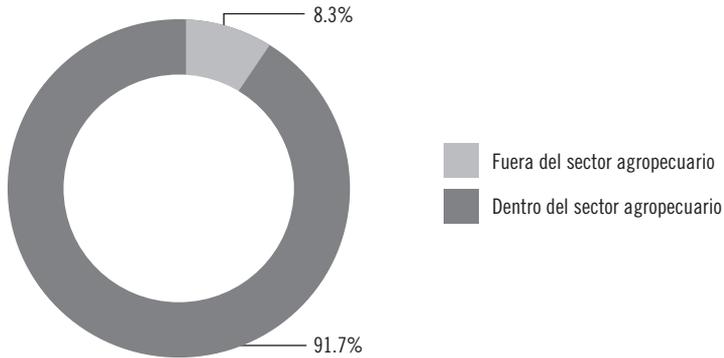


Fuente: PICT- 1389/2015

En cuanto a quienes trabajan fuera del establecimiento, la mayoría (91,7%) lo hace dentro del sector agropecuario. Esto mostraría una muy baja pluriactividad²⁶.

26. Al hacer mención a la pluriactividad nos referimos a la combinación de dos o más actividades, siendo una la agraria, en una misma unidad de producción. Esta combinación de actividades (agrícolas y no agrícolas) depende de las estrategias de reproducción de las familias y de las características del territorio donde éstas se llevan a cabo. Ver: Piskulich, R y Caeiro (2017). *Pluriactividad en Agricultores Familiares de la Colonia Nueva Coneta, Provincia de Catamarca*. VII Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, FACE UBA.

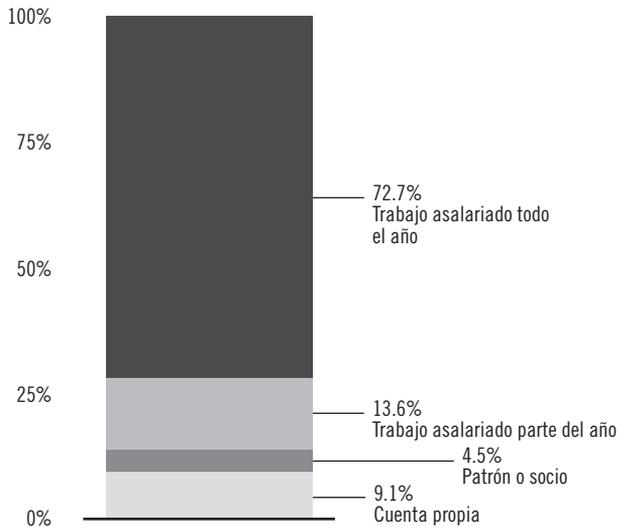
Gráfico N°21.
Trabajadores fuera del establecimiento. ¿Dentro o fuera del sector agropecuario?



Fuente: PICT- 1389/2015

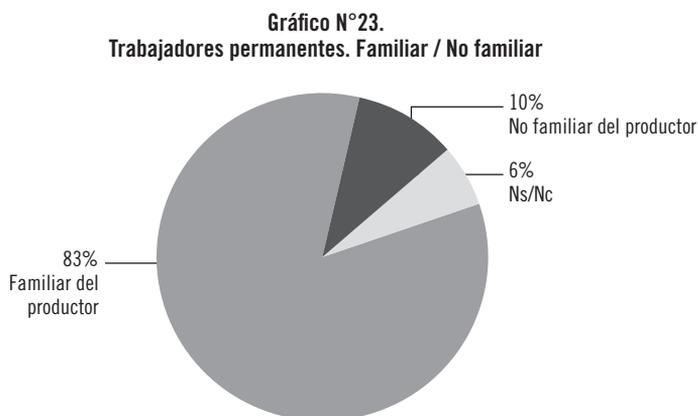
Respecto de la categoría ocupacional de los trabajadores que trabajan dentro del sector agropecuario, el 72% tiene trabajo asalariado todo el año. El 13,6% realiza trabajo asalariado parte del año; el 4,5% es patrón o socio y el restante 9,1% es trabajador cuenta propia.

Gráfico N°22
Categoría ocupacional de los/las trabajadores/as que trabajan dentro del sector agropecuario



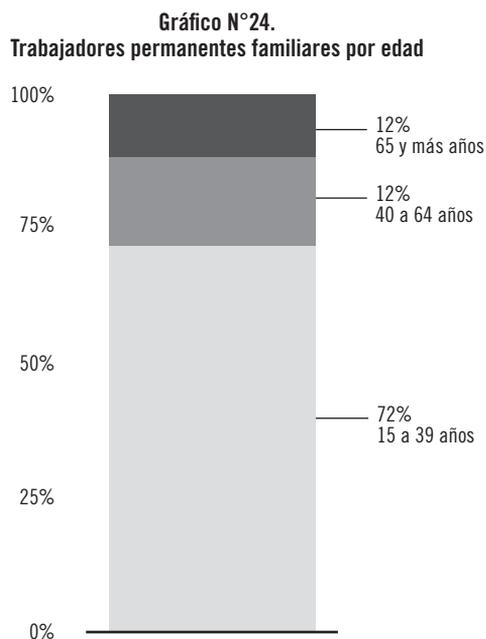
Fuente: PICT- 1389/2015

Del total de productores, algo más de ocho de cada diez (83%) trabaja con familiares asociados que desarrollan su tarea de manera permanente. Los trabajadores permanentes del establecimiento son en su mayoría (83%) familiares del productor (8 de cada 10). Esta es la principal variable que, como vimos en un apartado anterior, nos permite caracterizarlos como *productores de la agricultura familiar: la prevalencia de mano de obra familiar*, como analizaremos en detalle más adelante.



Fuente: PICT- 1389/2015

De éstos, el 72% es joven (tiene entre 15 y 39 años).

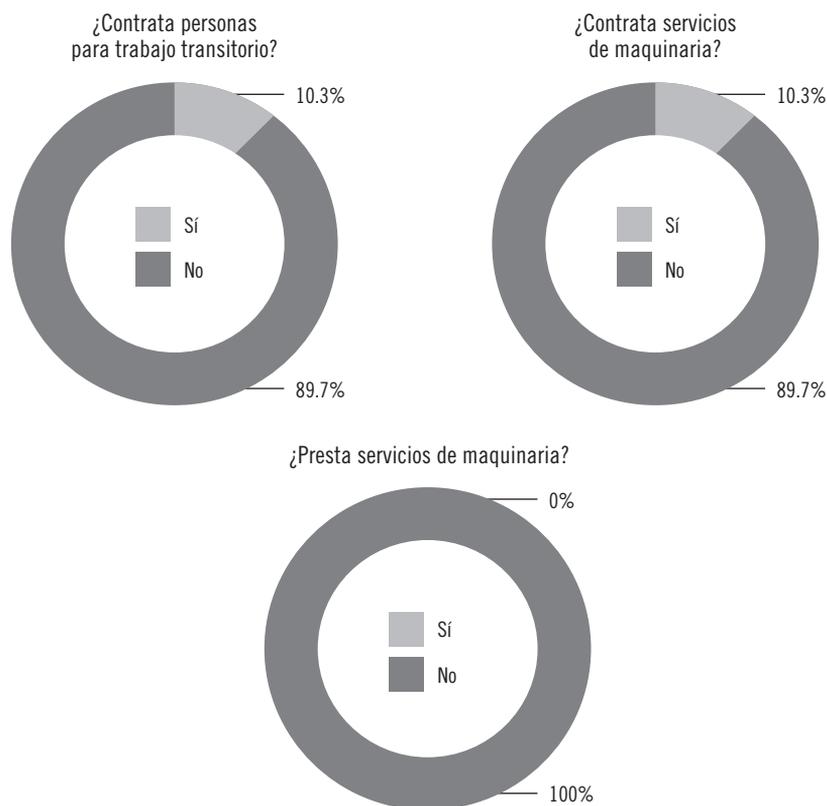


Fuente: PICT- 1389/2015

1.10.2. Mano de obra transitoria

El bajo nivel de productividad de las unidades económicas se refleja en la escasa capacidad de contratación de mano de obra acorde a los ciclos productivos. Solo el 10% lo hace cuando lo necesita. Asimismo, esas unidades, con un mayor nivel de desarrollo, tienen la capacidad para contratar servicios de maquinarias cuando lo requieren.

**Gráfico N°25
Contrataciones**

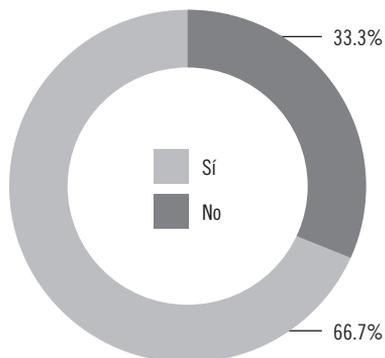


Fuente: PICT- 1389/2015

4.11. Asesoramiento técnico

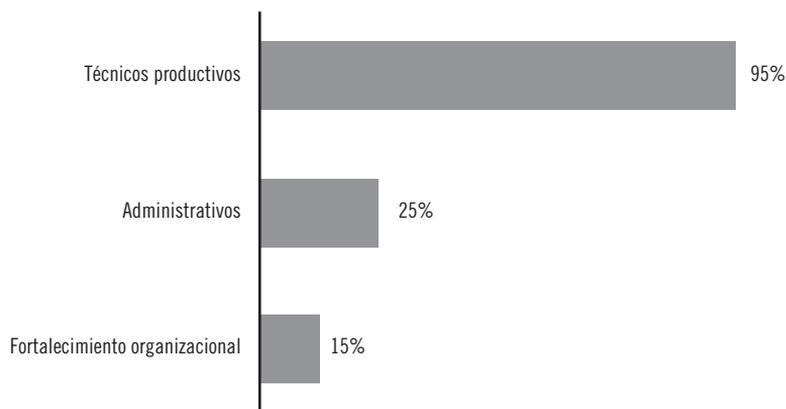
Dos de cada tres productores (66,7%) reciben asesoramiento técnico, principalmente sobre cuestiones relacionadas con cuestiones técnico-productivas (95%). Sólo un 25% obtiene lineamientos relacionados con temas que hacen a la administración de la unidad, y el 15% restante es asesorado en fortalecimiento organizacional.

Gráfico N°26
¿Recibe asesoramiento técnico externo?



Fuente: PICT- 1389/2015

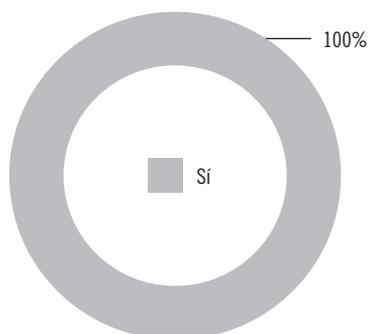
Gráfico N°27.
¿En qué aspectos recibió asesoramiento técnico externo?



Fuente: PICT- 1389/2015

Los que aún no lo reciben manifiestan de forma unánime (100%) el interés por tenerlo. No es posible determinar si existe asesoramiento privado, ya que el 50% respondió que lo recibe de instituciones públicas y el otro 50% no respondió.

Gráfico N°28.
¿Le gustaría recibir asesoramiento técnico externo?

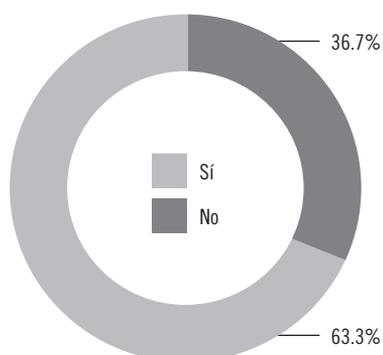


Fuente: PICT- 1389/2015

4.12. Asociativismo

Seis de cada diez productores (63,3%) manifiestan pertenecer a alguna asociación.

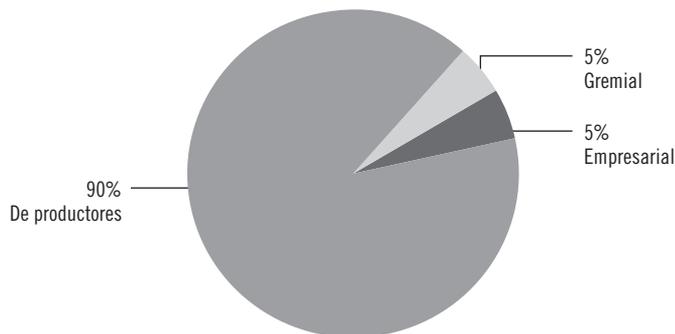
Gráfico N°29.
¿Pertenece a alguna asociación?



Fuente: PICT- 1389/2015

Se destaca la prevalencia de *asociaciones de productores*, donde se concentra el 89,5% de los entrevistados. El 10% restante se divide en partes iguales entre asociaciones gremiales y empresariales.

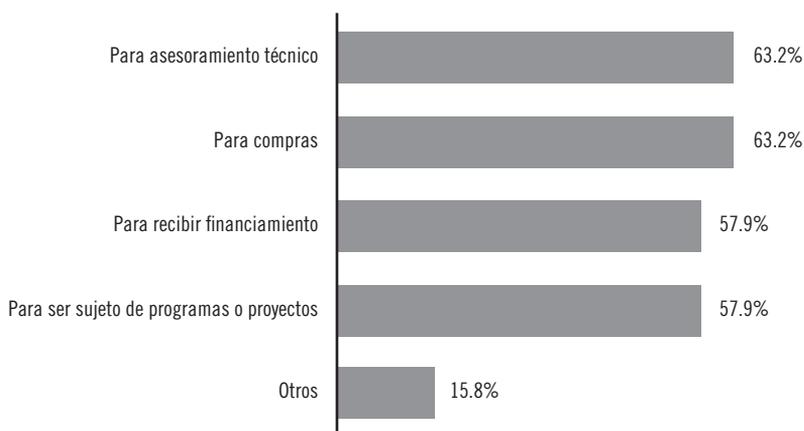
Gráfico N°30.
¿A qué tipo de asociación pertenece?



Fuente: PICT- 1389/2015

Al indagar sobre las razones por las que deciden asociarse, seis de cada diez productores coinciden en destacar cuatro principales razones, a saber: el asesoramiento técnico (63,2%); las compras (63,2%); el recibir financiamiento (57,9%) o ser sujeto de programas o proyectos (57,9%). El resto (15,8%), manifiesta otras razones varias para asociarse.

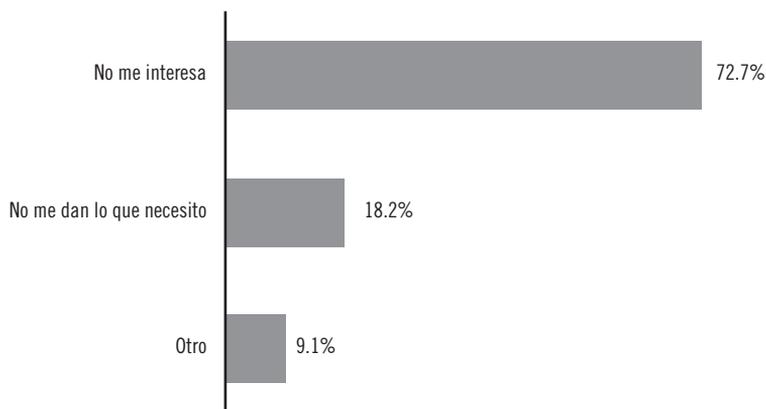
Gráfico N°31
Principales razones por las que decidió asociarse



Fuente: PICT- 1389/2015

Al observar la población que dice no estar asociada, se reconoce como el principal motivo la falta de interés (72,7%). Muy por detrás (pero no menos importante), dos de cada 10 productores indican no asociarse debido al falta de adecuación entre lo que se ofrece y lo que el productor necesita.

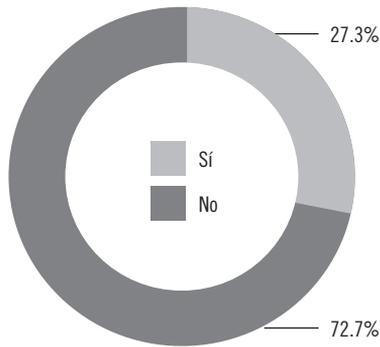
Gráfico N°32.
¿Por qué no se asocia?



Fuente: PICT- 1389/2015

Un 72,2% de quienes manifiestan no estar asociados, confirman que no les interesa hacerlo en el futuro, siendo apenas dos de cada diez productores los que indican como posible el asociarse. Esto evidencia un desaliento en cuanto a esta estrategia a la hora de repensar su actividad, y coincide con nuestros registros etnográficos de investigaciones anteriores que muestran que existen pocas organizaciones en el partido (Battista et al, 2015).

Gráfico N°33.
¿Considera posible asociarse en el futuro?

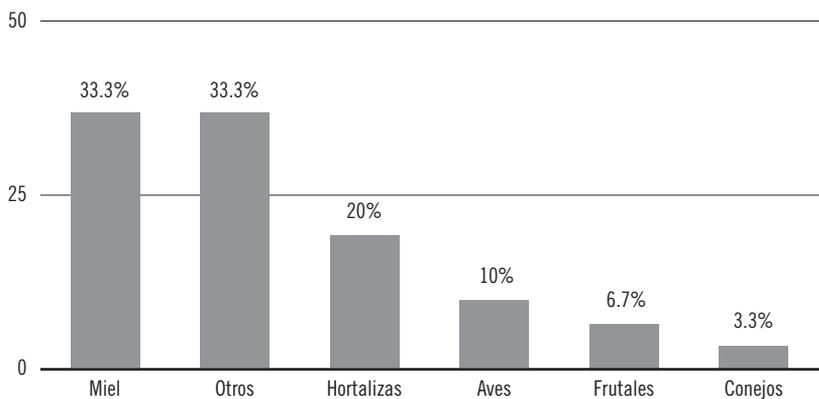


Fuente: PICT- 1389/2015

4.13. Comercialización de los productos

La comercialización es el “proceso que va de la tranquera del productor hasta el comprador” (Caracciolo, 2017:43). Los principales productos que comercializan los productores de la zona son la miel (33,3%) y “otros” productos que no se especifican; en tercer lugar, las hortalizas (20%); luego aves (10%); frutales (6,7%) y conejos (3,3%).

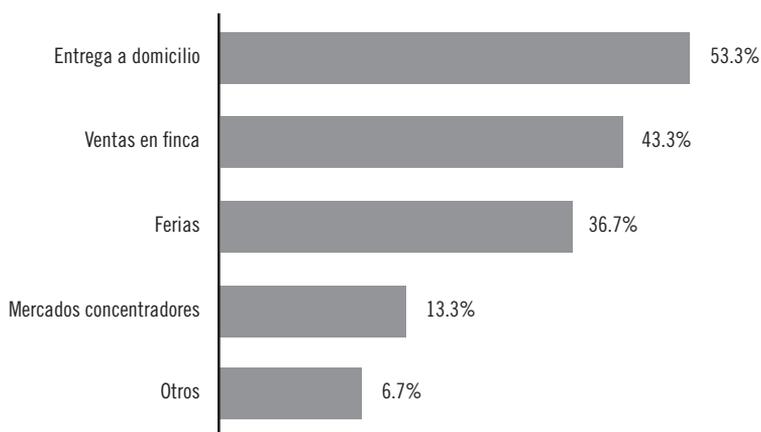
Gráfico N°34.
Tipos de productos que comercializa



Fuente: PICT- 1389/2015

A su vez, los canales de comercialización de estos productos refieren principalmente a la entrega en el domicilio del cliente (53,3%) o a la venta directa en la finca (43,3%). Un 36,7% se comercializa en ferias, en tanto un 13,3% en mercados concentradores²⁷ y el resto (6,7%) en otros canales. Estas constituyen modalidades alternativas de comercialización de la AF (Caracciolo, 2015) que tienen un alto nivel de relación personal entre productor y consumidor. Estos canales alternativos son reconocidos como herramienta para el desarrollo rural, especialmente a nivel local, y muestran al agricultor familiar como *actor productivo* y en su rol de *proveedor de alimentos para el mercado interno* (Feito, 2019^a). En este caso, por tratarse de explotaciones del periurbano bonaerense, se destaca que proveen al mayor mercado de consumidores del país, conformado por casi 15 millones de personas residentes en el AMBA²⁸.

Gráfico N° 35.
Principales canales de comercialización



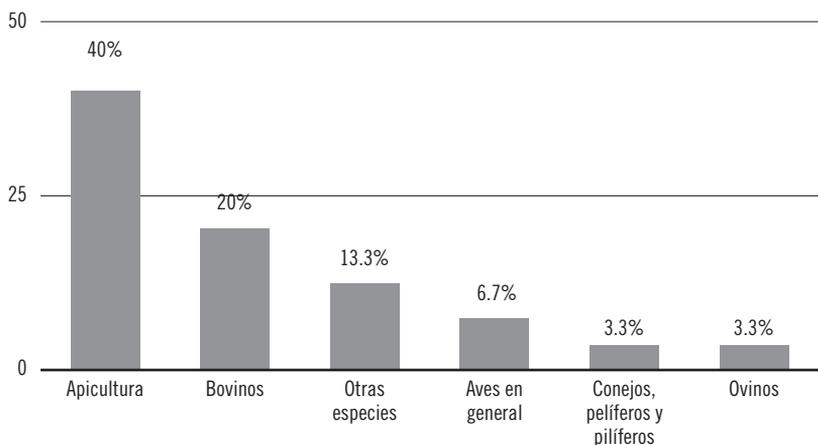
Fuente: PICT- 1389/2015

27. En el partido de La Matanza se encuentra, entre otros, el mercado concentrador más grande del país y uno de los más grandes de América Latina: el Mercado Central de Buenos Aires (<http://www.mercadocentral.gob.ar/paginas/qu%C3%A9-es-el-mercado-central>).

28. El periurbano bonaerense puede identificarse administrativamente con el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), que comprende 40 unidades político-administrativas (treinta y nueve partidos de la pcia Bs As más la CABA) y contiene la mayor aglomeración poblacional del país, 14,5 millones de habitantes (INTA, 2012).

Indagando sobre especies ganaderas que se comercializan (primera venta de ganado en pie), además de la miel (40%), la comercialización de bovinos, a través de su venta directa, se convierte en la segunda realizada por los productores del partido (20%). Un 13,3% comercializa otras especies; 6,7% aves en general; 3,3% conejos, pelíferos y pilíferos; y el restante 3,3%, ovinos.

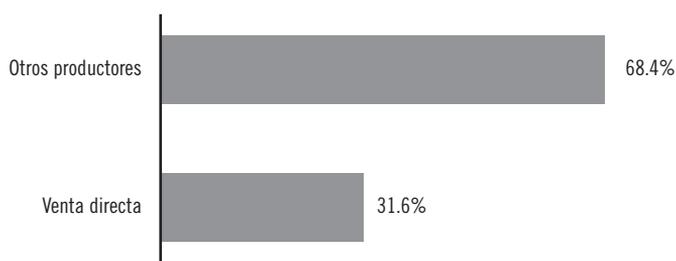
Gráfico N°36.
Especies que comercializa



Fuente: PICT- 1389/2015

El principal canal de comercialización de estas especies es la venta a otros productores (68,4%), siendo la venta directa el resto (31,6%).

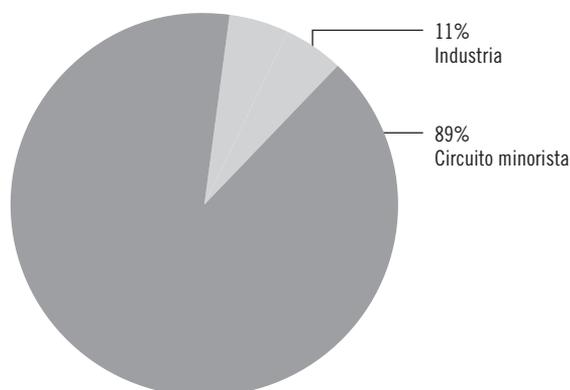
Gráfico N°37.
Principales canales de comercialización



Fuente: PICT- 1389/2015

Respecto de la comercialización de leche, uno de cada cuatro productores reconoce comercializar leche a través del circuito minorista (89%), en tanto el restante 11% vende a industria. Esto tiene correlato en el mantenimiento de la tradición en La Matanza de la venta de leche con entrega a domicilio.

Gráfico N°38.
Canal de comercialización de leche



Fuente: PICT- 1389/2015

Estos datos muestran que estos productores no producen sólo para subsistencia, sino que comercializan una variedad de productos y mediante distintos canales. Esto los convierte en potenciales beneficiarios de programas estatales como Cambio Rural.²⁹

4.14. Preguntas abiertas

En el cuestionario se incluyeron una serie de preguntas abiertas para relevar la percepción de los productores sobre importantes aspectos históricos y sociales. Si bien las respuestas no son excluyentes ya que se puede mostrar más de una razón, nos permiten elaborar algunas conclusiones interesantes. Las motivaciones que impulsan a los pequeños productores a realizar la producción

29. Este programa, en su reformulación como Cambio Rural II en septiembre 2017, condiciona la participación sólo a aquellos “que produzcan exclusivamente para comercialización” (Feito, 2019b)

agropecuaria son múltiples y diversas. Es destacable que prevalecen factores asociados al gusto personal por la actividad que desarrollan (49,5%), principalmente en la apicultura: “*me encanta la apicultura, me lleva poco tiempo*”; “*por gusto y por tradición*”; “*viví en zona rural y aprendí de mis abuelos y me gusta*”; “*me encantan las colmenas*”. Le siguen en orden de importancia cuestiones vinculadas con la tradición familiar (39,6%): “*nací al lado de una vaca*”; “*nací en el campo y me crié con vacas*”; “*mi padre ya tenía colmenas*”. El haber realizado alguna capacitación previa lleva el 16,5 de respuestas: “*me capacité en el Centro de Educación Agropecuaria 15 y compré colmenas*”; “*hice un curso y me encantó*”. Y es llamativo que en último lugar (sólo un 13,2%) se respondió por razones económicas: “*gano unos pesos más*”; “*necesitamos más ingresos*”; “*por gusto y rentabilidad*”; “*por necesidad*”.

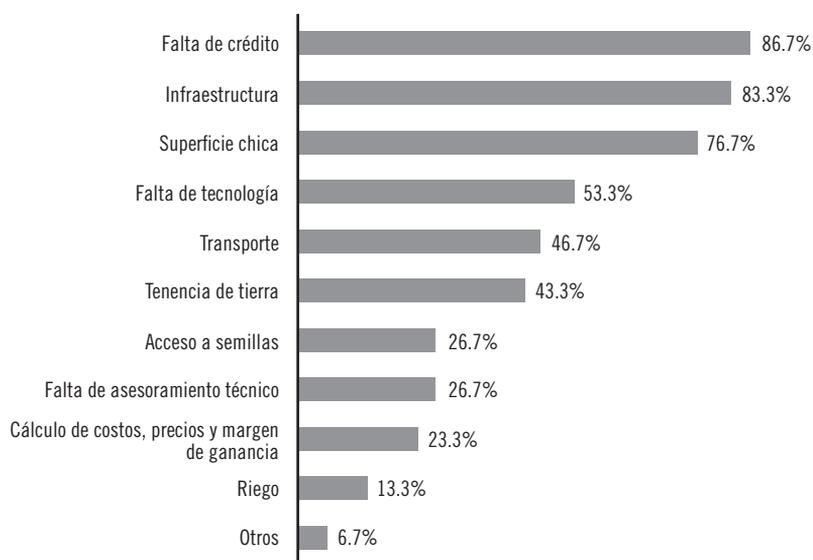
Destacamos la valorización positiva que tienen los productores sobre la actividad agropecuaria, así como sobre la recuperación de la tradición de esta producción en la zona. Esto también lleva a conceptualizarlos como agricultores familiares, ya que según el Foro de Organizaciones Nacionales de la Agricultura Familiar (FONAF)³⁰, la AF es “una “forma de vida” y “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción social de la familia en condiciones dignas” (...) y “es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias” (FONAF, 2006:9, comillas en original). La importancia de la actividad agropecuaria para la sobrevivencia de la familia se había manifestado desde lo económico, dado que, como vimos, el 40% declaró que más del 50% de sus ingresos proviene de la misma. Es de destacar que también un 60% de encuestados reconoce la permanencia en la misma actividad a lo largo del tiempo. La historia de la producción agropecuaria en el partido que se remonta a varias generaciones atrás (Svetlitz de Nemirovsky, 2002) , contrasta con la ya mencionada histórica invisibilización de este sector por parte de los gobiernos locales y las políticas públicas. En tanto, dos de cada diez productores reconocen la importancia de la asistencia a programas públicos como modalidad motivadora de la actividad.

Los principales problemas que enfrentan estos productores familiares están relacionados con la falta de crédito (86,7%), la infraestructura de la que disponen (83,3%) y el tamaño de las superficies de tierra para trabajar (76,7%) a fin de ampliar su escala de producción. Estos son problemas históricos de la

30. Actual Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar.

agricultura familiar, que deben ser considerados urgentemente en las políticas públicas (Feito, 2014).

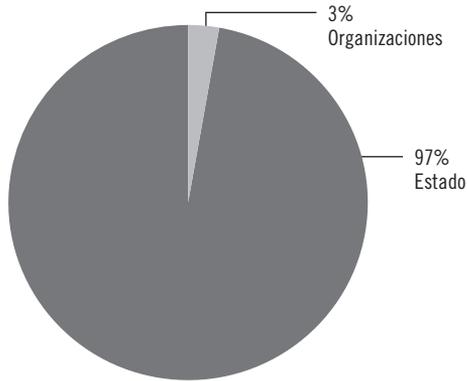
Gráfico N°39.
Principales problemas actuales



Fuente: PICT- 1389/2015

Es destacable que casi la totalidad (97%) reconoce el rol central del estado y de la política pública como mecanismo que puede favorecer su crecimiento económico y mejorar su productividad; el resto considera que es deber de las organizaciones mejorar la situación.

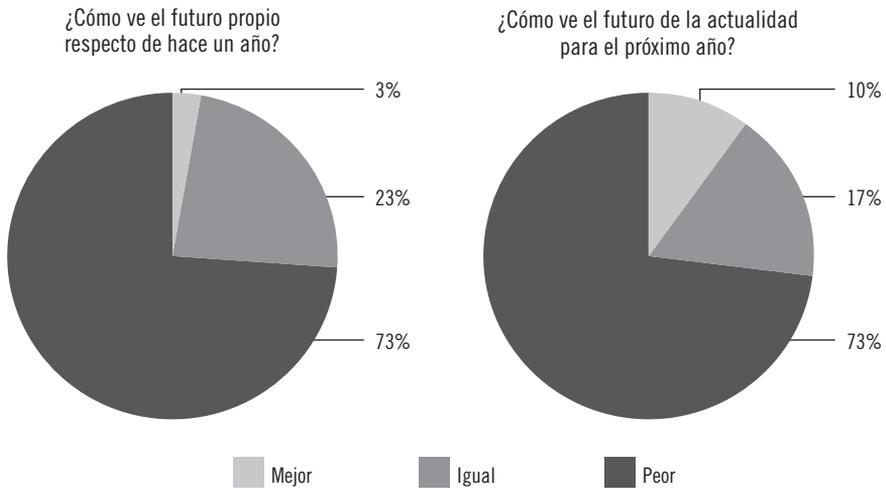
Gráfico N°40.
¿Quién debe colaborar en la resolución?



Fuente: PICT- 1389/2015

Siete de cada diez de los pequeños productores entrevistados (73%) se visualizan en peores condiciones económicas que el año anterior (2017) y a su vez la misma proporción cree que las mismas empeorarán en el siguiente año (2019).

Gráfico N°41

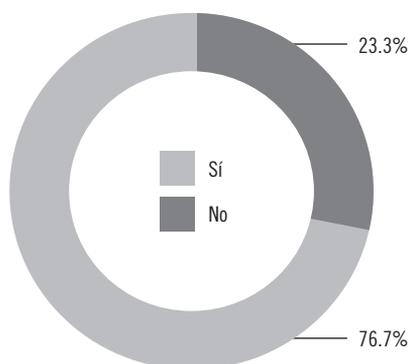


Fuente: PICT- 1389/2015

Al preguntar cómo valoriza la actividad agropecuaria en el partido en un rango de 0 a 10, el promedio fue de 4,4 puntos. Es decir que la valoración que hacen de este tipo de modalidad productiva es baja, independientemente del producto que se genere y del lugar donde se desarrolle. A su vez, la totalidad de las personas entrevistadas no ven diferencias entre la producción agropecuaria familiar del partido de La Matanza con la de otros partidos de la zona, a pesar de que otros como los del Territorio Periurbano Sur, están altamente tecnificados con prevalencia de superficie bajo invernáculo. Habría que analizar con mayor profundidad si esto podría deberse a una mala comunicación o falta de interacción de estos productores con los de otros partidos del periurbano.

Si bien el 76,7% de los productores conoce la existencia de programas específicos de desarrollo local que podrían ayudarlos, creen en su totalidad que este tipo de iniciativas deberían ser provistas por el estado a nivel de estrategias de capacitación local que favorezcan su crecimiento y su inserción en la zona.

Gráfico N°42.
¿Conoce algún programa de desarrollo implementado en la zona?



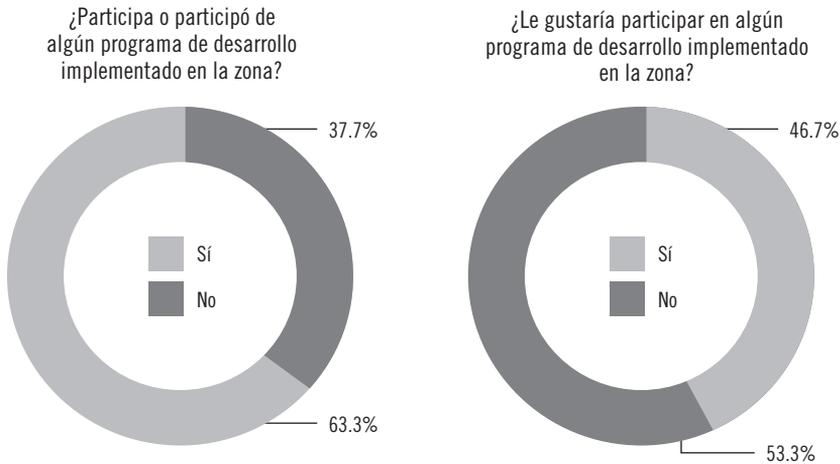
Fuente: PICT- 1389/2015

Seis de cada diez productores (63%) han participado en programas de capacitación locales, principalmente en “Cambio Rural” y “Pro-Huerta” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca³¹. No obstante, a más de la mitad (53,3%) no le interesaría

31. Al momento de realizar este relevamiento, en 2018, fue transformado en Ministerio de Agroindustria y posteriormente, en Secretaría de Agroindustria.

contar con este tipo de herramienta para mejorar sus producciones. Esto podría deberse tanto a haber tenido malas experiencias, como al cambio de gestión de gobierno nacional que asumió en diciembre de 2015 (Feito, 2020).

Gráfico N°43
Participación en programas de desarrollo



Fuente: PICT- 1389/2015

5. REFLEXIONES FINALES

Podemos conceptualizar a los productores encuestados como *productores familiares periurbanos*, dadas las siguientes características: las unidades económicas se localizan principalmente en zonas periurbanas (46,7%), la mayoría no tiene acceso a la tierra (40% son ocupantes, con permiso o sin él); 3 de cada 4 se dedica a una sola actividad; más de la mitad del ingreso familiar proviene en el 60% de los casos, de la actividad agropecuaria. De la baja proporción que tienen invernáculo (7,4%), cultivan un promedio de 85mts (que puede ser atendido por una sola familia); el 75% de las explotaciones cuenta con una sola vivienda; y el más importante indicador, la mano de obra: los trabajadores permanentes del establecimiento son en su mayoría (83%) familiares del productor (8 de cada 10) y contratan mano de obra acorde a los ciclos productivos, sólo el 10% lo hace

cuando lo necesita. Es decir que trabajan directamente en su predio, que no contratan mano de obra extra predial en forma permanente (Obschatko, Foti y Roman, 2006). La presencia de familiares en la unidad económica caracteriza a este tipo de establecimientos donde hay una yuxtaposición típica entre unidad económica y unidad doméstica.

Según la definición acordada por los países del MERCOSUR: “La pequeña agricultura familiar es un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas. La agricultura es un recurso significativo en la estrategia de vida de la familia, la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación. Y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al mercado” (FONAF, 2006). Como vimos, estos productores comparten todas estas condiciones.

Ellos venden sus productos mayormente mediante modalidades alternativas de comercialización. Los modelos informales de vinculación con los mercados son comunes pero poco comprendidos y no considerados en el apoyo de intervenciones para el desarrollo, a pesar de que tienen información y experiencias importantes para generar vínculos de mercados sostenibles y prestación de servicios (Vorley et al, citado en Caracciolo, 2015³²). Las cadenas cortas tienen un rol indispensable en la forma de organización de los mercados y permiten mejorar tanto la renta de los productores como las condiciones de alimentación de la población, constituyendo espacios de organización de la producción y comercialización de la agricultura familiar y otorgando alternativas al desarrollo rural (Gazolla y Schneider, 2017). Si bien los mercados concentradores tradicionales son centrales en economías complejas como la argentina, es posible pensar en otros mercados más justos y menos concentrados (Caracciolo, 2017) y que fomenten la soberanía alimentaria como eje de una estrategia de desarrollo que pretenda ser sostenible.

Por otra parte, la AF tiene el potencial de vincularse con modelos de producción sustentables tales como la agroecología, porque la eficiencia y sustentabilidad de este sector productivo agropecuario radica en sus elementos característicos que contrastan con la explotación capitalista: el uso privilegiado de la mano de obra familiar, que estructura tanto procesos sociales como

32. Vorley, B. (IIED); Lundy, M. (CIAT), MacGregor, M (IIED). (2008) Paper prepared for FAO and UNIDO as background to the Global Agro-Industries Forum, New Delhi, 8 - 11 April 2008. <http://pubs.iied.org/pdfs/G02340.pdf>.

productivos de la explotación; y el grado de mercantilización, que constituye una ventaja competitiva por el uso de relaciones sociales no mercantilizadas (Feito, 2019b). En el caso analizado se visualiza este potencial, si bien sólo el 16,7% manifiesta realizar prácticas agroecológicas en sus predios, ya que el 100% manifestó no realizar aplicaciones de agroquímicos.

La AF es un sector productor de alimentos de proximidad, pero para que éstos lleguen en tiempo y forma a los consumidores, se requieren canales alternativos de comercialización, así como promover el consumo de alimentos sanos, producidos cuidando el medioambiente, y fortalecer el asociativismo de los productores. Esto amerita considerar la interconexión entre las distintas esferas del sistema agroalimentario: producción, comercialización y consumo. El periurbano es un territorio estratégico para el desarrollo de sistemas de suministro de alimentos de proximidad. Los productores analizados utilizan canales alternativos de comercialización, para que los alimentos producidos por la AF puedan proveer seguridad alimentaria a los consumidores locales (Feito, 2019a).

La llamada “otra agricultura” (o, en términos de Peretti, 2013, “lo que queda”) consiste en un mundo de personas plural y heterogéneo que se reconocen como productores familiares, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, granjeros y muchas otras denominaciones a lo largo y ancho del país. Son productores pequeños y medianos (2,42 has promedio) que no siempre son pobres, pero sí tienen dificultades de acceso a recursos esenciales. Recursos naturales como tierra (la mayoría de los encuestados son ocupantes) y agua, pero también tecnología (sólo el 20% tiene tractores, implementos de labranza y sembradora, y ninguno tiene cosechadora), información, financiamiento (la mayoría, 86,7%, reconoce como principal problema la falta de acceso a créditos), y asesoramiento técnico (26,7% reconoce la falta de asesoramiento). Para Peretti, estos productores se encuentran produciendo y comercializando en desigualdad de condiciones frente a mercados cada vez más concentrados y exigentes (la mayoría de los entrevistados comercializa mediante entrega a domicilio, venta en fincas y en ferias, y sólo un 13,3% lo hace en mercados concentradores).

Se requiere, como ya señalamos en otros trabajos (Feito, 2014), un apoyo diferencial para esta “otra agricultura”. ¿Cómo se define este sujeto de políticas diferenciales? Regionalmente se está construyendo como una categoría política para poder focalizar políticas públicas de desarrollo rural (Lattuada, Márquez y Neme, 2012). Entonces, la agricultura excede

lo estrictamente agrícola y aún lo agropecuario, ya que involucra todas las actividades económicas llevadas en el medio rural (turismo, otros servicios, artesanías, agroindustria).

Este sector productivo, a pesar de su relativa precariedad e informalidad, debe ser considerado por su aporte económico al desarrollo nacional y su rol fundamental de proveedor de alimentos al mercado interno, y por tanto, se requieren políticas públicas diferenciales que consideren sus particulares características.

Bibliografía

- Altieri, M. (2002).** *Agroecology: the science of natural resource management for poor farmers in marginal environments.* Agriculture, Ecosystems and Environment, 93, 1–24.
- Asiain, A. (2013).** *González Catán y Virrey del Pino: La soja matancera hace su aparición.* Diario NCO. Recuperado de <http://noticiasconobjetividad.wordpress.com/2013/03/27/gonzalez-catan-y-virrey-del-pino-la-soja-matancera-hace-su-aparicion/>
- Barsky, A. (2005).** *El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires.* Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Vol. IX, núm. 194, 10-36. <<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-36.htm>> [Consulta: 14 de agosto de 2017]
- Battista, S.; Feito, M. C.; Cruz, A.O.; Irigoyen, M. S.; Virdó, A. N.; Aznar, M. V.; Lipera, L.; Pettinato, S.; Almonacid, C.A. (2017).** *Caracterización del sector agrícola en el Partido de La Matanza. Sustentabilidad económica, social y ambiental.* Informe Final de Investigación, PROINCE, Universidad Nacional de La Matanza.
- Cáceres, D.M.; F. Silvetti; G. Soto; W Robledo y H. Crespo (1997)** “*La Adopción Tecnológica en Sistemas Agropecuarios de Pequeños Productores*”. Agrosur. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/234001645_La_Adopcion_Tecnologica_en_Sistemas_Agropecuarios_de_Pequeños_Productores/citation/download
- Caracciolo, M. (2015).** *Situación de la institucionalidad de apoyo a la innovación comercial y de los procesos de gestión comercial de la agricultura familiar en la Argentina.* Bs As: IICA, 2015. <<http://www.iica.int>>.
- Caracciolo, M. (2017).** *Soberanía alimentaria y mercados alternativos.* 28 f. Monografía. Programa en Economía Solidaria. Escuela de Economía y Negocios. Universidad Nacional de Gral San Martín/Centro de Estudios y Formación en Economía Social y Solidaria La Yumba, Cooperativa de Consumo Ltda.
- Cieza, R.I.; Ferraris, G.; Seibane, C.; Larrañaga, G. y Mendocino, L. (2015).** *Aportes a la caracterización de la agricultura familiar en el Partido de La Plata.* En: Revista Facultad de Agronomía La Plata, Vol 114 ((Núm. Esp.1) Agricultura Familiar, Agroecología y Territorio: 129-142.

- Feito, M. C. (2014).** *Ruralidades, desarrollo, territorio y agricultura familiar en el Periurbano Norte de Buenos Aires. El caso de los partidos Exaltación de la Cruz y Luján.* Bs As: Ed La Colmena.
- Feito, M.C. (2019^a)** “Comercialización de la agricultura familiar para el desarrollo rural: feria de la Universidad Nacional de La Matanza”. En: Revista de Economía e Sociología Rural. Sociedad Brasileña de Economía Rural. En prensa.
- Feito, M.C.(2019b).** “Políticas públicas y gestión para la Agricultura Familiar en el Area Metropolitana de Buenos Aires: problemas y desafíos”. Ponencia presentada al Primer Encuentro Latinoamericano de Estudios del Rururbano, Santa Fe, Argentina, 7 y 8 de marzo 2019.
- Feito, M.C.(2020):** “La Agricultura Familiar en la cuestión alimentaria en Argentina: proveedores fundamentales del mercado interno”. En: Padawer, A. (ed.) El mundo rural y sus tecnologías. Ed. Facultad Filosofía y Letras, UBA.
- Feito, MC y Barsky, A. (2020):** Periurbano (1080-2020). En: Diccionario del Agro Iberoamericano, 2da edición. Ed. Tesseo Press, Bs As.
- FONAF (Foro de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar) (2006).** *Documento Base del FoNAF para implementar las políticas públicas del sector de la Agricultura Familiar.* Disponible en <http://www.fonaf.com.ar/documentos/Documento_base_FoNAF.pdf>
- Gazzola, M.y Schneider, S. (orgs.) (2017)** *Cadeias Curtas e Redes Agroalimentares Alternativas: Negócios e Mercados da Agricultura Familiar.* UFRGS Editora.
- Giordano, G. (2013).** Desarrollo tecnológico y agricultura familiar. Una mirada desde la investigación acción participativa. Ed INTA, Bs As. Disponible en: http://inta.gob.ar/documentos/desarrollo-tecnologico-y-agricultura-familiar/at_multi_download/file/INTA-IPAFNOA-Desarrollo_Tecnologias_Agric.Fliar.pdf
- INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2012.** Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Economía de la Nación.
- INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2012)** *Agricultura Urbana y Periurbana en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Creación de la estación Experimental Agropecuaria AMBA.* Bs As: Ed. INTA. <https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-creacin_eea_amba.pdf>
- Lattuada, M; Marquez, S.; Neme, J. (2012).** *Desarrollo rural y política. Reflexiones sobre la experiencia argentina desde una perspectiva de gestión.* Bs As: Ed Ciccus, 2012.

- Obstchatko, E.; Foti, P. y Román, M. (2006).** *Los pequeños productores en la república Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002.* Serie Estudios e Investigaciones N 10. Buenos Aires: SAGYP/IICA.
- Parés, G. (2009).** *Las funciones de la agricultura urbana y periurbana en La Matanza, desde la óptica de los propios agricultores, en la primera década del siglo XXI.* Tesis de Maestría. Buenos Aires/Madrid: Universidad Nacional de San Martín / Universidad Autónoma de Madrid.
- Peretti, P. (2013)** *Chacareros, soja y gobernabilidad. Del Grito de Alcorta a la Resolución 125.* Bs As: Ciccus.
- Schejtman, A. (1983).** “*Campesinado y desarrollo rural; lineamientos de una estrategia alternativa*”. Investigación Económica. Vol. XLII, número 164, abril-junio 1983. México.
- Schiavoni, G. (2010).** “*Describir y prescribir: la tipificación de la agricultura familiar en Argentina*”. En: MANZANAL, M.; NEIMAN, G. (comps.) *Las agriculturas familiares del Mercosur. Trayectorias, amenazas y desafíos.* Bs As: Ed Ciccus.
- Svetlitz de Nemirovsky, A. (2002)** *Tendencias en la dinámica de la estructura social agraria del partido de La Matanza, 1900-2000.* En: Documentos de Trabajo, Universidad de Belgrano, N° 88, Abril 2002.

Juan Carlos adivina su mundo
conoce sus sabores y entrañas
vislumbra años
y omite pesares

Del Potosí rocoso
al sereno Delta
sus pies transitan siglos
de historias viejas y actuales
siempre rogando a la tierra
un sueño refugiado

Él sabe
de caminos descalzos
huele la sonrisa del *mahis*
y su cuerpo habla:
lo que sustenta la vida
ilumina cada uno de los marlos.

Poema: **Susana Novick**
Foto: **María Carolina Feito**









CAPÍTULO II

ALGUNAS CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA MATANZA

Mariano Jäger

1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se intentan explicar algunos aspectos económicos de la producción de la agricultura familiar en el Partido de La Matanza. El análisis apunta particularmente al acceso a los mercados; las condiciones de producción; la descripción de la intensidad de capital; la sanidad de la producción y al apoyo técnico recibido. La información con que se realizó el trabajo proviene de: la observación directa del autor, de declaraciones de informantes clave y del resultado de una encuesta (30 casos) puesta en campo por el Proyecto que da sustento a este libro³³. Los informantes clave que han contribuido son miembros de las cooperativas de productores, productores individuales, personal del SENASA³⁴, personal del INTA³⁵, personal del Pro Huerta³⁶ y personal técnico del MAGyP³⁷.

33. PICT-2015-1389: "(Políticas públicas, ruralidades y medioambiente en el periurbano bonaerense. El partido de La Matanza)", ejecutado en el Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM y del cual participaron algunos miembros del Instituto de Medioambiente. Las características técnicas de este relevamiento cuantitativo se mencionan en el Capítulo 1 de este libro.

34. Servicio Nacional de Sanidad Animal.

35. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

36. Programa Pro Huerta.

37. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación Argentina.



Del análisis realizado se concluye que, a pesar de hacer varias décadas que se impulsa técnicamente y se trata de dar un empuje político a la agricultura familiar, mucho es lo que resta por hacer. Su precariedad y su compromiso social, que por un lado constituyen parte de su atractivo, junto a la falta de controles, la falta de capacitación y la incapacidad de mantener la oferta en el tiempo, siguen siendo el cuello de botella para su acceso definitivo a los mercados.

2. LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRODUCCIÓN

La planificación del ordenamiento territorial de la producción agropecuaria en La Matanza s una entelequia, nunca existió. El desarrollo de la situación a través de los años es lo que puede verse hoy como resultado de un criterio oportunista carente de todo tipo de lógica en términos de logística: distancia no óptima a los mercados, vías de acceso con gestiones, cercanía a zonas inundables y falta de estructura de servicios de provisión de insumos.

Ante la pregunta de cómo fue el proceso por el cual los productores se instalaron en donde lo hicieron, todos los informantes clave contestaron lo mismo: en donde pudieron. Si la distribución espacial hubiera estado planificada, la situación sería otra. Seguramente se reducirían los costos de distribución para llegar a los mercados y los caminos críticos que hacen a la logística serían mucho más acordes a las necesidades ambientales, tanto en riesgo, como en impacto como en eficiencia.

El ordenamiento territorial ambiental al que deberían responder los establecimientos productivos es diferente al ordenamiento territorial social requerido. Las necesidades de agua, los impactos del transporte, en el aire, en el suelo, en la sociedad etc. deberían estudiarse, o haberse estudiado en profundidad y haberse actuado en consecuencia.

Paul Krugman³⁸ (Krugman, 1993) se preguntó hace más de veinte años: ¿Por qué se concentra la actividad económica en determinadas localizaciones en vez de distribuirse uniformemente por todo el territorio?, ¿qué factores determinan los lugares en los que la actividad productiva se aglomera?,

38. Premio Nobel de Economía el 2008. Economista de la Universidad de Princeton y de MIT.

¿cuáles son las condiciones para la sostenibilidad o la alteración de tales situaciones de equilibrio?

A estas preguntas el economista respondió diciendo que el motivo del ordenamiento territorial espontáneo son los rendimientos crecientes a escala que permiten algunas localizaciones. Estos rendimientos provienen de la competencia imperfecta y son dominantes en relación a los rendimientos constantes, como con la competencia perfecta y las ventajas comparativas del modelo neoclásico tradicional. También argumentó que las economías externas surgen de un proceso de aglomeración de naturaleza regional o local. Este último argumento es cuando menos discutible en el ámbito de las economías pobres.

Blacutt Mendoza (2013)³⁹ sostiene que tratar de elaborar una “teoría general” es una idea más que cuestionable, no responde a la misma lógica que la física en la que muchos teóricos tienen como objetivo elaborar una Teoría General del Universo en la que las fuerzas fuertes, las débiles, el electromagnetismo y la ley de la gravedad se fundan. Otro ejemplo de esta lógica es el de John Mayard Keynes, con su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero que emulando a la física teórica trata de elaborar una teoría económica general.

Paul Krugman trató de elaborar una “solución general” para explicar las razones y causas de las concentraciones espaciales. Pero este intento fue completamente logrado. Ante la pregunta de ¿por qué no se cumplen siempre los principios de su teoría? respondió en forma argumentativa no necesitando explicar las razones diciendo que las diferencias entre un caso y otro responden a que las distintas ciudades difieren en los accidentes de la historia, el azar y la casualidad⁴⁰.

Es entre estas excepciones a la regla general que, al igual que las producciones, los mercados de La Matanza en los que se venden los productos de la agricultura familiar están situados en puntos que también son el resultado del azar oportunista. Los productores venden adonde se les permite, no adonde

39. Ver: Blacutt Mendoza, Mario (2013) “El desarrollo local complementario”. Ed Fundación Universitaria Andalu. Disponible en: <https://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1252/geografia-economica.html>

40. Para analizar las características de la agricultura periurbana de Buenos Aires, se puede considerar la lógica de una secuencia decreciente de intensidad en el uso del suelo, partiendo desde el borde de la ciudad Ver: Barsky, A. (2005). El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires. En: Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales, IX(194), 10-36. Recuperado de <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-36.htm>

ha sido estudiado que es el mejor lugar. Tampoco en este caso la distribución espacial ha sido ambiental o socialmente planificada, menos aún ambas a la vez encontrando la posición que maximice ambas situaciones. No existen estudios o planificación para minimizar el impacto del transporte de la mercadería o sobre los accesos. Todo es artesanal y espontáneo. Debido al estado de crisis permanente, tanto en lo económico, lo social y ahora lo ambiental que vive la Argentina, los centros de distribución minoristas cierran y abren en forma continua y cambian los espacios.

3. LOS ESTABLECIMIENTOS

Desde hace más de dos décadas, la división entre agricultura familiar y otros tipos de agricultura es difícil de establecer. El gran avance de este tipo de producción hizo que sus límites se hicieran difusos y por lo tanto ya no es tan fácil su diferenciación del resto.

En el AMBA⁴¹, el acceso a la tierra sigue siendo el punto más difícil de superar para la agricultura familiar. Los productores deben pagar el arrendamiento por adelantado a precios no regulados. Debido a esto, aquellos productores que tienen vocación de dedicarse a la agroecología se ven en dificultades de hacerlo. Necesitan un rápido retorno de dinero para cumplir con las obligaciones. Es así que muchos no pueden permitirse dedicarse a la agroecología por lo que realizan una producción hortícola rápida para poder pagar el alquiler que le piden.⁴²

41. Área Metropolitana de Buenos Aires.

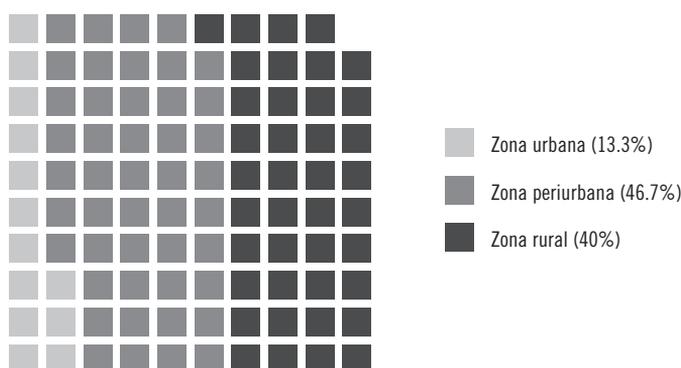
42. La agroecología, como ciencia, busca establecer relaciones con los sistemas científicos y tecnológicos, pero su validación depende además del contexto socio productivo y ambiental en que los agricultores se desempeñan. Muchos no pueden acceder a la agroecología porque se instalaron en suelos muy afectados por décadas de agroquímicos y otros están recién en transición agroecológica, que podemos considerar como el proceso de transformación de los sistemas convencionales de producción hacia sistemas de base agroecológica. Este proceso comprende no solo elementos técnicos, productivos y ecológicos, sino también aspectos socioculturales y económicos del agricultor, su familia y su comunidad. Por lo tanto, el concepto de transición agroecológica debe entenderse como un proceso matrilíneal de cambio que ocurre a través del tiempo (Caporal y Costabeber, 2004, citados en Marasas, M (comp.) (2012) El camino de la transición agroecológica. Ed INTA, Bs As.

Por otro lado, en el sector hay tensiones por el acceso al agua y el negocio inmobiliario que le dificultan el acceso a la tierra o a la posibilidad de asentarse en un lugar.

Durante los años 2003-2015, la agricultura familiar con asistencia técnica se organizó y se reposicionó como productora de alimentos, situación que hoy ya se ve estabilizada, a pesar de las normativas y políticas desarrolladas en contra de este sector entre los años 2015 y 2019.⁴³

En el Municipio de La Matanza, las unidades económicas productoras de la agricultura familiar, como consecuencia del proceso azaroso y oportunista antes descripto, se localizaron principalmente fuera de las zonas urbanas: cuatro de cada diez están ubicadas en zonas rurales y casi cinco de cada diez en las zonas periurbanas.

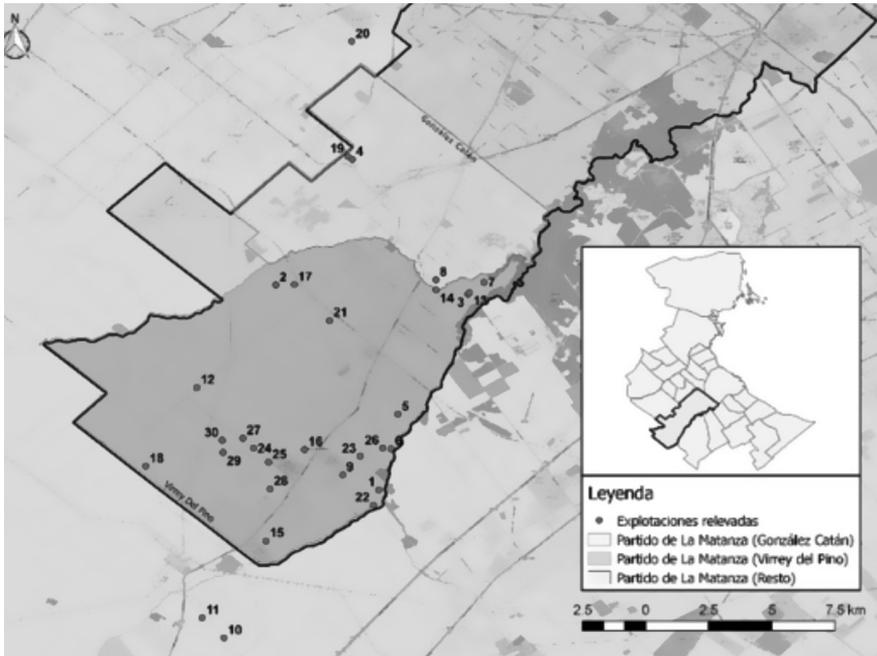
Gráfico N°1.
Ubicación de las unidades económicas de la agricultura familiar en el partido de La Matanza



Fuente: PICT- 1389/2015

43. Desde principios de 2016, la derogación de normativas y la desaparición de programas y políticas públicas para la producción familiar agropecuaria puso en riesgo las actividades del y en el primer semestre de 2018, se han planteado a nivel de normativas y políticas públicas gubernamentales una serie de cuestiones que atentan contra la integridad y mantenimiento de la AF, así como contra la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población. Ver: Feito, MC; Battista, S. y Jäger, M: (2019) "*Políticas públicas y actores sociales en el periurbano oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el partido de La Matanza*". En. Actas ELER 2019 Primer Encuentro Latinoamericano De Estudios Del Rururbano, Santa Fe, Argentina, 7 y 8 de marzo 2019.

Mapa N°1.
Ubicación de las 30 explotaciones de Agricultura Familiar relevadas en La Matanza



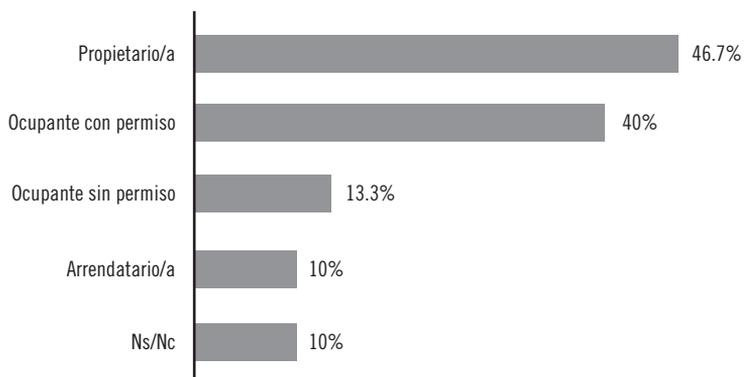
Fuente: PICT- 1389/2015

Los lugares en los que se asientan las producciones, mayormente en Virrey del Pino, no siguen ningún patrón de ordenamiento en relación a los mercados o a la logística de los proveedores. Con el paso del tiempo, algunas condiciones con respecto al momento del asentamiento han mejorado, no como consecuencia de la planificación de la política pública si no por la espontaneidad, la conveniencia económica y el oportunismo territorial. Ejemplo de esta situación ha sido la instalación en la zona de Virrey del Pino, en zonas aledañas a las explotaciones, de negocios que les venden insumos a los productores.

4. TENENCIA DE LA TIERRA

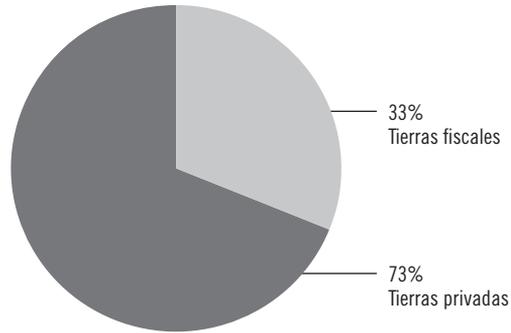
La mayor concentración de unidades productivas de la agricultura familiar en La Matanza se encuentra en áreas cercanas a los poblados o zonas urbanas, consecuentemente el valor de la tierra sobre el que se lleva a cabo este tipo de producción es muy alto. Es habitual que la producción de tipo intensiva se produzca en terrenos que mayormente no son de propiedad completa de los productores. Estos arriendan una parte o el total de la superficie. Otra característica que se debe señalar es que este tipo de producción ya no ocupa tierras marginales, sino de alta capacidad productiva, a la que usualmente se la contamina con una batería importante de agroquímicos. Pese a ir en avance, es rara la producción agroecológica siguiendo todas las normas del arte. La escala económica que deberían tener las explotaciones para ser unidades económicas agroecológicas rentables, según comunicación verbal de los informantes del INTA AMBA, no se alcanza.

Gráfico N°2.
Régimen de tenencia de la tierra de los productores de la agricultura familiar en el partido de La Matanza



Fuente: PICT- 1389/2015

Gráfico N°3.
Sector de pertenencia de la unidad económica de la agricultura familiar en el partido de La Matanza



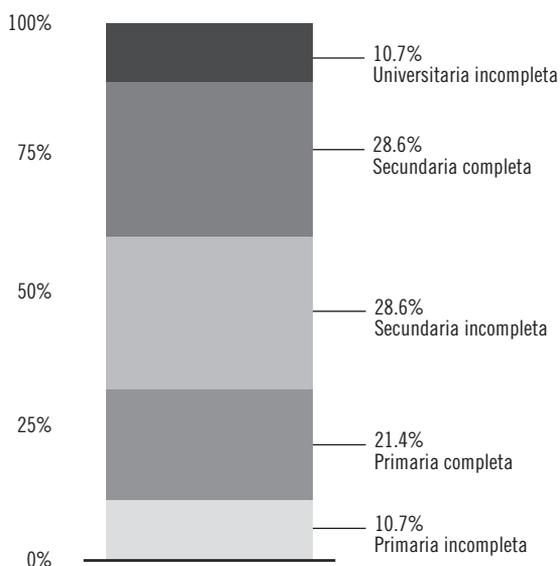
Fuente: PICT- 1389/2015

5. MANO DE OBRA

La mayor parte de la mano de obra en las explotaciones en La Matanza está compuesta por miembros de las familias. El 90% del total de la producción hortícola consumida en el AMBA es producida por este tipo de productor bajo la modalidad mano de obra intensiva.

Por el nivel educativo declarado por los jefes del hogar, es posible suponer que la mayoría están en condiciones de recibir y aprovechar el apoyo técnico brindado por los organismos oficiales y entidades de la sociedad civil a través de distintos programas.

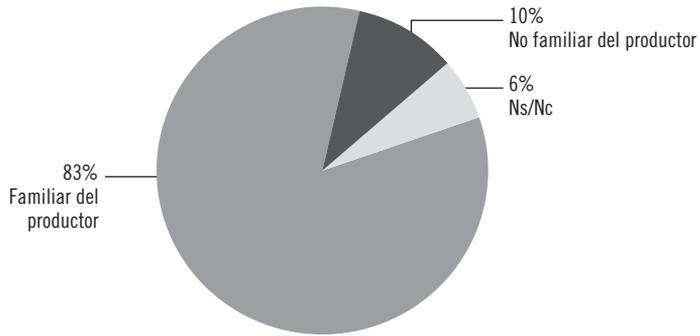
Gráfico N°4.
Nivel educativo de los jefes del hogar de los establecimientos de la agricultura familiar en el Partido de La Matanza



Fuente: PICT- 1389/2015

El 90,5% de los hogares entrevistados están integrados por hasta tres hijos, de los que el 53,7% son de varones en su mayoría oriundos del lugar donde residen (7 de cada 10 hijos/as nacieron en La Matanza). La alta intensidad de la mano de obra está ligada al bajo nivel de tecnología adoptado y a la baja escala de producción. Es así que, la mano de obra, si bien es muy intensa, tiene una incidencia menor en el costo que si no fuera del tipo familiar. Dado que ocho de cada diez declaró trabajar con familiares asociados que desarrollan su tarea de manera permanente se verifica la condición de que la población estudiada está enmarcada en el concepto de Agricultura Familiar.

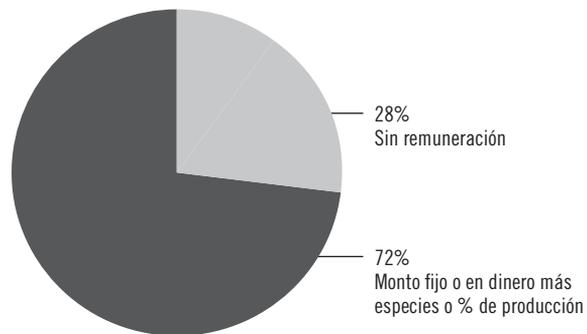
Gráfico N°5.
Trabajadores permanentes – Familiar/no familiar



Fuente: PICT- 1389/2015

Como se evidencia en el **Gráfico N° 5**, el 72% de los trabajadores recibe como forma de pago un monto fijo en dinero y un pago en especie o un porcentaje de la producción.

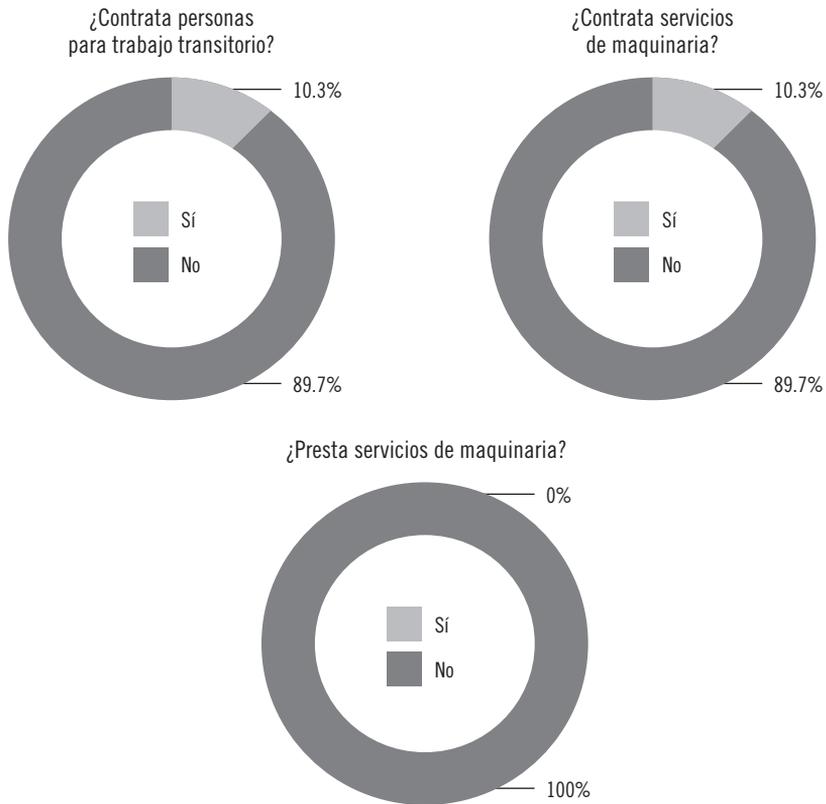
Gráfico N° 6
Forma de pago a los trabajadores familiares permanentes



Fuente: PICT- 1389/2015

Solamente el 10% de los encuestados declaró contratar mano de obra transitoria. Esta situación coincide con el nivel de desarrollo de las unidades, ya que son estas mismas unidades productivas las que tienen capacidad para contratar servicios de maquinarias.

Gráfico N° 7.
Trabajo transitorio, servicios de maquinaria y presta servicios de maquinaria



Fuente: PICT- 1389/2015

6. INTENSIDAD DE CAPITAL

Siguiendo una lógica única de razonamiento, excepto por los productores más grandes o alguna excepción, los productores de la agricultura familiar de La Matanza no llevan cálculos de costos de su producción. Es así que no registran ni la cantidad, ni los precios de los innumerables insumos que deben comprar. Si tienen dinero en el bolsillo compran lo que necesitan sin hacer ningún cálculo explícito o especulación de si lo que recuperarán con la venta.

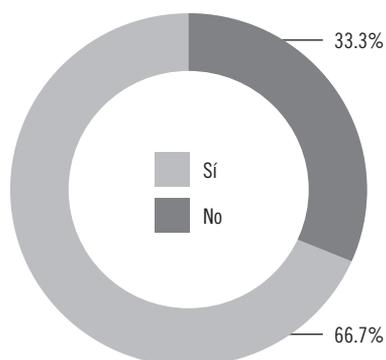
Es difícil hablar de lo que es el capital inmovilizado, ya que hay muchos de estos productores que trabajan con una alta intensidad de capital para lo que es este tipo de producción, es decir, requieren de muchos postes, nylons, alambres, palas, carpidoras, etc. Toda inversión de baja intensidad tecnológica, por lo cual podemos concluir que en general son producciones de capital intensivo de baja calidad tecnológica. Según comunicación verbal de los técnicos del Pro Huerta, sólo los grandes tienen acceso a comprar o a alquilar maquinaria. Los pequeños, con sus economías cercanas a la subsistencia difícilmente o nunca lo hacen. En el período 2003-2015, debido al crecimiento y a la estabilidad económica⁴⁴, los miembros del sector tuvieron acceso al crédito y pudieron acceder a herramientas mecanizadas que posteriormente no han podido reparar o renovar.

7. ASESORAMIENTO

Dos de cada tres productores reciben asesoramiento técnico del Estado, principalmente sobre cuestiones relacionadas con las técnicas productivas. Si bien se les ofrece a todos, solamente el 25% recibe lineamientos relacionados con temas que hacen a la administración de la unidad.

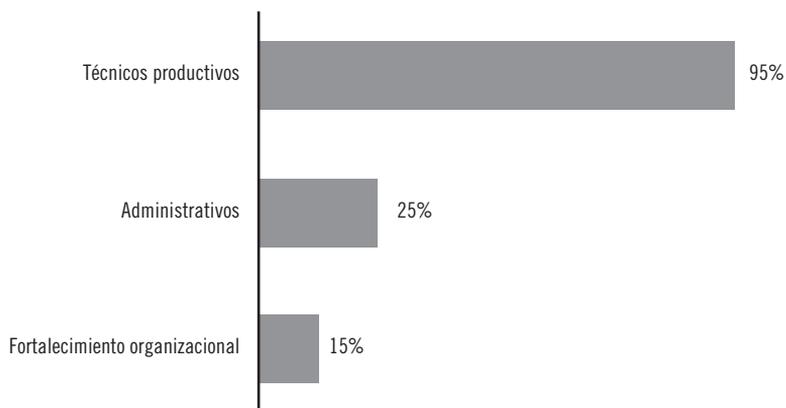
44. Además de las normativas y políticas del gobierno de esos años para favorecerlos (créditos, financiamiento, subsidios, exenciones impositivas, ayudas de programas sociales y productivos, la Ley de Agricultura Familiar, etc).

Gráfico N° 8.
Recibe asesoramiento técnico externo



Fuente: PICT- 1389/2015

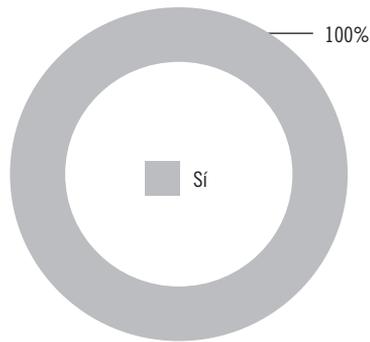
Gráfico N° 9.
Aspectos en los que Recibió Asesoramiento Técnico Externo



Fuente: PICT- 1389/2015

Como queda evidenciado en el Gráfico N°10, todos los que aún no reciben asesoramiento manifestaron el interés por hacerlo.

Gráfico N°10.
Desea Recibir Asesoramiento



Fuente: PICT- 1389/2015

Una particularidad es que los productores tienen a su disposición un importante sistema de asistencia técnica del que pueden recibir apoyo, tanto en lo productivo como en lo económico. Los informantes clave del sector de apoyo técnico consultados coinciden en que es muy curioso el hecho de que los productores reciben con gusto el apoyo en lo técnico mientras que desoyen, o no se interesan, por el asesoramiento económico a pesar de que ellos insisten sobre el tema.

Si bien las semillas son aportadas en forma gratuita por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación⁴⁵ desde hace muchos años, los productores hoy prefieren la compra de plantines por considerar que estos les dan mayor garantía sobre el futuro. A modo de ejemplo citamos que, un plantín de lechuga que el productor paga entre \$0,50 y \$0,70 lo vende después de cultivado a \$ 4 ó \$5. Esta situación el productor, que no hace un análisis costo-beneficio, independientemente del resultado real, según comunicación personal de los extensionistas del INTA, la perciben un buen negocio. En Virrey del Pino⁴⁶, gran parte de la asistencia técnica la hace la UNLZ⁴⁷ desde su sistema de extensión.

45. En el momento de realizar la encuesta, 2018, se denominaba Ministerio de Agroindustria.

46. Localidad del partido donde se ubica la mayoría de los productores encuestados.

47. Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Sanidad de la Producción

Las condiciones de sanidad de la producción de la agricultura familiar en La Matanza son inciertas. Hay una gran cantidad de controles establecidos legal y técnicamente que, por lo general, no se cumplen. Como dijimos en el acápite sobre intensidad del capital, si bien muchos productores reciben asesoramiento por parte de instituciones como el INTA, existen pocos controles sobre los productos que llegan a los mercados, tanto al intermediario como al consumidor. A la fecha, no parece haber un sistema de monitoreo y de testeado de lo que efectivamente se vende en los pequeños negocios al público⁴⁸.

8. AGROQUÍMICOS

La aplicación de agroquímicos para forzar la producción es una práctica habitual. El asesoramiento que reciben los productores en relación a la cantidad y la calidad del uso de agroquímicos aplicados es escaso, hay controles, pero no estrictos, no hay órdenes de compra firmadas por profesionales que puedan permitan trazar que tipo de agroquímico utilizo cada productor. En torno a los residuos de los envases de esos agroquímicos, si bien está legislado como debería ser su manejo, no se da cumplimiento a la normativa⁴⁹. No hay empresas especializadas en el reciclado de los envases o su lavado. Particular atención

48. La Coordinación de Agricultura Familiar del SENASA (SENAF) trabaja hace varios años en adaptar normativas de sanidad o elaborar específicas, para este sector particular de la producción agropecuaria. Ejemplo de esto es la inclusión del sector en el Código Alimentario Argentino. En Argentina, la normativa vinculada a la producción y comercialización de alimentos está básicamente destinada a reglamentar la actividad realizada por aquellos sectores más concentrados de la cadena, generalmente vinculados al modelo del “agronegocio” y esquemas similares. Estas normativas no contemplan las características propias de los productores familiares, lo cual se transforma en un obstáculo importante para el desarrollo del sector. Ver: González, E.; C. Gómez y M. Moricz (2013). “Normativas vinculadas a los procesos de producción y comercialización de la agricultura familiar urbana y periurbana”. Ed INTA, Bs As. Disponible en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_normativas_vinculada_a_proc_de_prod_y_comerc_.pdf

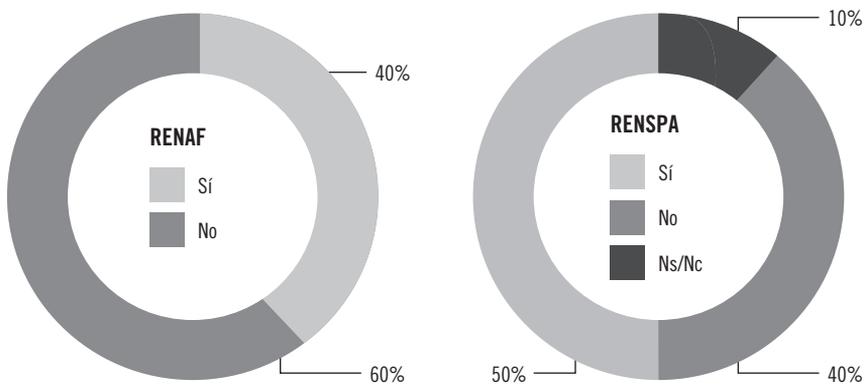
49. Este tema es muy complejo, ya que el Estado tampoco proporciona las herramientas adecuadas para posibilitar el cumplimiento de la normativa de eliminación y descarte de envases de agroquímicos. Por ej , en el periurbano bonanerense no existe ningún Centro de Almacenamiento Transitorio de Envases Fitosanitarios.

debe darse al hecho de que el uso de agroquímicos está estrechamente ligado al valor del dólar estadounidense. Cuando el Peso Argentino se deprecia en relación al dólar estadounidense, los productores dejan de utilizar los agroquímicos recomendados por los asesores. No está claro para los extensionistas si en este período en que el valor del dólar norteamericano frente al Peso Argentino es muy alto, los productores sustituyen los agroquímicos recomendados por ellos por otros más baratos o dejan de aplicarlos.

9. MONOTRIBUTO SOCIAL

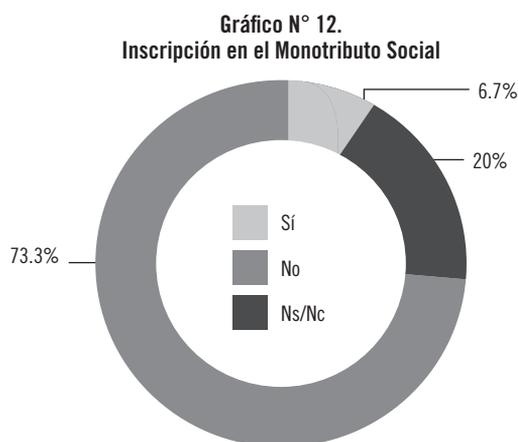
Solo cuatro de cada diez productores están inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y cinco de cada diez en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). La precariedad respecto de la inscripción al RENAF (que se puede explicar por varias razones, entre ellas, las dificultades que conlleva la realización de este trámite digital y la falta de oficinas para realizarlo en forma personal) indica que hay muchos sujetos excluidos de los beneficios de la Ley Nacional de Agricultura Familiar.

Gráfico N°11.
Productores de la Agricultura Familiar del partido de La Matanza
inscriptos en el RENAF y el RENSPA



Fuente: PICT- 1389/2015

El concepto de monotributo y sus implicancias es difuso para la mayoría de los productores de la agricultura familiar de La Matanza. En el **Gráfico N° 11** se presentan los porcentajes de inscripción en el Monotributo Social. El bajo nivel de registro, 6,7%, se complementa con el casi inexistente aporte a la seguridad social. De acuerdo a la comunicación personal con Agentes de Cambio Rural, los productores han tenido una experiencia mala con el Monotributo Social. No habiéndolo comprendido cabalmente en un principio, dejaron de pagarlo y al poco tiempo se encontraron con una deuda de la que no tenían conciencia de que se iba generando.⁵⁰



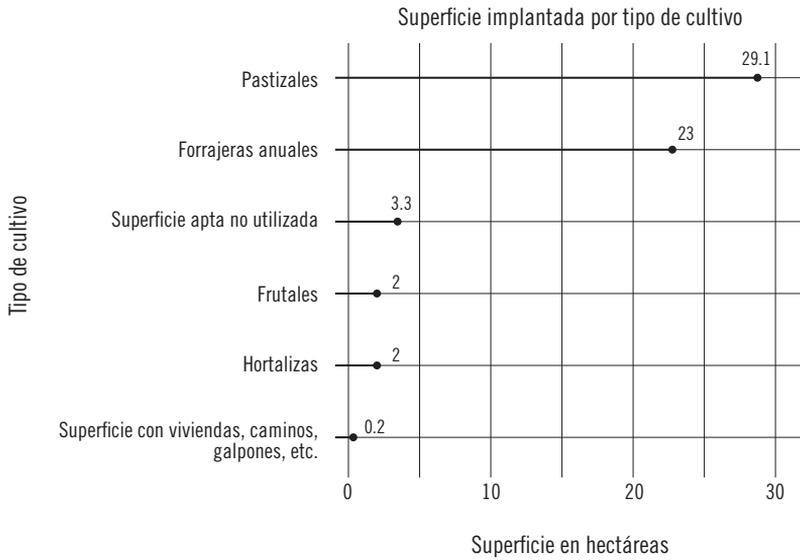
Fuente: PICT- 1389/2015

10. USO DE LA TIERRA

El promedio de superficie implantada por establecimiento en La Matanza es cercano a las 2,4 hectáreas con un máximo de 12 y un mínimo de 0,2. Para forrajes anuales la superficie media es de 23 hectáreas y para pastizales 29,09 hectáreas. Las hortalizas son las que menos superficie ocupan.

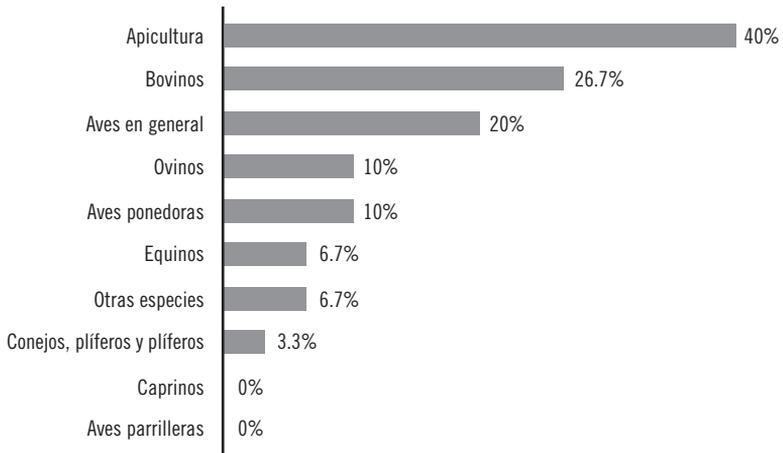
50. Cabe aclarar que durante el gobierno de Mauricio Macri, la Res 34/18 de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del MINAGRO, confirmó el fin del Monotributo Social Agropecuario desde diciembre 2018, debiendo abonar ahora el agricultor el 25% del beneficio que cubría el Mrio de Agroindustria, y luego no se explicó a los agricultores inscriptos que, si no se daban de baja, seguirían acumulando deuda.

Gráfico N° 13.
Superficie Implantada por tipo de Cultivo



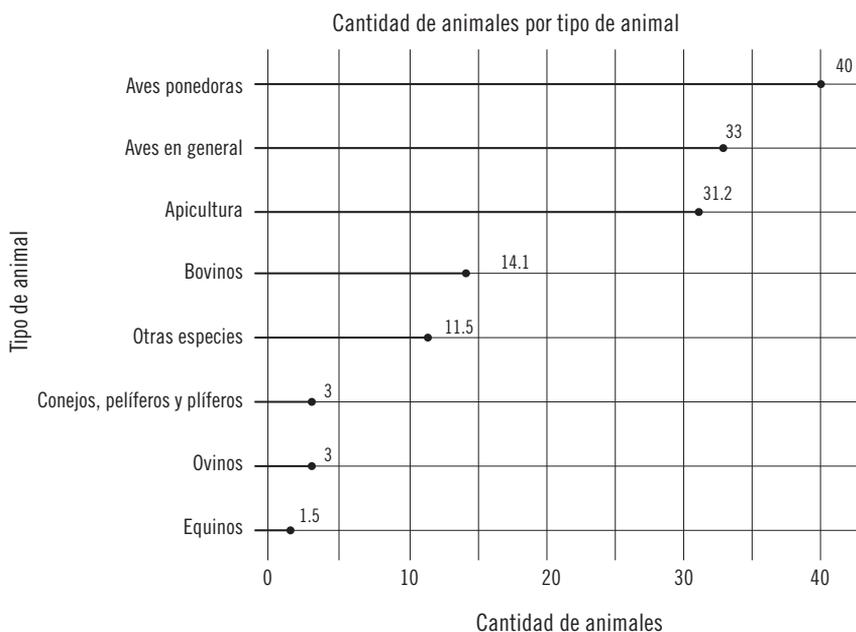
Fuente: PICT- 1389/2015

Gráfico N° 14.
Producción ganadera



Fuente: PICT- 1389/2015

Gráfico N° 15.
Cantidad de Animales por Tipo de Animal

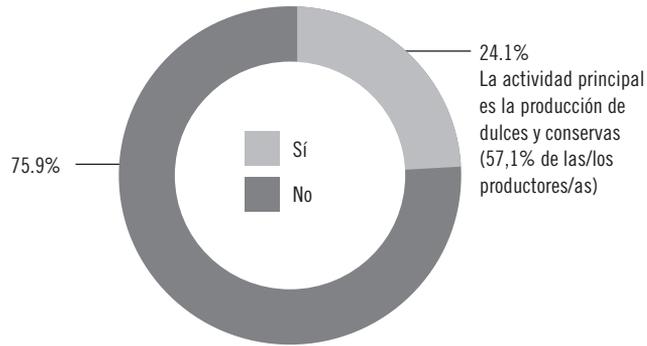


Fuente: PICT- 1389/2015

Es interesante observar que los productores de carácter familiar se dedican principalmente a una sola actividad. Solo uno de cada cuatro reconoce desarrollar más de un tipo de producción en la unidad económica en la que trabaja. De éstos, más de la mitad complementa su tarea principal con producción y envasado de dulces y conservas. Ninguno de los productores entrevistados desarrolla actividades de turismo.

Debido a la falta de dimensión para ser unidades económicas de la mayor parte de los establecimientos considerados tambos o chancherías, es habitual que los productores saquen a pastorear los animales a la vera de los caminos y rutas o los dejen libres para que coman lo que puedan.

Gráfico N° 16.
¿Realiza otras actividades primarias?

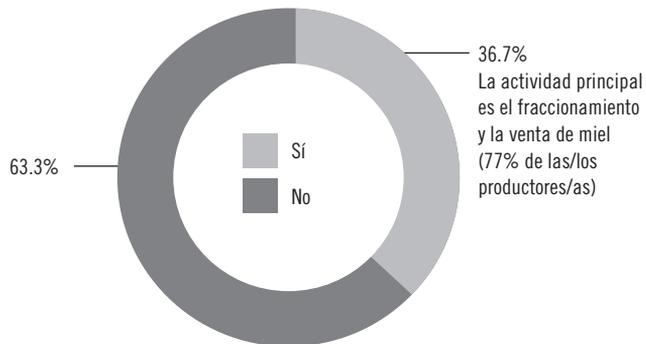


Fuente: PICT- 1389/2015

11. COMERCIALIZACIÓN

El 36,7% de los productores familiares comercializa sus productos. Esta situación implica que aparte de la producción, realizan tareas específicas en relación con esta otra actividad.

Gráfico N° 17.
¿Realiza actividades con fines comerciales a partir de la producción de su establecimiento?



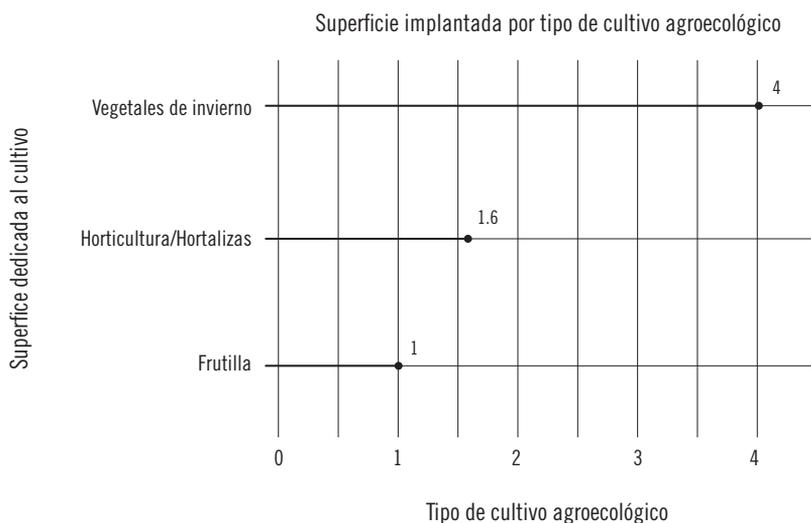
Fuente: PICT- 1389/2015

El 72,2% de las unidades económicas se dedica principalmente al fraccionado y a la venta de miel y el 27,3% a la comercialización de masa para mozzarella.

12. PRÁCTICAS CULTURALES

Ninguno de los productores encuestados declaró utilizar agroquímicos o semilla transgénica. Solo el 13,3% declaró realizar siembra directa e incorporar avances relacionados con la producción de los cultivos que facilitan su relación armónica con el medio natural. El 83,3% de los productores desarrolla una agricultura convencional que no contempla el uso racional de los recursos naturales, la incorporación de abonos orgánicos ni la asociación entre los distintos tipos de cultivos. De los que la utilizan, los vegetales de invierno representan el cultivo con mayor cantidad de hectáreas promedio cultivadas (4 has. por productor), le siguen la horticultura y hortalizas con 1,6 has. en promedio.

Gráfico N°18.
Superficie implantada por cultivo agroecológico



Fuente: PICT- 1389/2015

Según refiere uno de los informantes calificados del INTA: “en la Matanza los productores agroecológicos son realmente agroecológicos, son pequeños y por lo tanto se pueden controlar. Si bien la agroecología en La Matanza es minoritaria está en ascenso, excepto por algunas excepciones de productores de origen boliviano en Virrey del Pino. El sistema de huertas agroecológicas cumple

con las condiciones para recibir esa calificación. En Matanza la agroecología está en ascenso. Las comunidades bolivianas no son agroecológicas”.

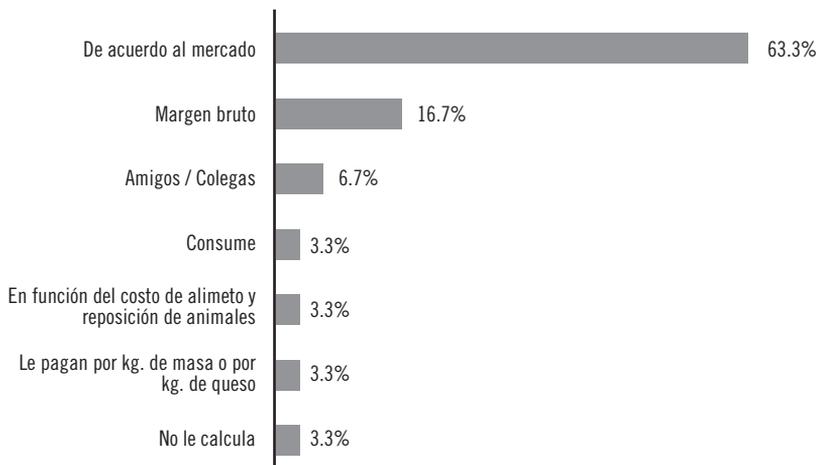
Otro informante calificado sostuvo que: “En Matanza las comunidades bolivianas representan entre el 5 y el 10% del total. No hay datos de cuanto no es agroecológico”.

Algunos puntos para resaltar son que en la localidad de Virrey del Pino las producciones conviven con pequeños tambos, un feed lot y algunas lechonerías de hasta 1.000 cabezas.

13. CÁLCULO DE COSTOS

Uno de cada dos productores declaró no calcular el costo de los bienes que produce. De este modo, la gran mayoría desconoce los gastos necesarios que debe efectuar para poder seguir desarrollando la actividad, así como también estimar el beneficio que por ella obtiene. La variedad de modalidades que utilizan los productores para calcular es muy amplia, siendo la principal la de basarse en el precio de mercado (63,3%), y en menor medida, estimar un porcentaje sobre las ventas (16,7%).

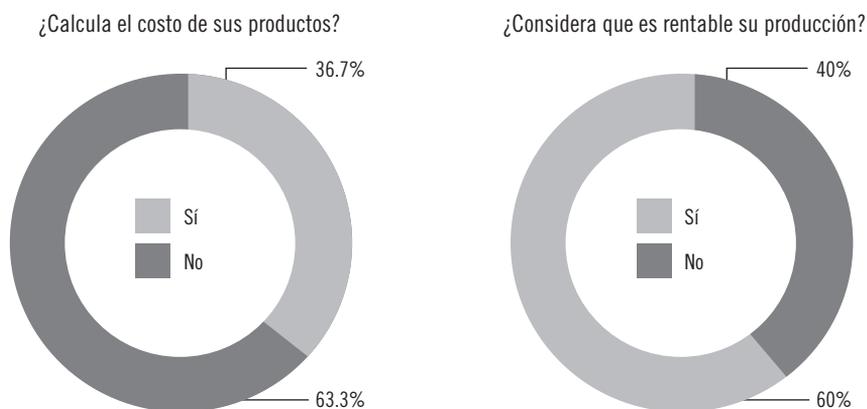
Gráfico N°19.
¿Cómo establece el precio de sus productos?



Fuente: PICT- 1389/2015

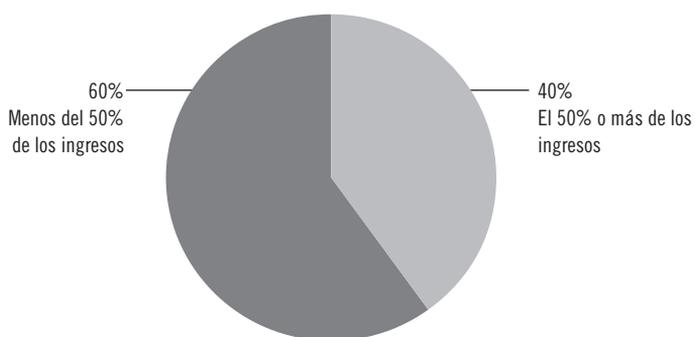
Seis de cada diez productores consideran que la producción que realizan es rentable. Si se analiza la participación relativa en los ingresos queda en evidencia que la actividad agropecuaria representa más de la mitad de los ingresos en cuatro de cada diez unidades productivas.

Gráfico N° 20.
¿Calcula el costo de sus productos? ¿Considera que su producción es rentable?



Fuente: PICT- 1389/2015

Gráfico N°21.
¿Qué porcentaje de sus ingresos proviene de la actividad agropecuaria?



Fuente: PICT- 1389/2015

14. INVERSIONES

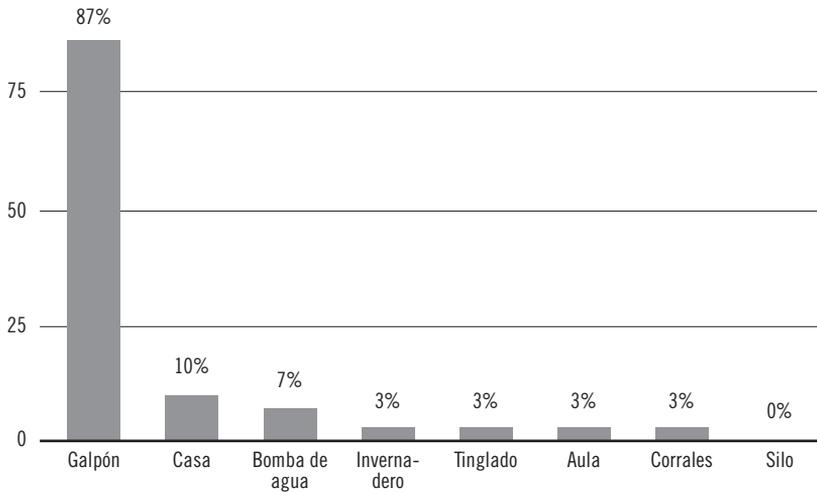
Para facilitar la exposición se dividieron las inversiones en Edificaciones y Estructura y Maquinarias, Equipos y Vehículos.

Edificaciones y Estructura

En este caso, se ha considerado como instalaciones al conjunto formado por los galpones, las casas, las bombas de agua, invernaderos, tinglados, aulas, corrales y silos.

Como puede verse en el **Gráfico N° 21**, el 87% de los establecimientos de la agricultura familiar de La Matanza cuenta con galpones y el 10% con casas. El uso principal que se le da a las instalaciones está relacionado con actividades de depósito, 17,9% de manera exclusiva y 14,4% combinándola con otras actividades tales como el fraccionamiento de miel.

Gráfico N°22.
Instalaciones



Fuente: PICT- 1389/2015

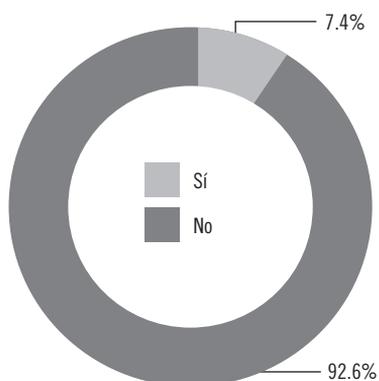
Solamente el 7,4% de los productores cuenta con un invernadero, situación que compromete los cultivo producción frente a posibles eventos climáticos. En la **Tabla N°1** se presentan los datos de la superficie promedio de los invernaderos declarados.

Tabla N° 1.
Superficie promedio de los invernaderos declarados

Superficie promedio	Superficie mediana	Superficie mínima	Superficie máxima
85.07407	68	1	300

Fuente: PICT- 1389/2015

Gráfico N° 23.
¿Tiene invernáculos?



Fuente: PICT- 1389/2015

Maquinarias, Equipos y Vehículos

Se puede pensar que el nivel de incorporación de tecnología en la producción es una función que depende de varias variables.

$$(1) \quad NT = f(C; AT; EE; AM; CI; PC; I; CT; OP)$$

Donde=

NT= Nivel de Tecnologización

C= Crédito

AT= Asesoramiento Técnico

EE= Estabilidad Económica

AM= Acceso a los Mercados

CI= Cultura de la Innovación

PC= Perfil de los Consumidores

I= Ingresos

CT= Costo de la Tecnología

OP= Objetivos del Productor

De acuerdo con el período político analizado, el acceso al **Crédito** en la República Argentina, para los productores de la agricultura familiar ha variado. Por lo general no han tenido grandes facilidades. La condición de informalidad en muchos casos les ha impedido el acceso (Jäger et al 2003). Por otro lado, la organización de este colectivo o los sistemas de extensión del Estado tampoco han organizado microcréditos o fondos rotatorios efectivos que ayudaran a mejorar los niveles de tecnologización. Dado el bajo nivel de capitalización de las unidades económicas, la entrada a la actividad requirió un bajo aporte de capital inicial que, en la mayoría de los casos entrevistados, fue aportado por el productor.

Uno de los, si no el principal problema que enfrentan los productores familiares está relacionado con la falta de crédito. El 86,7% de los entrevistados declaró desear acceder a crédito, tanto para infraestructura como para obtener mayor superficie de tierra para trabajar. Ambas situaciones les permitirían ampliar su escala de producción. En el 96,7% de los casos los agricultores declararon que es el Estado quien debería darles el acceso al crédito deseado.

En cuanto al **Asesoramiento Técnico**, como ya se dijo en otras partes de este capítulo, los productores de La Matanza cuentan con numerosos programas que desde los organismos del sistema científico tecnológico y desde las universidades nacionales los asisten⁵¹.

La falta de **Estabilidad Económica** que los productores viven a diario conspira contra todo el resto de las políticas que se puedan impulsar para la adopción de tecnologías. La falta de un horizonte de mediano o largo plazo que les permita el

51. Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Ministerio de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación de la Nación, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través del Pro-Huerta; etc. Si bien durante el período de la encuesta, el gobierno nacional estaba realizando un ajuste y vaciamiento importante del sistema científico y tecnológico (se bajó de rango el Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaría; se eliminaron Institutos de Investigación para la Agricultura Familiar y Agencias de Extensión del INTA; se despidió a casi el 85% del personal de la Secretaría de Agricultura Familiar del entonces Ministerio de Agroindustria y se hicieron importantes recortes en salarios e ingresos del personal de CONICET (becarios e investigadores de planta). Todo esto reflejó grandes problemas para continuar o mejorar el asesoramiento técnico ofrecido a los productores analizados.

pago y repago hace que los productores por lo general consideren deseable abstenerse de asumir compromisos a futuro.

El **Acceso a los Mercados** es aleatorio. No siempre los productores pueden, si lo desean, obviar a los intermediarios o tener asegurados en el tiempo sus puntos de venta. La existencia de organizaciones que se auto erigen como representantes y negociadoras del resto muchas veces hace que algunos productores no quieran o no puedan estar presentes en algunas ferias o mercados. Un tema adicional relacionado es la estacionalidad de la oferta.⁵² Los productores varían los productos comercializados de acuerdo a la época del año. Esto hace que a veces su acceso a algunos mercados se dificulte debido a que otros productores ya ofrecen sus productos. Dependiendo de la oferta de productos, particularmente importante se puede tornar la estacionalidad de los ingresos de muchos productores. En el caso de los productores de verdura de hoja en el invierno, se puede pensar que esta es de “mantenimiento” hasta que llegue la época de la venta de ají, tomate y otros productos de mayor valor.

La **Cultura de la Innovación** no es igual para todos. Dependiendo del espíritu personal y del trabajo de los extensionistas, la predisposición a la innovación es mayor o menor. Condicionados por la realidad económica imperante en la Argentina, léase falta de Estabilidad Económica, es muy difícil evaluar este ítem. Es de suponer que, si la estabilidad económica existiera, seguramente el escenario sería otro. Dado que esto es contra fáctico es imposible saberlo.

El **Perfil del Consumidor** para el productor de la agricultura familiar, particularmente aquellos que se orientan en forma voluntaria a la agroecología, es quien aprecie su esfuerzo por producir en forma sustentable. A los otros productores tradicionales el consumidor le es indiferente. En el caso de los productores “agroecológicos”, es de hacer notar que la diferencia de calidad en el producto no siempre lo hacen valer en el diferencial de precios. Las condiciones económicas de la mayoría de los consumidores que acceden a los mercados en los que se comercializan los productos de la agricultura familiar discriminan por precio y no por calidad.⁵³

52. Esto se relaciona directamente con que la mayoría no tienen invernáculos (sólo el 7,4% declaró tenerlos), por eso no pueden ofrecer mercadería en contra estación.

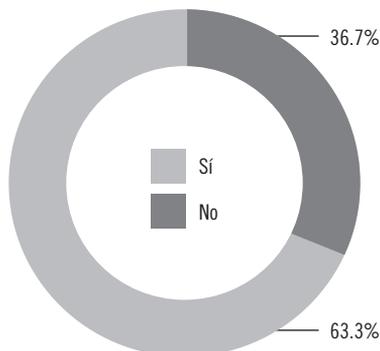
53. Esto podría estar cambiando desde la voluntad, no desde el bolsillo. La influencia de los movimientos de organizaciones de consumidores de la economía social y solidaria que educan para consumir productos sanos y saludables después de tantos años de lucha provocan que el consumidor si pudiera se incline por productos agroecológicos. La pobreza y las recurrentes crisis económicas conspiran contra el cambio.

El **Costo de la Tecnología** varía en forma sustantiva de un período a otro. La República Argentina es un importador neto en lo que respecta a la tecnología más compleja por lo que su costo está atado al valor del tipo de cambio de la moneda. En lo que respecta a tecnología más básico, en muchos casos de producción nacional, su costo también sigue el valor del tipo de cambio ya que gran parte de los insumos con que se elaboran son importados.⁵⁴

Los **Objetivos del Productor** influyen directamente en la adopción de tecnología. En muchos casos, dependiendo de la imagen que estos quieran dar, los productores adoptarán o no tecnología.

Los **Ingresos** de los productores están estrechamente ligados a si pertenecen a una asociación. Pertenecer les permite un mayor acceso al asesoramiento técnico, a compras comunitarias, a recibir financiamiento y a ser beneficiario de programas o proyectos. En el caso de los productores entrevistados, seis de cada diez manifestaron pertenecer a alguna asociación.

Gráfico N° 24.
¿Pertenencia a una Asociación?

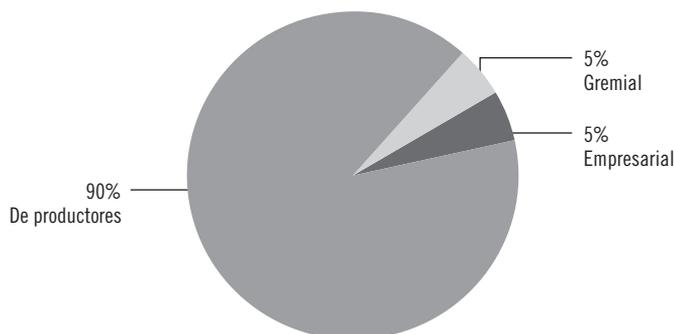


Fuente: PICT- 1389/2015

De los que pertenecen a asociaciones, el 89,5% forma parte de una asociación de productores. El resto forma parte de asociaciones empresariales o gremiales.

54. Desde el año 2012, la Cámara Argentina de Fabricantes de Herramientas y Maquinaria para la Agricultura Familiar CAMAF, trabaja intensamente en articulación con los Institutos de Investigación para la Agricultura Familiar IPAF del INTA, en la fabricación de tecnologías apropiadas y apropiables específicas para este sector. En el partido de La Matanza se destaca el gallinero móvil que fue implementado en la huerta Entre Todos de Lomas del Mirador.

Gráfico N° 25.
Tipo de Asociación a la que Pertenece



Fuente: PICT- 1389/2015

El 57% de los productores dispone de un transporte que, como se muestra en la **Tabla N°2**, en el 47% de los casos es de su propiedad. En el caso de las máquinas y equipos diversos también se nota la primacía de la propiedad frente a lo no propio, 27% y 3% respectivamente.

Tabla N°2.
Porcentaje de personas con maquinarias, equipos y vehículos propios / no propios

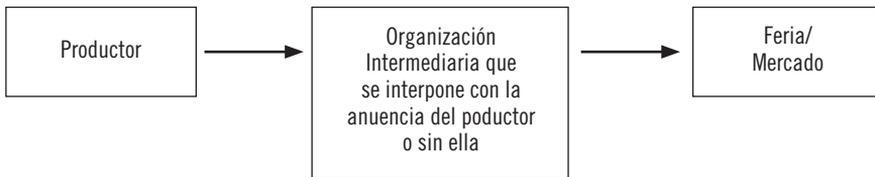
Maquinaria	Propios	No propios	Total
Vehículos de transportes	47%	10%	57%
Máquinas y equipos diversos	27%	3%	30%
Tractores	7%	3%	10%
Implementos de labranza	7%	0%	7%
Sembradora	3%	0%	3%
Cosechadora	0%	0%	0%

Fuente: PICT- 1389/2015

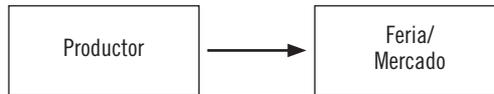
15. COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS

En el Diagrama N° 1 se presentan los esquemas posibles de llegada al mercado del productor.

Diagrama N° 1.
Esquemas posibles de llegada al mercado del productor
Con intervención de organización intermediaria



Sin intervención de organización intermediaria

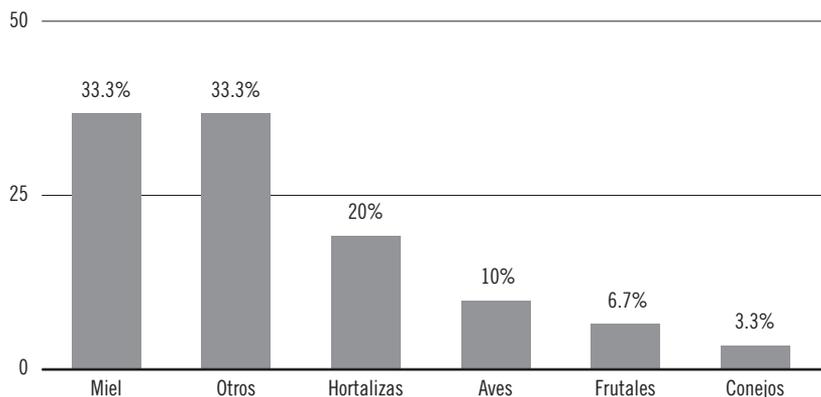


Fuente: Elaboración propia en base a datos encuesta PICT 1389/2015

En el **Gráfico N° 26** se presentan los tipos de producción que comercializan y sus participaciones relativas. Es llamativo que la miel (33,3%) y las hortalizas (20%) representen un 53,3% del total.⁵⁵

55. La miel representa ese alto porcentaje de productos comercializados porque la API-CULTURA es la actividad pecuaria que más peso tiene en el partido, según la encuesta.

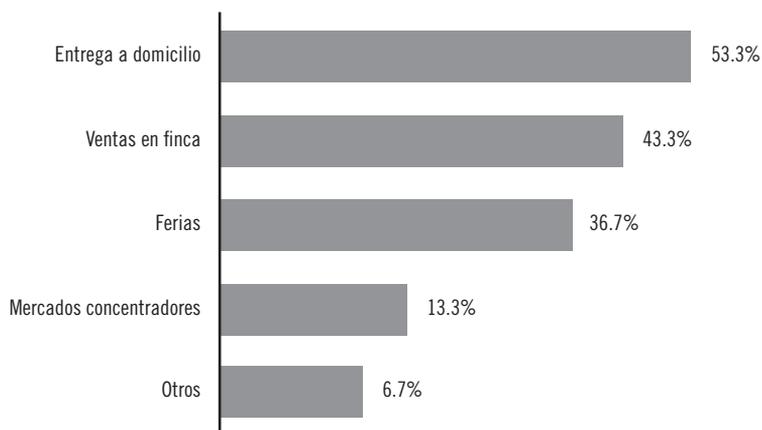
Gráfico N° 26.
Productos comercializados (% del total)



Fuente: PICT- 1389/2015

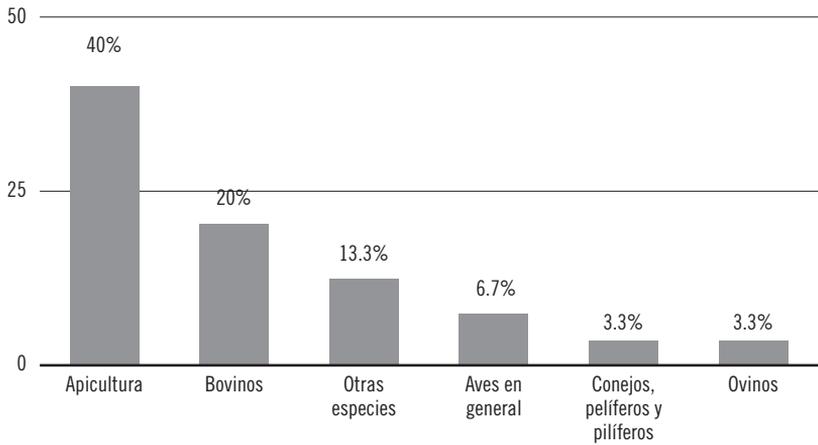
A su vez, los canales de comercialización de estos productos refieren principalmente a la entrega en el domicilio del cliente (53,3%) o a la venta directa en la finca (43,3%). De este modo, el alto nivel de precariedad del circuito productivo se visualiza también a través de la forma principal que adopta la comercialización de los productos que se venden.

Gráfico N° 27.
Principales canales de comercialización



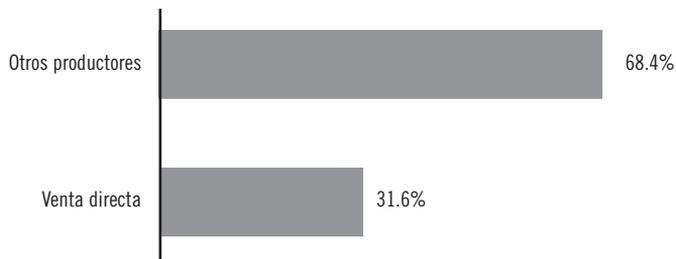
Fuente: PICT- 1389/2015

Gráfico N°28.
Especies que comercializa



Fuente: PICT- 1389/2015

Gráfico N°29.
Principales canales de comercialización

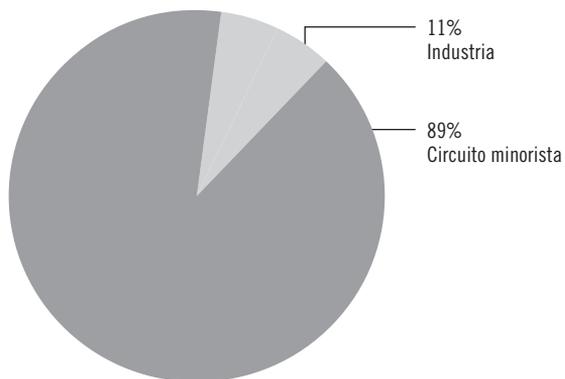


Fuente: PICT- 1389/2015

En el caso de la comercialización de la leche, llama la atención que uno de cada cuatro productores de leche reconoce que la comercializar a través de su venta minorista.⁵⁶

56. De acuerdo a comunicaciones personales con extensionistas de INTA, en La Matanza aún se comercializa leche cruda y de baja calidad, mediante entregas domiciliarias. Esto atentaría contra su posible envío a la industria, lo que podría explicar que sólo el 11% comercializan la leche por esta vía.

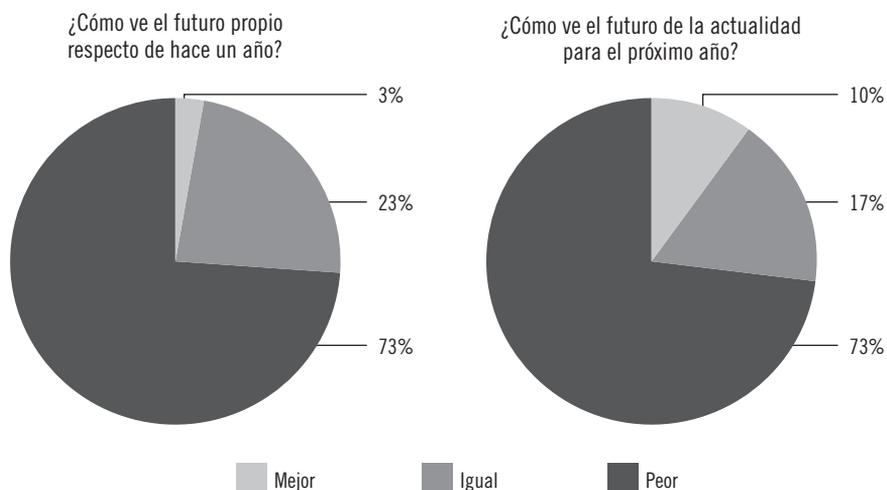
Gráfico N° 30.
Canales de comercialización de la leche



Fuente: PICT- 1389/2015

Si bien el contexto de pandemia y crisis económica actual ha perdido toda vigencia, es interesante recordar las opiniones de como veían los entrevistados su futuro respecto del año anterior (2017) y para el próximo año (2019).

Gráfico N° 31.
Perspectivas respecto del pasado y desde la actualidad



Fuente: PICT- 1389/2015

No es motivo de este trabajo verificar, pero si señalar, la diferencia del resultado obtenido y reportado en el Gráfico N° 31 con el obtenido por la encuesta de percepción puesta en campo por el Instituto de Economía y Sociología del INTA⁵⁷ en el 2017 en el que el 50% declaró tener expectativas mejores para el futuro .

Básicamente, y como se dijo antes, la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 cambió todos los escenarios y por lo tanto las expectativas.

16. CONCLUSIONES

El proceso de radicación de los establecimientos agropecuarios en La Matanza ha sido errático y falto de una planificación explícita. Es el resultado de una política de desatención a las necesidades del ordenamiento territorial. La lógica subyacente en la argumentación de Paul Krugman y Blackut Mendoza acerca de la cercanía a los mercados y la existencia de una infraestructura de provisión de insumos fue un invitado ausente. Más ausente aún fue la consideración de los factores ambientales.

La preguntas de Krugman ¿por qué se concentra la actividad económica en determinadas localizaciones en vez de distribuirse uniformemente por todo el territorio?, ¿qué factores determinan los lugares en los que la actividad productiva se aglomera?, ¿cuáles son las condiciones para la sostenibilidad o la alteración de tales situaciones de equilibrio?

A estas preguntas el economista responde diciendo que de la evidencia expuesta queda claro que lo que resulto es el producto de un proceso oportunista que permitió que los establecimientos se asentaran en donde podían. El costo de la tierra y la oportunidad de su ocupación son la explicación. La estructura de provisión de insumos también fue oportunista: se instalaron adonde están las producciones. Los mercados en los que se venden los productos de la agricultura familiar en La Matanza también están situados en puntos que resultan del azar oportunista. Los productores venden en los lugares y en las condiciones en que se les permite, no hay una planificación que lo ordene. El proceso de

57. INTA (2017) INDICE DE CONFIANZA DEL SECTOR AGROPECUARIO. Instituto de Estudios Sociales Centro de Investigación en Ciencias Políticas Económicas y Sociales. Ed. INTA.

distribución espacial obtenido no es el que maximiza los beneficios sociales o ambientales, menos aún el conjunto óptimo.

Los impactos del transporte de las mercaderías no han sido evaluados. Como se señaló en el artículo, todo es artesanal y espontáneo, pero no en el sentido de Krugman sino en el de la oportunidad. Esta situación se ve continuamente re impulsada por el estado de crisis económica, social y ambiental que vive la Argentina. Este proceso resulta en que los centros de distribución minorista cierran y abren en forma continua en distintos lugares y cambian los espacios. Todos los puntos desarrollados dejan claro que los productores analizados en su mayoría tienen opiniones y valoraciones similares de sus experiencias. De resaltar es que el acceso a los mercados y el problema de la estacionalidad no son considerados temas de relevancia, tampoco lo es la fijación de precios.

El acceso al crédito es identificado por los productores como el cuello de botella más importante. Esto sucede mientras reciben apoyo técnico para la producción desde el Estado, pero no atienden al apoyo que este les ofrece en materia económica. Esta situación contrasta con la idea de que el Estado debería ser quien les otorgue financiamiento para mejorar tecnológicamente y acceder a tierras que den a sus producciones la escala necesaria para ser “rentable”.

La falta de controles por parte del Estado y de los productores mismos constituye un problema. Claramente el atractivo de lo artesanal de la producción se ve amenazado por las percepciones sobre el riesgo en la inseguridad de su ingesta. Es por ello que se requieren políticas y normativas específicas para este sector, a fin de que pueda producir y elaborar mediante valor agregado en origen, alimentos de calidad, inocuos y sanos.

Bibliografía

- Barsky, A.** (2005). El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires. En: Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales, IX(194), 10-36. Recuperado de <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-36.htm>
- Blacutt Mendoza, M.** (2013). La Nueva Geografía Económica. El Desarrollo Local Complementario. Localizable en eumed.net/libros-gratis/2013/1252/geografia-economica.html
- Feito, MC; Battista, S. y Jäger, M: (2019)** “*Políticas públicas y actores sociales en el periurbano oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el partido de La Matanza*”. En. Actas ELER 2019 Primer Encuentro Latinoamericano De Estudios Del Rururbano, Santa Fe, Argentina, 7 y 8 de marzo 2019.
- González, E.; C. Gómez y M. Moricz (2013).** “Normativas vinculadas a los procesos de producción y comercialización de la agricultura familiar urbana y periurbana”. Ed INTA, Bs As. Disponible en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_normativas_vinculada_a_proc_de_prod_y_comerc_.pdf
- Jäger, M.** (2003) *Fondos Rotatorios: Algunas Experiencias en la República Argentina del Uso de Fondos Rotatorios en la Lucha contra la Desertificación*. Agencia Alemana de Cooperación (GTZ) y el Mecanismo Mundial Abril 2003.
- Krugman, P.** (1993) Geografía y Comercio. ISBN-10 : 8485855647. Editorial: Antoni Bosch Editor, S.A.

Otras fuentes

- Encuesta Proyecto PICT-2015-1389.** Políticas públicas, ruralidades y medioambiente en el periurbano bonaerense. El partido de La Matanza. 2018.
- Informantes calificados:** extensionistas del programa Pro huerta (INTA/MDS); del programa Cambio Rural (INTA/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca); técnicos de la EEA AMBA INTA; MAGyP, SENASA y MaDyS.

INTA (2017) Índice De Confianza Del Sector Agropecuario. Instituto de Estudios Sociales. Centro de Investigación en Ciencias Políticas Económicas y Sociales. Ed. INTA.

Res 34/18. Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del MINAGRO,

Cuántas sonrisas
frente al sol que palpita.
Cuántas delicias
transparentes reinos
caminan.
Bailan los frascos
seducidas cosechas
mezclados sabores
de pícaros y fecundos matices.
El celofán nos incita
bellezas simples se ofrendan
montañas vivas navegan
hacia el cielo trabajoso
que en la mesa habita.

Poema: **Susana Novick**
Foto: **María Carolina Feito**







CAPITULO III

CONSIDERACIONES TEÓRICAS: POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO RURAL

María Abelina Acosta Felquer

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo constituye un respaldo teórico centrado en dos conceptos: políticas públicas y desarrollo rural, ya que la superficie rural del municipio de La Matanza representa un tercio del mismo y actualmente la regulación de la gestión pública del sector es una asignatura pendiente.

Por tanto, incorporamos al marco teórico la discusión sobre las nociones de desarrollo, incluidas las de desarrollo rural, visto como un proceso conflictivo en búsqueda de la autonomía. A la vez, conceptualizamos la política pública, fundamental para entender cómo se encara la gestión del municipio de La Matanza y para desarrollar el objetivo general del proyecto de investigación que originó este libro: aportar un paquete de propuestas para la agenda pública municipal y contribuir a optimizar estrategias de intervención que consideren el territorio como estructura activa de los procesos de desarrollo.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS

El concepto de desarrollo varía según las improntas de las políticas públicas o privadas y/o de las gestiones de carácter privado. Por esto, consideramos al Estado como un ámbito de disputa, al igual que el territorio. Desde esta perspectiva, la política pública se constituye, como señalan Oszlak y

O'Donnell (1995:112) en “[...] un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil”.

En su trabajo clásico pero aún vigente, Oszlak y O'Donnell (1995), concibiendo al Estado como una forma de la práctica social y no por fuera de la sociedad, definen a las políticas públicas como tomas de posiciones de parte de alguien que habla en nombre del Estado frente a una cuestión que ha sido problematizada socialmente. En lugar de suponer que existe siempre “una” política racionalmente diseñada, que intenta resolver definitivamente problemas que están en la agenda del Estado; se refieren a cuestiones sociales que ingresan a esa agenda, y respecto de las cuales tanto el Estado como la sociedad van tomando posiciones en el intento de resolverlas. Por lo tanto, el abordaje del estudio de las políticas públicas debería centrarse más en la naturaleza de las cuestiones sociales que plantean diferentes sectores de la sociedad y del propio Estado; y, a partir de allí, analizar cuáles son las vicisitudes del tratamiento de esa “cuestión” (Oszlak y O'Donnell, op cit). Al referirse estos autores a los impactos de las políticas estatales, considerados como los cambios operados en las “variables dependientes” por efecto de nuestra “variable independiente”, opinan que:

[...] si las políticas estatales son parte de un proceso social tejido alrededor de cuestiones, y si a él concurren políticas de actores privados que pueden tener gran peso sobre el curso seguido por los eventos estudiados, el tema de los impactos se complica enormemente. Dado X cambio en cierta característica Z, ¿qué proporción de ese cambio podemos atribuirlo causalmente a políticas estatales, a políticas privadas y a otros factores ajenos a unas y a otras? (Oszlak y O'Donnell, 1995:124).

Sin embargo, Bourdieu (1988) considera que las estructuras pueden ser modificadas desde la acción política teniendo en cuenta, según Giddens (2003), que el ser humano es un agente intencional cuyas acciones obedecen a razones y, por lo tanto, los actores controlan reflexivamente su conducta. De este modo, los actores registran no sólo su acción sino también la de otros inmersos en un contexto, es decir, a los aspectos sociales y físicos en los que se mueven (Giddens, 2003). A este respecto Feito (2005) considera que un actor social opera dentro de un contexto de poder ya que cada

actor ejerce influencia constante a partir de sus necesidades, pensamientos o intereses. En este entramado de relaciones de poder el concepto de *agencia* desarrollado por Giddens (1984) es importante, ya que se refiere a la fuerza o poder que provoca un resultado. Al mismo tiempo, Long (1992) considera que la noción de agencia no es sinónimo de capacidad de tomar decisiones, sino que además se requiere capacidad para organizar prácticas que permitan realizar las decisiones tomadas. La capacidad de agencia, entonces, está definida por el poder de provocar el resultado. De este modo, aseguramos que los actores sociales son partícipes activos dentro de un escenario conformado por actores locales y externos en donde se encuentran en permanente negociación.

Ahora bien, en cuanto a los problemas del Estado latinoamericano, Oszlak y O'Donnell (1995:100) opinan que:

[...] de los nuevos patrones de dominación política, aunque recoge clásicos temas de nuestras disciplinas, está siendo replanteado por acontecimientos y tendencias que se manifiestan en el común terreno de autoritarismo, de rigideces sociales, de desigualdad, de dependencia y de crisis económicas. Pero, por distintos caminos, varios países de la región han experimentado la reciente emergencia de sistemas de dominación mucho más expansivos, comprensivos y burocratizados. Dicho de otra manera, el Estado latinoamericano tiende hoy a ser más “moderno”.

A este último respecto del Estado moderno y en palabras más recientes, Manzanal (2014:6) considera claramente que:

“Un ejemplo de ello sucede cuando el Estado nacional y/o los estados provinciales favorecen e impulsan las oportunidades de inversión del capital extranjero bajo la consigna de que su interés de invertir en el país es la mejor oportunidad para el crecimiento nacional y, consecuentemente, una real contribución para el desarrollo. De este modo, se promueve el avance de la extranjerización en los ámbitos nacionales a partir de una legislación más permisiva y de la desregulación de las normativas restrictivas previamente existentes. Incluso se facilita el ingreso de estas inversiones de alta rentabilidad subsidiando su actividad. Y tanto los Estados nacionales como provinciales aplican diferentes mecanismos para garantizar la rentabilidad

a los grandes inversores; además de gestionar recaudos legales que aseguran y facilitan la salida del capital y de sus beneficios (sin obligación de reinversión alguna en el territorio nacional).”

En el caso de América Latina se ve “[...] una tendencia a amplificar el significado del Estado-nación a través de renovaciones constitucionales que han abierto las ideologías y narrativas de la nación a nociones de multiculturalismo y pluriétnicidad. Estos procesos están frecuentemente acompañados de la delegación de ciertos poderes territoriales y concesión de autonomía a actores no-estatales (Oslender, 2010:111). Esto coincide con lo manifestado por Naharro et al. (2010) sobre que el territorio es fundamental a la hora de analizar el concepto de desarrollo, ya que este último es considerado como “una construcción social del espacio resultante del ejercicio de prácticas y relaciones de poder” (Manzanal, 2014:8).

En este trabajo tomaremos la idea del desarrollo considerándolo como ligado al poder de distintos sectores económicos. Estos sectores económicos son inicialmente “ajenos” al territorio, ya que la realidad de los ámbitos rurales del partido de La Matanza ha sido influenciada mayormente por fuerzas externas al lugar, que conllevaron a sucesivas desterritorializaciones y reterritorializaciones.

Existen múltiples definiciones del término desarrollo discutidas por diversos autores. El concepto es dinámico y evoluciona según distintas etapas socioeconómicas y sobre todo políticas, ya que posee una carga discursiva cambiante en virtud de los diferentes ciclos económicos (Manzanal, 2014). Según Esteva (1996:73), la idea de desarrollo “dio hegemonía global a una genealogía de la historia puramente occidental, privando a los pueblos de culturas diferentes de la oportunidad de definir las formas de su vida social”. El término desarrollo es asociado con palabras tales como: “mejoras”, “bienestar”, “superación”, independientemente de las clases sociales o contextos económicos en los que esté inmerso. Este concepto de desarrollo aparece entonces con un sentido cargado de esperanza para pensar el futuro de las sociedades del mundo, en particular de las que forman parte del “tercer mundo” como Asia, África y América Latina (AL, en adelante). Esto lo podemos relacionar con las connotaciones del concepto de desarrollo que encuentra Esteva cuando menciona que “para dos terceras partes de la

gente en el mundo [...] desarrollo connota siempre por lo menos una cosa: la capacidad de escapar de una condición vaga, indefinible e indigna llamada subdesarrollo” (Esteva, 2009:1).

El desarrollo está unido al desenvolvimiento del capitalismo, que en sí mismo lleva el germen de la desigualdad social (Escobar, 2005). También se relaciona con el poder y la dominación, ya que el desarrollo implica una estructura de poder utilizado por la política, sea pública o privada. Según Escobar (2007:266) el discurso del desarrollo del Banco Mundial “enmarca a la gente en ciertas coordenadas de control. La intención no es simplemente disciplinar a los individuos, sino también transformar las condiciones en las cuales viven en un ambiente social normalizado y productivo. En síntesis, crear la modernidad”.

En torno a esto último, como resultado del desigual crecimiento generado por el poder que acarrea el desarrollo desde la óptica capitalista y mediante distintas situaciones críticas que se han dado en el mundo, algunos autores elaboraron nuevas propuestas desde posturas críticas al modelo dominante. Entre ellos, ya mencionamos a Escobar (2005), que plantea un modo alternativo al desarrollo llamado posdesarrollo que da importancia a todos los productores del conocimiento, inclusive al de las comunidades nativas y de otras pequeñas que viven en el campo. Sostiene que:

“[...] la conceptualización sobre el desarrollo en las ciencias sociales ha visto tres momentos principales correspondientes a tres orientaciones teóricas contrastantes: la teoría de la modernización en las décadas de los cincuenta y sesenta con sus teorías aliadas de crecimiento y desarrollo; la teoría de la dependencia y perspectivas relacionadas en los años sesenta y setenta; y aproximaciones críticas al desarrollo como discurso cultural en la segunda mitad de la década de los ochenta y los años noventa. Estos tres momentos mencionados pueden ser clasificados de acuerdo con los paradigmas originarios de los cuales emergieron: teorías liberales, marxistas y posestructuralistas, respectivamente. La noción del posdesarrollo proviene directamente de la crítica posestructuralista” (Escobar, 2005:18).

Es necesario considerar los dos lados de la geografía que constituye el “sistema mundo moderno-colonial” y, definitivamente, abandonar la idea de una Modernidad que se ha constituido aisladamente en Europa, sin que se considere el papel de América como colonia.

El mundo no es simplemente un conjunto de regiones atrasadas (¿por el reloj de quién?) a la espera de que llegue la modernización, como si el polo moderno (Europa) fuese el lado activo y el resto del mundo el lado pasivo del devenir histórico (Porto Gonçalves, 2006:12-13). “Cada vez aumentan más las voces del tercer mundo que piden el desmonte del discurso del desarrollo” (Escobar, 2007:39).

En los países de AL se destaca la similitud de algunos procesos de desarrollo y también de sus consecuencias, y aquí es importante analizarlo considerando que Argentina no está excluida de estos procesos. Actualmente, el desarrollo latinoamericano se produce mediante la reprimarización de la economía, a expensas de la sobreexplotación de los recursos naturales por parte de distintas empresas transnacionales (Svampa, 2013).

En cuanto a los modelos de desarrollo de nuestro país, inspirándonos en Cirio (2014), podemos diferenciar tres grandes etapas, a partir de la segunda mitad del siglo XX. En cada uno de los regímenes el Estado ha cumplido un rol diferente, dejando entrever una mayor o menor presencia en la planificación territorial. Durante la primera etapa (1955-1976) se aplicó el régimen de acumulación basado en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). En realidad, este modelo tuvo sus inicios en 1930 pero Cirio (2014, p. 102) lo analiza desde “el régimen de acumulación vigente en la Argentina a partir del período iniciado con el golpe de Estado en 1955, que puede considerarse como un régimen de acumulación basado sobre un proceso de profundización del modelo ISI, que daría lugar a un modelo de acumulación ‘desarrollista’”. Fueron las décadas con mayor crecimiento industrial ininterrumpido. Pero como este proceso no cubría los gastos necesarios de las importaciones, se buscó como solución la devaluación que afectó directamente a la canasta familiar y, por lo tanto, a la calidad de vida de la gente; lo que resultó en un proceso recesivo que desencadenó una crisis estructural del modelo y su interrupción por el golpe de Estado en 1976. En la segunda etapa se inició el régimen neoliberal de acumulación (1976-2001) que favorecía al mercado y que se conformaba por el modelo liberal basado en la valorización financiera, en la centralización del capital, en el endeudamiento público, en la ausencia parcial del Estado, en la privatización de las empresas estatales, en la segregación socioterritorial y en el perjuicio de sectores populares. Esta segunda etapa tuvo una breve excepción durante la etapa alfonsinista (1983-1989): gobierno de transición democrática que intentó “sin éxito un plan de corte ‘nacional-desarrollista’ (Plan Grinspun), de ajuste heterodoxo” (Cirio,

2014). En la tercera etapa de desarrollo de nuestro país, el último modelo ha sido el neodesarrollista (2002-2015) con mayor presencia del Estado, que consiste en la estatización de empresas, devaluación, retenciones a las exportaciones primarias, restricción de las importaciones e industrialización pero con baja demanda de mano de obra.

3. EL DESARROLLO RURAL (DR)

Los términos, conceptos y propuestas asociadas al territorio y a su desarrollo han cambiado a lo largo de la historia. Las ideas de “desarrollo territorial”, “desarrollo socioterritorial”, “desarrollo regional”, “desarrollo local” aparecen, desde fines de los años 90, en la visión de funcionarios, académicos y técnicos vinculados con el DR. Estos conceptos están ligados pero tienen sus diferencias. El desarrollo territorial no profundiza la preocupación por las desigualdades sociales y espaciales (como sí pretenden el desarrollo socioterritorial y el desarrollo regional), sino que enfatiza los aspectos que potencian la competencia territorial en los mercados dinámicos de la globalización. El discurso del desarrollo rural repite las mismas relaciones que definieron al discurso del desarrollo desde su nacimiento, que tienen que ver con el crecimiento, el capital, la tecnología y la modernización. En palabras de Escobar (2007:276) “los campesinos tradicionales necesitan ser modernizados; necesitan que se les dé acceso al capital, la tecnología y la asistencia correctas. Sólo así la producción y la productividad pueden ser incrementadas”.

Se considera al desarrollo rural como el conjunto de acciones y prácticas públicas y privadas dirigidas a atender las necesidades de los productores y familias rurales de menores recursos para mejorar la calidad de la vida (Manzanal, 2007). No pasa entonces por la inserción a mercados dinámicos, sino por contemplar un desarrollo inclusivo de las mayorías postergadas, modificando, de este modo, las “relaciones de poder” existentes (Manzanal et al., 2007).

Otra definición es posible encontrarla en Schneider y Peyré Tartaruga (2006), quienes tienen una visión socioambiental, y consideran que el desarrollo rural consiste en un proceso que resulta de acciones articuladas que pretenden inducir cambios socioeconómicos y ambientales en el ámbito del espacio rural para mejorar la renta, la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones de ese tipo.

En pocas palabras, se puede decir que el DR es un proceso de generación de la autonomía de los actores rurales y de la construcción de un proyecto colectivo en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Esta podría ser la consideración de los agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios.

El DR se implementa mediante los programas de desarrollo rural (en adelante, PDR) considerados como un grupo de estrategias de acción que procuran mejorar la situación de las familias de productores agropecuarios pobres, impulsados desde el Estado y puestos en acción por las ONG e instituciones gubernamentales. Durante las décadas del setenta y de los ochenta del siglo pasado, expertos de universidades norteamericanas e inglesas, del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, diseñaron estrategias de planificación alimentaria y nutricional y de desarrollo rural integrado (DRI) que trajeron como resultado la implementación de programas masivos en países del tercer mundo financiados principalmente por el Banco Mundial y los gobiernos del tercer mundo. El DRI fue concebido como una manera de llevar la revolución verde a los pequeños agricultores (Escobar, 2007).

En relación con el DR, aparece el concepto de desarrollo territorial rural (DTR), que data de fines de la década de 1990 en América Latina, y surge como una propuesta vinculada a las problemáticas sociales (como la pobreza rural), no resueltas por las estrategias del DR (De Janvry y Sadoulet, 2007). Este concepto de DTR es definido por Schejtman y Berdegú (2003) como un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. Entonces, por un lado, la transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente la economía del territorio a mercados dinámicos. Y por otro lado, el desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes, así como también de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus beneficios.

Teniendo como objetivo la competitividad de los territorios, este enfoque del DTR contempla la proximidad entre actores con el fin de coordinar el accionar con la innovación colectiva. A su vez, promueve la articulación con los mercados globales, la autonomía social y el desarrollo institucional para la cohesión social de sus actores.

En palabras nuestras, el DTR busca la autonomía social, la consideración de las particularidades locales en la realización de las políticas, la

articulación con las instituciones y con los mercados, pero esto último teniendo en cuenta que no todo pequeño productor o poblador está interesado en formar parte de los mercados globales o nacionales. En definitiva, el DTR es un proceso de mejora de calidad de vida de la mayoría y es visto como un proceso conflictivo y contradictorio, determinado por una red de relaciones de poder. Por eso es necesario un enfoque alternativo de desarrollo (sea territorial, rural o local) que obligue a una transformación de las relaciones de poder, causa y consecuencia de la pobreza y marginación en la mayor parte de los ámbitos rurales y urbanos de América Latina. “Una “transformación” que es todo un desafío en el marco de la globalización, cuyas múltiples manifestaciones operan a escala local utilizando instrumentos que portan un “doble mensaje”, porque tanto son propuestos por quienes buscan profundizar el proceso globalizador como por aquellos que pretenden “amortiguarlo” o enfrentarlo” (Manzanal, 2007:47).

Podría decirse que hasta hace pocos años, el concepto prevaleciente en AL y Argentina fue el de desarrollo regional, ya que la idea de integración regional de los gobiernos progresistas fue la de desarrollar las economías reforzando el tratamiento de las áreas rurales, entre otros aspectos.

Históricamente, durante muchos años la idea de desarrollo rural estuvo asociada a intervenir o a abordar situaciones de pobreza rural, tanto en el ámbito de las políticas públicas, como en los ámbitos de la academia y de la cooperación internacional (Feito, 2014). Es esta idea sesgada del DR la que no aceptamos, ya que nos preocupan los pobladores y productores rurales, deseamos que logren autonomía en su actuación, articulando o no, con diversas instituciones, organizaciones y productores.

Asimismo, lo rural no es únicamente lo agrario, sino “un espacio donde reside la población y se desarrollan actividades que trascienden la producción agropecuaria” (Lattuada, et al., 2012:173). Por eso son vitales los vínculos rural-urbanos y la promoción de actividades y servicios no agropecuarios relacionados con las particularidades y recursos de cada región o localidad. Hay que considerar esto para pensar una política para el desarrollo con eje en lo productivo, para lograr la transformación económica, social e institucional de las áreas rurales. Concebimos entonces que la intervención estatal debe ser de carácter redistributivo, para que quien mejor sea el sujeto de la política diferencial (Lattuada et al., 2012). Porque el DR es público pero también privado, ya que requiere políticas sectoriales y territoriales activas y diferenciales, articuladas con políticas macro para

el bienestar del conjunto de la sociedad rural. Estas políticas no deberían ser de exclusiva responsabilidad estatal, sino que se requiere la inclusión de organizaciones sociales. Las nuevas condiciones institucionales requieren capacidad técnica y profesional instalada en el territorio, un grado de motivación y una importante masa de organizaciones con experiencia previa (Lattuada et al., 2012).

Creemos que la respuesta del Estado para consolidar un proceso de DR en el marco de la heterogeneidad y complejidad que caracterizan al sector agropecuario y agroindustrial argentino no debería limitarse a una política de exclusivo combate a la pobreza, ni tampoco reducirse únicamente a lo agropecuario (Feito, 2014).

Bibliografía

- Barsky, A. (2013).** Gestionando la diversidad del periurbano desde la complejidad de las instituciones estatales. Implementación de políticas públicas para el sostenimiento de la agricultura en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires (2002-2013) (tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España.
- Bourdieu, P. (1988).** Cosas Dichas. Buenos Aires, Argentina: Editorial Gedisa.
- Caravaca Barroso, I. (1998).** Los nuevos espacios emergentes. *Revista de Estudios Regionales*, (50), p. 39-80.
- Cirio, G. W. (2014).** Planificación territorial y acumulación capitalista. Vínculos entre modelos de acumulación y políticas de planificación del territorio argentino 1955-2014. *Realidad Económica*, agosto-septiembre (286), 93-121.
- De Janvry, A. y Sadoulet, E. (2007).** Toward a territorial approach to rural development. *Journal of Agricultural and Development Economics*. Agricultural Development Economics Division, 4(1), pp. 66-98.
- Escobar, A. (2005).** El “postdesarrollo” como concepto y práctica social, (1ª edición, pp. 17-31). En Mato, D. (Comp.). *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de Globalización*. Caracas, Venezuela: Editorial Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.
- Escobar, A. (2007).** La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. Caracas, Venezuela: Fundación Editorial el perro y la rana.
- Esteva, G. (1996).** Desarrollo. En Sachs, W. (editor). *Diccionario del desarrollo*. Una guía del conocimiento como poder. Lima, Perú: PRATEC.
- Esteva, G. (2009).** Más allá del desarrollo: La buena vida. *América Latina en Movimiento*, (445).
- Feito, M. C. (2005).** Antropología y desarrollo. Contribuciones del abordaje etnográfico a las políticas sociales rurales. El caso de la producción hortícola bonaerense. Buenos Aires, Argentina: La Colmena.
- Feito, M. C. (2014).** Ruralidades, agricultura familiar y desarrollo. Territorio del Periurbano Norte de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina: La colmena.
- Giddens, A. (1984).** *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. California, EE. UU.: University of California Press Berkeley and Los Angeles.

- Giddens, A. (2003).** La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
- Gudynas, E. (2010).** Agropecuaria y nuevo extractivismo bajo los gobiernos progresistas de América del Sur. *Territorios* (5), pp. 37-54.
- Lattuada, M.; Marquez, S. y Neme, J. (2012).** Desarrollo rural y política. Reflexiones sobre la experiencia argentina desde una perspectiva de gestión. Buenos Aires, Argentina: Ciccus.
- Long, N. (1992).** From paradigm lost to paradigm regained? The case for an actor-oriented sociology of development. En: N. Long & A. Long (orgs.) *Battlefields of knowledge. The interlocking of theory and practice in social research and development.* Ed. Routledge, Reino Unido.
- Manzanal, M. (2007)** El desarrollo rural en la Argentina. Una perspectiva crítica. Workshop Internacional: Políticas públicas e desenvolvimiento rural no Cone Sul. Porto Alegre, Brasil Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
- Manzanal, M. (2007).** Territorio, Poder e Instituciones. Una perspectiva crítica (1ª edición, pp.15-50). En M. Manzanal; M. Arqueros y B. Nussbaumer (Comp.) *Territorios en construcción, Actores, tramas y gobiernos, entre la cooperación y el conflicto.* Buenos Aires: Ciccus.
- Manzanal, M. (2009).** Desarrollo, poder y dominación. Una reflexión en torno a la problemática del desarrollo rural en Argentina. En Manzanal, M. y Villarreal, F. (Org.). *El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino.* Buenos Aires, Argentina: Ciccus.
- Manzanal, M. (2014).** Una perspectiva crítica desde el análisis del poder y del territorio. *Realidad Económica*, 283, pp.17-48.
- Naharro, N., Álvarez, M. A. y Flores Klarik, M. (2010).** Territorio en disputa: reflexiones acerca de los discursos que legitiman la propiedad de la tierra en el Chaco salteño. En Manzanal, M. y Villarreal, F. (Comp.) *El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino.* Buenos Aires, Argentina: Ciccus.
- Oslender, U. (2010).** La búsqueda de un contra-espacio: ¿hacia territorialidades alternativas o cooptación por el poder dominante? *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*, (1), pp. 95-114.
- Oszlak, O. y O'Donnell, G. (1995).** Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. *Revista Redes*, 2 (4), 99-128.
- Porto-Gonçalves, C. W. (2006).** A geografcidade do social: uma contribuição para o debate metodológico sobre estudos de conflito e movimentos sociais

na América Latina. Revista Eletrônica Associação dos Geógrafos Brasileiros-Seção Três Lagoas (AGB-TL), maio (3), 5-26. Disponible en <https://periodicos.ufms.br/index.php/RevAGB/article/view/1344> (consulta 22 de septiembre de 2019).

Sabourin, E. (2002). Desenvolvimento rural e abordagem territorial: conceitos, estratégias, atores. En Sabourin, E. y Teixeira, O. A. Planejamento e Desenvolvimento dos Territórios Rurais: conceitos, controvérsias e experiências, Brasília, Brasil: Embrapa Informação Tecnológica.

Schejtman, A. y Berdegú, J. A. (2003). Desarrollo Territorial Rural. Santiago de Chile, Chile: RIMISP.

Schneider, S. y Peyré Tartaruga, I. (2006). “Territorio y enfoque territorial: de las referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis”, en Manzanal, M. y Nieman, G. (2006). Desarrollo rural: organizaciones, instituciones y territorios. Buenos Aires, Argentina: Ciccus.

Svampa, M. (2013). “El consenso de los commodities”, en Nueva Sociedad, N° 244, pp. 30-46.

¿Por qué brindan
señoras, mujeres todas?
¿No saben aun que el mundo
confabula acerca de la verdad
difusa, eterna, siempre opaca?
¿Por qué tanto regocijo
cuajado en sus ojos desnudos?
¿No amaneció de sorpresa
la leyenda escrita
en un puñado de piedras
que resulta inexacto sobrevivir
sin someterse
al desolado molde de la esclavitud?
Pues sus ajuares me anuncian
un nuevo día.
Si, parece que es factible
que vivir se puede
incluso con manos pintadas
de sublevada algarabía.

Poema: **Susana Novick**
Foto: **María Carolina Feito**









CAPÍTULO IV

POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS MATANCEROS

María Carolina Feito

1. INTRODUCCIÓN

Analizamos relaciones entre asociaciones y estado municipal y el rol del gobierno local en la facilitación e instalación de cambios socio técnicos, en un contexto de incertidumbre y estrategias flexibles (Feito, 2018b). Las alternativas de gestión para estos productores operan en una arena de conflicto y disputa en la implementación de políticas y programas de desarrollo.

Adoptando una perspectiva antropológica de observación de las prácticas y de los intereses en conflicto, mediante la realización de trabajo de campo etnográfico con metodologías cualitativas enmarcadas en la teoría social que focaliza en los sujetos, “enfoque orientado al actor” (Long, 2001), analizamos las arenas de conflicto y disputa en las que opera la implementación de los programas de desarrollo en el distrito La Matanza. Identificamos alternativas de gestión para la agricultura urbana y periurbana, particularmente los agricultores familiares. Las intervenciones de desarrollo no pueden comprenderse sólo desde las instituciones que las implementan: se requiere incluir la consideración de los modos de vida de los actores involucrados.

Realizamos trabajo de campo etnográfico durante enero-julio de 2017 y julio-noviembre 2018 , mediante entrevistas en profundidad a los miembros beneficiarios de programas, funcionarios municipales, técnicos extensionistas de INTA AMBA y participantes de organizaciones de productores del partido,



regionales y nacionales. Hicimos observaciones participantes en reuniones de los programas, de las organizaciones, así como en capacitaciones del programa Huertas Matanceras, y en eventos convocados por los municipios periurbanos relacionados con la temática productiva.

Los procesos sociales que derivan de una intervención de desarrollo implican negociaciones que son diferencialmente internalizadas por los diversos actores. Descubrimos interfaces entre productores, extensionistas, e implementadores de programas y políticas. Intentamos relevar en qué medida inciden las políticas locales en la configuración de la producción agropecuaria del partido, analizando acciones y/o políticas públicas para el sector, identificando desde qué enfoque/s se concibe el desarrollo en dichas políticas y descubriendo percepciones de los actores sociales. Analizamos el diseño e implementación del programa “Huertas Matanceras”, diseñado por el gobierno municipal y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y concebido explícitamente como una política de inclusión social y promoción de soberanía alimentaria para incorporar nuevas familias a la horticultura. Este programa es producto de particulares formas de interacción entre actores y constituye antecedente de valoración de la agricultura familiar por parte del gobierno local, en un contexto de invisibilización histórica de las producciones agropecuarias (Battista et al, 2014).

Realizamos trabajo de campo etnográfico entre enero 2017 y noviembre 2018, con visitas regulares a las huertas del Programa en distintas localidades del partido y contactos con funcionarios municipales y técnicos del INTA que participaban en la implementación del programa, considerando: Unidad de Estudio (ámbito espacial donde se realizó la investigación): partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina; Unidad de Análisis (sujetos de la investigación): sujetos participantes del Programa Huertas Matanceras (técnicos del municipio y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria —INTA—, capacitadores, productores agropecuarios y vecinos beneficiarios, funcionarios del municipio responsables del programa). Realizamos entrevistas en profundidad a beneficiarios, técnicos y funcionarios del programa, y observaciones participantes en los predios donde se asentaban las huertas, y en reuniones de capacitación y de grupos de promotores del programa. Utilizamos información secundaria proveniente de fuentes bibliográficas y estadísticas nacionales.

2. RELACIÓN DE LOS ACTORES CON LOS AGENTES DEL DESARROLLO EN EL ENFOQUE ORIENTADO AL ACTOR: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Todo actor social interactúa con otros, administrando estas relaciones en el marco de redes sociales que le permiten canalizar comportamientos específicos (demanda de información, bienes, tecnologías, empleo, servicios, etc.). En este contexto relacional, desarrolla habilidades para influenciar a otros y regula la influencia de estos otros hacia él mismo. En este marco todos los actores administran alguna cuota de poder, aunque sea mínima. En las intervenciones de desarrollo, la relación de los actores sociales con los agentes externos (instituciones públicas, Ongs, empresas privadas) es construida. La fuerza o poder que provoca cierto resultado es la denominada agencia (Giddens, 1984). Este concepto se refiere no sólo a tomar decisiones, sino a la capacidad requerida para organizar prácticas que permitan realizar las decisiones tomadas (Long, 1992). La capacidad de agencia no está definida por la mera intencionalidad de hacer algo, sino por el poder de provocar el resultado.

El enfoque constructivista basado en la orientación de los actores, tiene como presupuesto básico que todo influjo externo (proveniente del Estado, del mercado, de grupos dominantes, etc.) es mediatizado por los mismos actores directos del desarrollo (y las organizaciones locales que éstos integran), trabajando con esos factores externos a favor de sus propios intereses y necesidades. Los actores sociales, como partícipes activos del diseño de estrategias, organizan interacciones individuales y colectivas frente a otros actores locales y externos, basándose en diversos criterios cognitivos e intereses, necesidades, experiencias y perspectivas. Es decir que existen mediaciones culturales, locales y de decisiones, que transforman las determinaciones estructurales.

La presencia de intervenciones sociales en forma de Políticas, Programas y Proyectos, puede convertirse en un factor significativo en influenciar los modos de vida de los actores sociales a partir de brindar recursos organizacionales, financieros, cognitivos, etc, así como acceso a nuevas redes sociales. A su vez, las acciones y reacciones de los beneficiarios pueden modificar también aquellas intervenciones (Bilella y Tapella, 2008). De este modo, todas las formas de intervención externa son mediadas y transformadas por los mismos actores y estructuras (Long, 1992).

En la implementación de una intervención de desarrollo, las interfaces sociales definen áreas de conocimiento e interacción que entrecruzan las perspectivas

de una gran diversidad de actores, un campo socialmente construido a partir del conflicto y la negociación, en el que se define la distribución de recursos y la legitimación de los procesos de intervención de los distintos actores. En este sentido, consideramos la definición del desarrollo como un proceso construido, de permanente negociación entre sus protagonistas (beneficiarios o agentes externos del desarrollo) y no como mera ejecución de un plan con objetivos, metas y metodologías externamente preconcebidas (Feito, 2005).

3. LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL

El concepto de seguridad alimentaria es utilizado a partir de 1974 por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) definiéndolo como un “derecho”, retomando documentos internacionales que desde 1924 reconocen a la alimentación como uno de los derechos fundamentales del ser humano (Actas Fundacionales, FAO). En los 80, mejorar la seguridad alimentaria pasaba por lograr mejoramiento en el abastecimiento, producción y calidad biológica de los alimentos. Amartya Sen (1982), plantea que la seguridad alimentaria no depende de la producción agroalimentaria, sino del acceso a los alimentos por parte de toda la población, enfatizando el marco social y político que regula la adquisición de alimentos. La inseguridad alimentaria implica falta de acceso seguro a cantidades suficientes de alimentos inocuos y nutritivos para el crecimiento, desarrollo normal y para una vida activa y sana, siendo su principal causa la pobreza. La Vía Campesina plantea ante la “Cumbre de los Pueblos” la soberanía alimentaria como “...el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población” (Carballo, 2017).

El enfoque territorial privilegia el territorio local, como “la unidad donde resulta más plausible la instalación de procesos de desarrollo sostenible” (Rodríguez Bilella y Tapella, 2008), así como la orientación hacia la promoción de capacidades de los gobiernos descentralizados y de la sociedad civil para movilizar dichos procesos en el territorio. Ello implica especial atención a niveles municipales donde se facilita la interrelación entre estructuras administrativas

locales e instituciones civiles. El concepto de “territorio” es instrumento privilegiado de la comprensión de una realidad compleja, integrando en una totalidad condicionamientos estructurales y acciones de los actores como sujetos competentes capaces de producir innovaciones adaptativas (Manzanal, 2006). Utilizamos la noción de desarrollo territorial basada en la búsqueda de “competitividad sistémica de los territorios”, subrayando la importancia de la proximidad entre actores para coordinar acciones y generar innovación colectiva, la articulación con los mercados globales y el desarrollo institucional como formas de alcanzar la cohesión social entre la mayoría de los actores que definen el territorio en cuestión. Concebimos las políticas estatales como “acordes” de un proceso social tejido alrededor de una cuestión, que adquieren significación en tanto se vinculan sistemáticamente a la cuestión que las origina, al ámbito de acción social en que se insertan y a los actores que intervienen en el proceso de “resolución” de la cuestión.

4. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE PROXIMIDAD EN EL PERIURBANO DE BUENOS AIRES

El periurbano es una zona de transición, en cuyo espacio se desarrollan actividades urbanas y agrícolas que compiten por el uso del mismo suelo, provocando tensiones, en el contexto de un territorio caracterizado por su accesibilidad desde la gran ciudad, precio elevado de la tierra, intensa competencia entre valores de producción, consumo y preservación. Existe gran diversidad de actores sociales intervinientes en estos espacios (locales, neolocales o extralocales) (Barsky 2013).

Dadas las problemáticas presentadas para el periurbano bonaerense (Feito y Barsky, 2020), uno de los mayores desafíos es diseñar e implementar políticas públicas que permitan regular y gestionar este complejo territorio. Si bien el término “política estatal o pública” es controvertido, podemos decir siguiendo el clásico trabajo de Oszlak y O'Donnell (2007) que una política estatal es esa toma de posición que intenta alguna forma de resolución de alguna cuestión, entendiendo por tal a asuntos (necesidades, demandas) socialmente problematizados, que atraviesan un ciclo vital que se extiende desde su problematización social hasta su resolución. A lo largo de este proceso, diferentes actores afectados positiva o negativamente por el surgimiento y desarrollo de la cuestión,

toman posición frente a la misma. La política estatal o pública, por lo general, incluye decisiones de una o más organizaciones estatales, simultáneas o sucesivas a lo largo del tiempo, que constituyen el modo de intervención del Estado frente a la cuestión. De aquí que la toma de posición no tiene por qué ser unívoca, homogénea ni permanente. De hecho, suele ser todo lo contrario y un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. Política estatal es un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas en un momento histórico y en un contexto determinados permiten inferir la posición —agregaríamos, predominante— del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la sociedad Oszlak y O'Donnell (2007).

Si bien distintos proyectos de actores gubernamentales y no gubernamentales impulsaron actividades relacionadas a la AUPU desde el retorno de la democracia en 1983, estas producciones agropecuarias eran concebidas desde las políticas como respuesta frente a crisis económica y combate contra hambre y pobreza. Diversos organismos reconocieron sus importantes roles en el desarrollo territorial, como la producción de alimentos, cuidado de medioambiente, control de crecimiento urbano. El INTA sostiene acciones desde 1990, mediante el Programa Prohuerta, implementado conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que capacita agricultores y promotores, entrega insumos como semillas, animales de granja y frutales, e instala centros demostrativos, con una estrategia de inclusión social. También difunden y apoyan estas producciones instituciones, organizaciones y empresas.

El primer antecedente de apoyo político específico para este sector es la creación de la Dirección de Agricultura Periurbana provincial en 2007. En 2009 se abre la Estación Experimental Area Metropolitana de Buenos Aires del INTA (EEA AMBA), en tanto en 2010 surge el Programa Nacional de Agricultura Periurbana dependiente del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Estas iniciativas constituyeron manifestaciones de la existencia de políticas públicas en diferentes niveles estatales, específicas para el cinturón productivo rural (Barsky, 2013). También se promovieron políticas para fortalecimiento específico de la Agricultura Familiar (en adelante, AF), como la sanción, en diciembre 2014, de la Ley “Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina” (Feito, 2016).

Los actores intervinientes en las actividades agropecuarias del periurbano bonaerense, son diversos y corresponden tanto al territorio como a

otras procedencias extra-territoriales. Podemos mencionar: los gobiernos municipales (a través de sus áreas de producción, desarrollo social, salud, educación, medio ambiente, etc.); el Gobierno Provincial (a través de sus áreas de agricultura, producción, programas de desarrollo rural); el Gobierno Nacional (a través de los programas y proyectos de la ex Secretaría de Agricultura Familiar del MAGyP, organismos descentralizados como el mencionado INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial —INTI—, el Servicio Nacional de Calidad y Seguridad Alimentaria —SENASA—, y Ministerio de Desarrollo Social); universidades con asentamiento o trabajo territorial; diversas organizaciones de productores; mercados regionales y locales; organizaciones sindicales; servicios penitenciarios y unidades especiales de jóvenes y mujeres; instituciones religiosas; dependencias locales de atención a la salud; asociaciones vecinales y sociedades de fomento; empresariado agroindustrial (frigoríficos, molinos, lecherías, proveedores de insumos y servicios) (Parés, 2009).

El efecto de algunas de estas políticas atenuaron, en el período 2003-2015, las consecuencias en la desigualdad en la distribución de la tierra. Por otra parte, la ayuda financiera a los pequeños productores, aumenta las posibilidades de empleo y coloca a los trabajadores de la agricultura periurbana en mejores condiciones para la puja distributiva (Battista et al, 2015).

Sin embargo, en el contexto económico social durante los años 2015 y 2019, se desarticulaban políticas, programas, proyectos y organismos públicos de apoyo a la AUPU, que no sólo frenaron el proceso de acompañamiento a estas producciones agropecuarias, sino que a la vez pusieron en riesgo el aprovisionamiento de alimentos para la población de la gran ciudad, desestimando la producción y distribución de alimentos sanos y de proximidad. Prueba de ello es el intento de desmantelamiento progresivo de organismos públicos directa o indirectamente relacionados con la alimentación, tales como: i) la baja de categoría del Ministerio de Agroindustria de la Nación a Secretaría; ii) el desguace del personal técnico de la ex Secretaría y actual Subsecretaría de de Agricultura Familiar; iii) la eliminación de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las Organizaciones; iv) la disolución repentina de la Mesa Nacional de Periurbanos Orgánicos creada en el marco del ex MINAGRO ; v) cambios sucesivos y desinformación sobre la inscripción en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. (Feito, 2019).

5. INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES MATANCERAS

En el año 2001, el gobierno municipal local creó, para paliar la emergencia producida por una de las mayores crisis sociales del país, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Social (IMDES) como ente autárquico, para promover las actividades productivas, desarrollando junto con la Secretaría de Desarrollo Social local, algunas iniciativas para el sector agropecuario en articulación con el Programa ProHuerta INTA (Battista et al, 2014). Podemos señalar como antecedente distintos espacios de vinculación desarrollados desde el IMDES y la Secretaría de Desarrollo Social junto al Prohuerta del INTA. El trabajo conjunto con organizaciones sociales y productores rurales locales se formalizó en la conformación del “IMDES RURAL”.

Reconocemos diversos actores en las estrategias de intervención para la agricultura familiar en La Matanza: el gobierno local (a través de sus Secretarías de Producción; Desarrollo Social; Salud; Educación y Medioambiente); el gobierno provincial (a través de sus Ministerio de Asuntos Agrarios y programas de desarrollo rural); el gobierno nacional (a través de los programas de desarrollo del MAGyP, de organismos descentralizados como el ya mencionado INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Seguridad y Calidad Alimentaria (SENASA), la Secretaría de Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social; universidades con asentamiento o trabajo territorial (La Matanza —UNLaM, Gral Sarmiento— UNGS, Lomas de Zamora —UNLZ, Hurlingham— UNAHUR, entre otras, que realizan capacitaciones, organizan ferias de venta de productos y desarrollan proyectos de investigación sobre agricultura familiar); diversas organizaciones de productores (especialmente hortícolas, florícolas y cunícolas); mercados locales; empresariado agroindustrial (frigoríficos, molinos, lecherías, proveedores de insumos y servicios).

La producción agropecuaria ingresó definitivamente en la agenda del gobierno local en la órbita de la Secretaría de Producción, con la ordenanza municipal 22.658 del 20 de septiembre de 2012, que establece “implementar políticas de economía solidaria, planificando y gestionando actividades con emprendedores que favorezcan la producción, el crecimiento y el desarrollo económico, con la demanda de trabajo y el desarrollo sostenible, en un marco de equidad y justicia social para la construcción de relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua” (Battista et al, 2014).

Hasta fines del año 2015, existía cierta conjunción de esfuerzos entre gobierno nacional, municipal y organizaciones, mediante articulación de acciones entre EEA AMBA INTA, la ex Secretaría de Agricultura Familiar del MAGyP; la Mesa Local de Productores de La Matanza y el Municipio (Battista et al, 2014). Es innegable el efecto de las políticas nacionales mencionadas en este cambio de visibilidad del sector agropecuario en la política municipal desde comienzos de la década de 2010, dado que los primeros subsidios de apoyo y fomento provinieron del ya mencionado Programa Nacional Periurbano, y debían ser ejecutados a través de los municipios, con lo cual la mayoría de estas unidades administrativas debieron comenzar a reconocer (para aplicar y rendir dichos fondos) la existencia, aportes y potencial de este sector agropecuario en los territorios de sus respectivos distritos (Feito, 2017).

6. EL PROGRAMA “HUERTAS MATANCERAS” COMO UNA POLÍTICA PÚBLICA DE INCLUSIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Este incipiente reconocimiento de la existencia e importancia de las producciones agropecuarias del partido cristalizó en enero del año 2016, con la conformación de un equipo en la Secretaría de Producción del Municipio para elaborar un programa de desarrollo que permitiera incorporar a la producción hortícola nuevas familias. Con la articulación con el equipo técnico de la EEA INTA AMBA, se comenzó a “reconstruir los territorios desde abajo” (testimonio funcionario municipal). Así, funcionarios del gobierno local comenzaron a visitar el territorio junto con técnicos de INTA. A fines de ese mismo año, el Municipio realizó el Primer Encuentro Regional de Agricultura Urbana Periurbana y Rural, con una convocatoria de más de 300 personas. Este encuentro tuvo amplia repercusión y fortaleció la visibilización de la producción primaria, especialmente el sector de la AF. Como resultado, a fines de enero del año 2017, la Secretaría de Producción local puso en marcha el Programa Huertas Matanceras, con el objetivo general de “mejorar la seguridad alimentaria de la población urbana, periurbana y rural, incrementando la disponibilidad, accesibilidad y variedad de alimentos, mediante su autoproducción, con enfoque agroecológico, de acuerdo a las particularidades y costumbres de nuestra región” y (...) favorecer la participación y la organización de las comunidades con las que trabaja, para que las mismas sean actores plenos de procesos influyentes de desarrollo local y territorial” (folletera oficial). La iniciativa

se apoyaba en cuatro pilares: las escuelas, las organizaciones de pequeños productores, los programas sociales y las familias matanceras. La propuesta incluía: mejorar y diversificar la alimentación de las familias, escuelas, instituciones y organizaciones de la comunidad que participaban; promover tecnologías apropiadas para la producción de cultivos; promover alternativas productivas que puedan integrarse en un mercado de economía social. Interventaban en la implementación del programa cinco secretarías municipales: Producción; Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas; Desarrollo social; Medioambiente y desarrollo sustentable; Deporte y Recreación, coordinando acciones con el mencionado IMDES y, a nivel externo, con las Unidades Ejecutoras de los programas ya existentes Ellas Hacen y Argentina Trabaja, ambos del Ministerio de Desarrollo Social de Nación MDS.

El Municipio lo definía en ese momento como un programa para la soberanía alimentaria mediante autoproducción agroecológica, que intentaba fortalecer capacidades en un contexto de dificultad para las familias matanceras para llevar productos frescos a su mesa, debido al alto costo de los alimentos. Otro objetivo inicial fue lograr con las primeras cosechas de las huertas, realizar agregado de valor mediante capacitaciones en la realización de dulces, conservas y salsas, para diversificar el uso del producto.

El Programa tenía tres líneas de trabajo :

- 1) huertas comunitarias: se promovió la construcción de huertas, desarrollándose territorialmente en dieciocho sedes del Programa Enviñón del (MDS) y participaban 150 mujeres del Programa Ellas Hacen, casi todas ellas diplomadas en agroecología⁵⁸, como promotoras y formadoras. Las sedes del Programa Enviñón en el distrito, le otorgaban al “Huertas Matanceras” un espacio físico de referencia . De este modo, se articularon dos políticas de inclusión del gobierno nacional anterior (los programas “Ellas hacen” y “Enviñón”), retomando la lógica organizativa y

58. El programa “Ellas Hacen” fomenta el acceso al trabajo a aquellas mujeres que atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad o de violencia de género. Las participantes son parte de una cooperativa de trabajo, y a su vez participan de distintas capacitaciones como oficios, formación sobre economía social, ciudadanía urbana y perspectiva de género. Nos referimos a la “Diplomatura de Operadoras sociales con orientación en agroecología, urbanismo y hábitat social y producción e intervención en cultural popular”, un ciclo de formación que impulsó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para las cooperativistas del programa.

- objetivos del ProHuerta de INTA: lograr la autoproducción de alimentos. También se articularon acciones con Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires;
- 2) huertas en escuelas: articulando con el Programa “Argentina Trabaja”, repartiendo la cosecha en cada caso particular, se lograba que los alumnos de escuelas públicas del distrito y sus familias recibieran capacitación, semillas y respuesta al momento de tener algún problema en el armado de la huerta en sus casas.
 - 3) Rescate de pautas alimentarias: mediante la enseñanza de cocina, para recuperar saberes y evitar pérdida de cualidades nutritivas de los alimentos y el diseño por parte de las promotoras de un Manual de Producción del Programa .

Con estas líneas de trabajo, la política pública transversal ejecutada mediante la articulación de varios programas (el local Huerta Matanceras con los nacionales Ellas Hacen y Envión) posibilitaba llegar a los hogares de los vecinos mediante un actor político local diferente: las mujeres voluntarias del Ellas Hacen.

Con el avance de la implementación del programa, se desarrollaron ciertos conflictos. La articulación de distintos programas previos conllevó la necesidad de entender quién es el otro y qué posibilidades tenía cada uno en función de su rol. Las mujeres del “Ellas Hacen” eran voluntarias, dependientes de un programa municipal por el cual cobraban en 2017, \$4.000 mensuales. Por otra parte, los mencionados programas nacionales “Argentina Trabaja” y “Envión”, tenían sus respectivas Unidades Ejecutoras, de las cuales dependían las mujeres que participaban también en el Huertas Matanceras. A estas mujeres les costaba reconocerse como “municipales” (en tanto trabajan como voluntarias en un programa del gobierno de La Matanza) ya que venían trabajando en un programa nacional.

Por otra parte, la producción de verduras en las huertas no había conseguido un espacio de comercialización específico de impacto, porque aún no alcanzaba la escala suficiente como para organizar ferias regulares. En cuanto al comercio estatal, el municipio tenía reglamentado el 5% de beneficio por sobre oferta de terceros a empresas locales en general .

Durante el año 2017 se habían entregado más de 5.000 kits de semillas (que permitían cada uno cultivar entre 100 y 150 metros cuadrados y alimentar aproximadamente a 67 familias), tanto a agricultores familiares ya instalados en el partido, como a los vecinos que querían armar por primera vez

huertas en sus casas, previa participación obligatoria en tres capacitaciones que dictaba el programa.

En definitiva, la finalidad del Programa Huertas Matanceras consistía en generar herramientas desde el Estado local, a fin de lograr una comunidad organizada en función de la idea de la soberanía alimentaria. Creemos que mostrar al sector político el impacto de este Programa permitía, al llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, empezar a reconocer el sector: comienza a existir conciencia de que hay producción agropecuaria en el partido.

7. ENTRECruzamiento DE DOMINIOS SOCIALES EN LAS EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO

La implementación de una intervención de desarrollo puede describirse como el momento en que diversos dominios sociales se entrecruzan y son mutuamente contruidos. Focalizar la atención en ese entrecruzamiento de dominios sociales o interfaces de diferentes actores permite ver arenas de conflicto, donde se negocian prácticas, discursos y sentidos, que a la vez modelan en cierta forma la intervención (Rodríguez Bilella, 2004). Estos espacios comprenden sujetos locales, en lo referido a la acumulación de capacidades de gestión colectiva, así como sujetos que personifican la intervención de instituciones externas (gubernamentales o no). Los distintos tipos de actores conservan un significativo grado de autonomía que les permite preservar sus representaciones e intereses particulares y sectoriales, al tiempo que participan del proyecto cumpliendo objetivos grupales e institucionales.

La actividad productiva agropecuaria en La Matanza cuenta con el importante aporte de experiencias asociativas con tradición y vinculación con el territorio. Como resultado de nuestro trabajo de campo encontramos las siguientes:

- Sociedad Rural de La Matanza: entidad que representa localmente los intereses de la tradicionalista Sociedad Rural Argentina, está mal vista por los pequeños productores, si bien en algún momento éstos participaron de alguna subcomisión local.
- Asociación Civil "Los Cirujas": surgió en 1996 con el apoyo de técnicos de Prohuerta, para mejorar las capacidades productivas de las huertas y compartir experiencias sobre las mismas, y es una de las

más antiguas del partido. Desarrollan actividades y espacios de construcción colectiva con organizaciones locales, nacionales y regionales. También tienen un Centro Reproductor de Aves, instalado con subsidio del programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social nacional, donde crían y venden pollos como emprendimiento comercial. Además venden huevos, artesanías, dulces y plantines, realizando agregado de valor en origen. Desarrollaron el emprendimiento “Abriendo Horizontes”, con apoyo técnico de los extensionistas de la Agencia de Extensión de Marcos Paz del INTA AMBA.

- Asociación “Amaru La Granja”: coordinada en 2017 por un productor referente de la Mesa Local Matanza de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar FONAF, tiene una finca donde se elaboran verduras, frutas, carne (cerdos, conejos, cobayos), huevos, gallinas, artesanías (hilado, armado de vellón, secado, teñido, colorado, tallado de mates). Está inscripto en Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y tiene habilitación municipal.
- Asociación Virrey del Pino: tienen producción hortícola y recibieron el primer tractor entregado con el subsidio del mencionado Programa Nacional del Periurbano del MAGyP.
- Unión de Micro Emprendedores de La Matanza (UNEMA): conformada por microemprendedores no sólo productores familiares, sino también revendedores de calzado, bazar, textiles, artesanías. Recibían apoyo político y subsidios del Ministerio Desarrollo Social, formando parte de la Mesa Matanza FONAF. Promovían la economía social y solidaria y el comercio justo y formaban parte también de otra organización de segundo grado: el Espacio Nacional de la Economía Social y Solidaria (ENESS), en el cual se agrupaban con otras organizaciones extra locales. Esta asociación se disolvió por problemas internos entre sus miembros .
- Red de promotores Prohuerta Matanza: conformada por Promotores Voluntarios del programa Prohuerta INTA, elaboran dulces y conservas artesanales que venden en las ferias que organiza la Mesa Matanza FONAF. Entregan semillas y dictan capacitaciones de huertas en distintos barrios y localidades del partido.
- Mesa Local Matanza de la FONAF: articula acciones con distintos organismos: nacionales (MAGyP, a través de la Secretaría de AF; INTA, a través del Instituto de Investigaciones para la AF y del Programa Prohuerta) y locales (Municipio, mediante Secretaría de Producción y el IMDES).

Este último organismo descentralizado del gobierno local recibe y administra el dinero de subsidios del MAGyP, que la Mesa de productores solicita sean en su lugar manejados por la Secretaría de Producción local. En junio del año 2012 se realizó el Primer Plenario de AF de La Matanza, en el cual participaron: la Mesa, el Municipio, la Secretaría de AF y el INTA. Los productores entrevistados son concientes de la importancia del asociativismo que, expresan, les permite lograr acciones concretas para mejorar sus producciones y su calidad de vida. Esta Mesa también organizó varias Ferias de Economía Social y Solidaria, donde los agricultores familiares exhibían y vendían sus producciones.

Durante el gobierno nacional kirchnerista (2015-2019), encontramos que diferentes organismos públicos emitían avales, apoyo y subsidios, según el tipo de organización de que se tratase: aquellas de agricultores familiares recibían apoyo de la ex Secretaría AF del Ministerio de Agricultura; en tanto las de microemprendedores (que incluyeran otro tipo de actor social no productor agropecuario) lo recibían del Ministerio de Desarrollo Social. Las organizaciones se identificaban fuertemente con el organismo público que les daba apoyo, según el tipo de relación entre estos organismos. Algunas buscaban articular acciones para recibir financiamiento, en tanto otras preferían una estrategia más autogestionaria. A su vez, los funcionarios entrevistados también mostraron diferencias: los del municipio manifestaban una clara preocupación para que los productores fueran registrados y realizaran sus actividades dentro del sistema, en tanto los de Desarrollo Social se mostraban más flexibles frente a las exigencias de formalización, a la hora de aprobar subsidios o financiamiento.

En el caso analizado, administraban más poder los líderes de las organizaciones locales por tener más y mejores accesos a contactos externos de instituciones gubernamentales (ex Secretaría AF de Nación; Municipio; INTA; SENASA). La capacidad de agencia se vislumbraba en la concreción de acciones específicas como el armado de ferias de productos con recursos de organismos públicos participantes, generando a su vez redes de actores para poder administrar dichos recursos, con miembros de las organizaciones, funcionarios del IMDEL local, técnicos del INTA. La negociación con los modelos de interacción de las instituciones involucradas era constante y se evidenciaba en convocatorias a reuniones, llamados telefónicos, traslado de agricultores a las sedes de las instituciones locales o extralocales, visitas de los funcionarios y técnicos a las fincas. Se vislumbraba claramente que el fortalecimiento de lazos asociativos entre los

productores y la consolidación de vínculos con distintos niveles gubernamentales podían mejorar el desempeño de las producciones agropecuarias y aportar a un proceso de desarrollo local integral e inclusivo.

Estudiar el nivel micro de aplicación de las modalidades de intervención nos permitió ver el lugar de intersección entre las áreas de incertidumbre naturalmente provocadas por los problemas y necesidades de la población beneficiaria (falta de recursos financieros, problemas de acceso a crédito) y las áreas de incertidumbre artificiales o inducidas, consecuencia intencional de la intervención externa (confusión en fechas de otorgamiento de subsidios, falta de claridad para justificar por qué no llegaba el dinero). A los actores estatales relevados, en general les interesaba favorecer a los agricultores en la medida de conseguir aportes a su capital político como funcionarios. En tanto, la población beneficiaria disputaba el capital económico necesario para desarrollar sus actividades, por eso se podría decir que este campo iba siendo construido a partir del conflicto y la negociación permanentes (Long, 1992).

El gobierno local aún no reconoce acabadamente el potencial del sector económico agropecuario (particularmente, el de AF), a pesar de que, al ser parte de una agricultura periurbana de proximidad, posee herramientas para realizar una producción sustentable, pudiendo constituir una oportunidad para el desarrollo local, con impacto en empleo y mediante el abastecimiento de productos frescos (Battista et al, 2014).

Los resultados del proceso de implementación de la intervención no deben ser analizados meramente a partir de la influencia de actores externos al programa, sino por las acciones de los mismos intervinientes al interior del programa (Long, 1992), en este caso, productores y extensionistas. Diferentes actores en el dominio del terreno y en el dominio administrativo representaron y actuaron en relación a la implementación: mientras que los productores la representaron como forma de acceso a recursos, los extensionistas vieron la posibilidad de mejorar su inserción en la estructura institucional. La elección de focalizar la intervención a los productores familiares de La Matanza remite a que allí se encuentran los más “invisibles” del distrito. En este sentido, solucionar sus problemas “históricos” (de producción, tecnología, comercialización, asociativismo, etc) constituiría cierta conquista político-institucional para las instituciones participantes. Ya vimos las articulaciones en apoyo hacia los productores: técnicos de universidades de la región con las cuales INTA tiene convenios para pasantías y asesoramientos; en tanto que con el Ministerio de Desarrollo Social nacional se gestiona apoyo financiero para algunas agrupaciones.

El análisis de estrategias es clave al reconstruir los modos de intervención de las políticas de desarrollo local. Los actores intervinientes constituyen sus propias formas de vincularse con las instituciones que intervienen. Los productores beneficiarios analizados se apropiaron del discurso del Programa ProHuerta para conseguir recursos que de otra forma no obtendrían (provisión de semillas, asesoramiento en fortalecimiento organizacional y presentación de tramitación para formalizar asociación). Utilizaron estrategias que involucraban otros actores, tales como los extensionistas, quienes a su vez, necesitaban contar con grupos de productores a quienes atender, a fin de mantener sus salarios y su posición en la estructura de la institución en la que trabajaban.

Las intervenciones de desarrollo no pueden comprenderse sólo desde las instituciones que las implementan: se requiere considerar los mundos de vida de todos los actores involucrados (Rodríguez Bilella, 2004). En el caso de los técnicos, su perfil de formación social les permitió comprender necesidades expresadas por los productores (que sobrepasaban aspectos de asesoramiento meramente técnico) y gestionar contactos y acciones concretas (intervenir por reclamos ante el gobierno local, etc).

En las modalidades de intervención, todo flujo externo proveniente del Estado, del mercado, de grupos dominantes o de agentes externos al grupo en cuestión, es mediatizado por esos mismos actores (y las organizaciones locales que integran), quienes procuran reprocesar dichos factores externos a favor de sus propios intereses y necesidades. Por eso, los productores estudiados fueron encontrando soluciones concretas a sus problemas: los que hacían agricultura agroecológica legitimaron su reconversión productiva a través del aval de los técnicos del programa; consiguieron financiamiento para realizar ferias locales de comercialización de sus productos, asesoramiento organizacional y capacitaciones. Así, enriquecieron o cuestionaron los mecanismos estatales, o se adaptaron a ellos, de acuerdo a mecanismos regulatorios que ya conocían en sus prácticas grupales.

En la intervención analizada, el Municipio utilizó, junto con el INTA, una estrategia de reconversión hacia la agroecología, construyendo nuevos espacios productivos en terrenos antes impensados (patios de escuelas, asociaciones civiles y casas particulares), que constituyeron un aporte importante a la economía de las familias participantes, proveyendo alimentos sanos y contribuyendo así a la seguridad y soberanía alimentaria de la población local.

Los procesos sociales que derivan de una intervención de desarrollo implican negociaciones que son diferencialmente internalizadas por los diversos

actores (Long, 2001). Nuestro análisis desafía la visión de los extensionistas como implementadores mecánicos de una idea o esquema previamente planificado; por el contrario, en el caso bajo estudio son sujetos pragmáticos que luchan con las dificultades cotidianas de la implementación práctica de la intervención.

La perspectiva teórica y metodológica del enfoque orientado al actor permite entender cómo se distribuye el conocimiento en las intervenciones de desarrollo. Los programas son “construidos” y moldeados por diferentes interacciones de múltiples actores. Utilizando el análisis de interfaces, se comprende la forma en que los intereses, metas, percepciones y estrategias de diversos actores vinculados al programa resultan continuamente readaptados en función de las múltiples interacciones entre los actores locales y extra-locales. Sin embargo, las complejas interacciones entre los “proyectos” y prácticas de los actores, sus resultados esperados e imprevistos, crean tanto marcos habilitantes como limitantes de la acción social (Guiddens, 1984). Focalizando en la interacción de las relaciones internas y externas, este enfoque procura brindar una perspectiva más dinámica sobre las intervenciones de desarrollo y los procesos de implementación de políticas.

8. PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Entre los desafíos de políticas públicas a implementar para los productores matanceros, podemos mencionar, en diferentes dimensiones (Foro de Universidades, 2011):

En una dimensión económico productiva: i) políticas específicas de fomento y mantenimiento de los cinturones verdes que protejan las tierras productivas periurbanas; ii) impulso al agregado de valor a los productos en origen, desarrollo de la identidad local, recuperación de saberes locales, iii) mejorar la logística de conexión entre localidades; iv) consolidar y promover modalidades de comercialización alternativas para la AUPU, como bolsones de verduras, ferias, cooperativas de consumo, etc. (Caracciolo, 2015) y circuitos cortos de comercialización; v) políticas de precio justo, que faciliten acceso a los alimentos por parte de todos los estratos sociales y de regulación de precios en toda la cadena de producción y distribución de alimentos; vi) organización gremial y/o asociativa de los trabajadores y productores agropecuarios de la AUPU; vii) políticas de subsidio, financiamiento y crédito para la AUPU, que implica un

importante involucramiento de los gobiernos locales; vii) educar y organizar a los consumidores (sector poco considerado tanto por las políticas como por la academia y la sociedad civil), dada la importancia estratégica de que todos somos consumidores de alimentos, y promover el consumo responsable que valore el consumo de alimentos sanos y de proximidad; viii) involucrar a las organizaciones de consumidores en diseñar sistemas productivos y comerciales de proximidad; xi) aportar al sostenimiento de las nuevas generaciones de productores en el territorio y la revalorización del trabajo en la tierra, para promover el arraigo, mediante políticas de desarrollo de infraestructura, servicios públicos, salud y educación; x) incluir temáticas sobre el periurbano en los programas curriculares de las carreras de grado en universidades y centros de estudio;

En una dimensión ambiental: i) disminuir el impacto ambiental negativo de las producciones intensivas, mediante acciones de comunicación y difusión a los productores de las buenas prácticas agrícolas y comerciales, promover y capacitar en técnicas de producción sin agroquímicos o de implementación gradual; ii) planificar el uso del territorio, de manera de que prevalezcan en los gobiernos locales definiciones de perfil de territorio productivo, en lugar de industrial y/o residencial; iii) integrar las producciones y los mercados de proximidad desde una mirada ecosistémica; iv) generar estrategias de usos rentables de los residuos; v) elaborar protocolos de certificación social participativa inclusiva, para asegurar la calidad bromatológica de los productos; vi) promocionar asistencia técnica y financiera para reconversión de las producciones agropecuarias de la AUPU hacia la transición agroecológica; vii) promover y realizar análisis académicos de impacto ambiental en términos de la interface urbano-rural que constituye el territorio periurbano; viii) ordenamiento territorial que permita acceso a tierra, agua y semillas, para la producción de alimentos en el periurbano; xi) promover la trazabilidad de las producciones.

En una dimensión político institucional: i) articular instituciones públicas; ii) fortalecimiento jurídico, estableciendo nueva normativa y controlando el cumplimiento de la existente, adecuándola a la escala del periurbano y promoviendo la participación de organizaciones de base para una construcción conjunta; iii) considerar el periurbano como un sistema complejo y desarrollar herramientas y estrategias acordes a estas características diferenciales; iv) desarrollo de Planes Municipales Estratégicos por parte de los gobiernos municipales; v) capacitar legisladores y funcionarios municipales sobre las temáticas

relacionadas con la producción AUPU; vi) crear consensos convocando a todos los actores y sectores del periurbano (locales y extralocales que influyan en el territorio); vii) fomentar y fortalecer la organización y asociativismo del sector de la producción de alimentos sanos de proximidad.

9. REFLEXIONES FINALES

En las intervenciones analizadas en el distrito de La Matanza, el desarrollo es concebido desde un enfoque integral territorial que considera aprovechar las potencialidades existentes. Por ello, el fortalecimiento de lazos asociativos entre los productores y la consolidación de vínculos con los distintos niveles de gobierno así como con el Programa Huertas Matanceras, pueden mejorar el desempeño de las producciones del partido y aportar a un proceso de transición agroecológica, aportando a la seguridad y soberanía alimentaria. Lejos de ser pasivos receptores del discurso de reconversión productiva del programa, los productores y vecinos de La Matanza se apropian del mismo, en orden de alcanzar las ventajas que ofrece. De distintas maneras, negocian el alcance de recursos que si no fuera por formar parte del programa, no conseguirían (provisión de semillas y herramientas, asesoramiento en fortalecimiento organizacional). Podemos decir que las políticas implementadas tanto por INTA como por el Municipio son de promoción, ya que se produce un ida y vuelta entre el que da y el que recibe, fortaleciéndose la relación Estado-sociedad civil pero sólo desde el nivel de las políticas sociales, sin vinculación con lo económico, donde el que recibe es activo, y además, hay capacitación, se promueven las capacidades (Arroyo, 1997). Es necesario todavía fortalecer al sector en una estrategia sostenida de desarrollo orientada a la inclusión social, la sustentabilidad económica de la producción local y el respeto y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Por otra parte, las acciones a veces desarticuladas por parte de distintas instituciones, colaboran a fragmentar las débiles organizaciones de productores existentes. El fortalecimiento de lazos asociativos entre los productores y la consolidación de vínculos con distintos niveles gubernamentales pueden mejorar el desempeño de las producciones y aportar a un proceso de desarrollo local.

A fin de contrarrestar estas políticas de desmantelamiento que sufrieron las producciones agropecuarias familiares y periurbanas, desarrolladas durante el gobierno neoliberal entre fines de 2015 y fines de 2019, se requiere lograr

avances que coloquen en la agenda gubernamental al periurbano, mediante ciertas acciones: i) fortalecer los módulos demostrativos de producción alternativa al modelo hegemónico actual del agronegocio (que ya funcionan en lugares como la EEA AMBA INTA en el partido de Ituzaingó, en el periurbano Oeste); ii) extender la conformación de observatorios y agencias en el territorio periurbano; iii) crear comisiones de discusión sobre la temática del periurbano en ámbitos profesionales, académicos y gubernamentales.

Finalmente, destacamos que se requiere planificación territorial como herramienta para poner en valor el potencial endógeno de las localidades. El desarrollo ligado al territorio representa un valor estratégico para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y corregir las inequidades sociales.

Bibliografía

- Arroyo, D. (1997).** Estilos de gestión y políticas sociales municipales en la Argentina. En: *Hacia un modelo de gestión local. Municipio y sociedad civil en la Argentina*. Oficina de Publicaciones del CBC -UBA. Buenos Aires, 1997.
- Asiain, A. (2013).** González Catan y Virrey del Pino: La soja matancera hace su aparición. En: *Diario NCO*, consultado 14 noviembre 2014. <http://noticiasconobjetividad.wordpress.com/2013/03/27/gonzalez-catan-y-virrey-del-pino-la-soja-matancera-hace-su-aparicion/>
- Battista, S.; M.C. Feito; A.O. Cruz; M.S. Irigoyen; A.N. Virdó; M.V. Aznar; L. Lipera; S. Pettinato; C. Almonacid (2014).** Caracterización del sector agrícola en el Partido de La Matanza. Sustentabilidad económica, social y ambiental. PROINCE (Programa de Incentivos para Docentes Investigadores). Departamento de Ciencias Económicas. Cód. B. 165.
- Battista, S.; Feito, M. C.; Cruz, A.O.; Irigoyen, M. S.; Virdó, A. N.; Aznar, M. V.; Lipera, L.; Pettinato, S.; Almonacid, C.A. (2015).** La potencialidad del sector agrícola matancero para un proceso de desarrollo sustentable: actualidad, antecedentes y perspectivas futuras. PROINCE, Universidad Nacional de La Matanza. Cód. B 181
- Barsky, A. (2013).** Gestionando la diversidad del territorio periurbano desde la complejidad de las instituciones estatales. Implementación de políticas públicas para el sostenimiento de la agricultura en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires (2000-2013). Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. <http://www.thesisred.net/bitstream/handle/10803/129121/ab1de1.pdf?sequence=1>
- Caracciolo, M. (2019)** Espacios comerciales alternativos de la agricultura familiar: criterios para su análisis y diferenciación. En: Viteri, M.L; Moricz, M. y Dumrauf, S. (comp.) *Mercados, diversidad de prácticas y de consumo*. Ed: INTA, Bs As. Pp 133-161.
- Carballo, C. (2014).** “Soberanía alimentaria y producción de alimentos. Situación actual y desafíos para la transición”. En *Seguridad y soberanía alimentaria* (13-38). Buenos Aires: Akadia
- Feito, M. C. (2005).** Antropología y desarrollo. Contribuciones del abordaje etnográfico a las políticas sociales rurales. El caso de la producción hortícola bonaerense. Buenos Aires: Ed La Colmena.

- Feito, M. C. (2014)** Ruralidades, desarrollo, territorio y agricultura familiar en el Periurbano Norte de Buenos Aires. El caso de los partidos Exaltación de la Cruz y Luján. Bs As: Ed La Colmena.
- Feito, M.C. (2016).** Gestión de sistemas productivos locales para el desarrollo local de agricultores familiares periurbanos en La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. En: Actas IV Congreso Internacional de Desarrollo Local, Lima, Perú, 9 al 12 de noviembre del 2016.
- Feito, M. C. (2017).** Visibilización y valoración de la agricultura familiar periurbana. Intervenciones de políticas públicas en el partido de La Matanza. Mundo Agrario, 18(38), e055. Universidad Nacional de La Plata. <https://doi.org/10.24215/15155994e055>.
- Feito, M.C. (2018^a):** Problemas y desafíos del periurbano de Buenos Aires. En: Revista Estudios Socioterritoriales, N° 24 julio-diciembre 2018, e002. Disponible en: <http://revistaest.wix.com/revistaestcig>
- Feito, M.C. (2018b):** Políticas públicas de inclusión y soberanía alimentaria en el marco de acciones para el desarrollo rural. El Programa Huertas Matanceras, La Matanza, Argentina. En: Actas X Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Montevideo, Uruguay, 25 al 30 noviembre 2018.
- Feito, M.C. (2019).** “Políticas públicas y gestión para la Agricultura Familiar en el Area Metropolitana de Buenos Aires: problemas y desafíos”. Actas del Primer Encuentro Latinoamericano de Estudios del Rururbano. ELER. Santa Fe, Argentina, 7 y 8 de marzo 2019.
- Feito, M.C. y Barsky, A. (2020)** Periurbano (1980-2020). En: Salomón, A. y Muzlera, J. (comps.) Diccionario del Agro Iberoamericano. Ed Tesseo Press. Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar Región Pampeana (2011). Documento O. Ed: INTA, Bs As.
- Giddens, A. (1984).** The construction of society: an outline of the theory of structuration. Cambridge, Polity Press. UK.
- INDEC (2002).** Censo Nacional Agropecuario 2002. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Economía.
- INDEC (2010).** Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Economía. Disponible en: https://www.indec.gov.ar/ftp/censos/2010/CuadrosDefinitivos/P2-D_6_427.pdf
- Long, N. (1992).** From paradigm lost to paradigm regained? The case for an actor-oriented sociology of development. En: Long N. y Long A. 1992 Battlegrounds of Knowledge. The interlocking of theory and practice in social research and development. Routledge, UK.

- Long, N. (2001).** *Development Sociology: Actor Perspectives*. Routledge, UK.
- Manzanal, M. (2006).** *Regiones, territorios e institucionalidad del Desarrollo Rural*. En: Manzanal, M.; G. Neiman y M. Lattuada (comps.). *Desarrollo rural. Organizaciones, instituciones y territorios*. Ed Ciccus, Bs As.
- Oszlak, O. y G. O'Donnell (2007).** *Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación (1ª edición, pp.555-585)*. En C. Acuña (comp.) *Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: retomando el debate de ayer para fortalecer el actual*. Bs As: Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Parés, G. (2009).** *Las funciones de la agricultura urbana y periurbana en La Matanza, desde la óptica de los propios agricultores, en la primera década del siglo XXI*. Tesis de Maestría. Buenos Aires/Madrid: Universidad Nacional de San Martín / Universidad Autónoma de Madrid.
- Rodríguez Bilella, P. (2004).** "Etnografía y política social: el caso del enfoque orientado al actor". Ponencia presentada a las IV Jornadas de Etnografía y Métodos Cualitativos, IDES, Buenos Aires, agosto 2004.
- Rodríguez Bilella, P. y Tapella, E. (2008):** "Transformaciones globales y territorios". Buenos Aires, Ed. La Colmena.
- Sen, A. (1982)** *Choice, Welfare and Measurement*. Oxford, Blackwell

Cebollas lechugas
zapallos y alfalfa
anidan un canto

Pescados quesos
jengibre y naranjas
pregonan olvidos

Papas choclos
maníes y acelgas
en pilas descansan

Huevos aceites
mandioca y repollo
añoran sus campos

Sonidos colores
dispersos aislados
pasillos hilvanan

Una voz ancestral
advierte:
que se acabe el hambre.

Poema: **Susana Novick**
Foto: **Juan Pablo Lepore**







CAPÍTULO V

EL ROL DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES COMO AUTORIDAD METROPOLITANA DE CONCENTRACIÓN FRUTIHORTÍCOLA. IMPLEMENTACIÓN Y TRAYECTORIA

Andrés Barsky • Joaquín Pérez Martín

1. INTRODUCCIÓN

Al momento de culminarse la redacción del presente trabajo, dos acontecimientos paradójales recientes dieron cuenta de la situación compleja en la que se encuentra la Argentina como país productor y consumidor de alimentos. Por un lado, mientras que para la campaña agrícola 2018/2019 se estableció un récord histórico anual en la cosecha de cereales y oleaginosas de aproximadamente 150 millones de toneladas; por el otro, el Congreso Nacional sancionaba simultáneamente la Ley N° 27.519 de Emergencia Alimentaria Nacional y se implementaba, con el advenimiento de la nueva administración, el Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”, que tuvo como eje la entrega masiva de la Tarjeta Alimentar. Ambas resoluciones son el resultado del sostenido aumento del precio de los alimentos que se viene registrando en los últimos años en el mercado interno, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo de vastas franjas de la población. De acuerdo a datos del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (ERS-USDA), en Argentina se destinaron —entre 2012 y 2016— 2.500 dólares per cápita a comprar comida, constituyendo el 28 % del gasto total de los hogares, uno de los más elevados a nivel mundial tanto en términos absolutos como relativos. El nivel de contrasentido que se registra entre los beneficios producidos por el

excedente exportable de commodities y las carencias nutricionales básicas que afectan en la actualidad a 3,2 millones de personas indigentes, así como la alimentación incompleta que comprende a otros 13 millones de personas bajo la línea de pobreza, da cuenta del grado de inconsistencia al que ha llegado la política pública general.

El debate en torno a cómo se ha gestionado la producción y distribución de los alimentos a través de las esferas pública y privada no es reciente en nuestra sociedad. En el presente capítulo, se realizará un análisis histórico acerca de cómo se llevó a cabo la institucionalización y puesta en funcionamiento del mayor mercado mayorista de la Argentina, el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA). El trabajo dará cuenta de los alcances y limitaciones que ha encontrado esta iniciativa desde el momento de su nacimiento como proyecto en el papel hasta su puesta en funcionamiento y posterior trayectoria, con una reflexión de cierre acerca del potencial de coordinación para ordenar el abasto metropolitano que aún conserva este organismo, el cual continúa siendo uno de los espacios de transacción comercial que mayor volumen de frutas y hortalizas opera en el mundo (1,36 millón de toneladas anuales en 2019), constituyendo una referencia ineludible en precios y volumen para el mercado nacional. Máxime en un contexto de accesibilidad alimentaria en situación crítica, como es la que se registra actualmente en la actual coyuntura, agravada por el surgimiento de la pandemia del Covid-19.

2. EL PROCESO DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES (MCBA)

A mediados del siglo XX, en virtud de la acelerada expansión urbanística que se registraba en la ciudad de Buenos Aires comienzan a hacerse evidentes —tanto para la conducción política como para la ciudadanía en general— las externalidades negativas derivadas de los congestionamientos resultantes de distintas actividades económicas. Tal como se desprende de un estudio realizado anteriormente por los autores de este trabajo (Pérez Martín y Barsky, 2019), de acuerdo al testimonio de distintos actores y a la documentación a la que se tuvo acceso, es durante la administración de Arturo Frondizi en la Nación y la intendencia de Hernán Giralt en la Capital Federal (ambos se desempeñaron entre 1958 y 1962) cuando se percibe como problemática la presencia de diversos mercados mayoristas frutihortícolas dentro de la ciudad.

En el marco de una creciente preocupación sobre la sanidad alimentaria, se procede a proyectar la institucionalización de un mercado concentrador. Para ello, en 1961 se encargó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) un estudio del cual participaron especialistas de Francia pertenecientes al consorcio de empresas públicas *Société Centrale pour l'Équipement du Territoire* (SCET). El resultado de ese trabajo propuso un mercado concentrador con perímetro monopólico, lo cual va a tener una influencia decisiva en el diseño del abasto alimentario metropolitano de las décadas siguientes. Por lo tanto, en una aglomeración como el Gran Buenos Aires, que en 1960 poseía 6.700.000 habitantes y cuya expansión física se materializaba a través de seis corredores de transporte (norte, noroeste, oeste, sudoeste 1, sudoeste 2 y sur), la recomendación del documento técnico consistió en establecer un único mercado concentrador en Tapiales, La Matanza, en el corredor sudoeste 1, propuesta que —como se analizará más adelante— va a ser criticada en un informe realizado por consultores de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) del año 1974.

Lo que demuestra el relevamiento documental efectuado es que, a pesar de la importante inestabilidad política que caracterizó al período 1960-1983, el plan original de constituir un mercado mayorista adquirió una inercia tecnocrática que llevó al proyecto a persistir en el tiempo, materializándose finalmente en el marco de la última dictadura militar. Un punto muy importante tuvo que ver con la ingeniería institucional que se requirió para que una iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires —que determinó la prohibición de los mercados mayoristas en su propio territorio, como primera medida— se implementara en una jurisdicción externa a ella. En un régimen federal como el que caracteriza a nuestro país, debió apelarse a un complejo mecanismo legal para vehicular una política metropolitana: realizar desde la Nación (posteriormente a la destitución de Frondizi) una iniciativa de intervención federal en la Provincia de Buenos Aires para que el conurbano bonaerense se adecue a la prohibición de los mercados mayoristas: el Decreto Ley N° 13.435/62.

Como se señala en el trabajo de referencia (Pérez Martín y Barsky, 2019), en 1963 la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a contratar a la francesa SCET para avanzar en el anteproyecto del MCBA. “En el mismo año, el presidente Guido crea por Decreto (N° 3287/1963) el Ente Realizador del Mercado Central de Buenos Aires a partir de la propuesta de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que queda instituido en el ámbito de la Municipalidad aunque, según consta en la normativa, “sus establecimientos

podrán ser instalados en cualquier punto del país”. El Ente tenía como objeto la instalación y administración de un mercado central y estaba integrado por cinco integrantes, todos ellos nombrados por el Intendente. En el mencionado Decreto se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos definidos por la Organización del Plan Regulador para la instalación del futuro mercado. A su vez, se invita a la Provincia a adherir al Ente, lo cual se formaliza a través del Decreto provincial N° 5053/1963”.

Este punto resulta central a la hora de caracterizar la complejidad institucional a la que se debió apelar para que el proyecto de mercado concentrador metropolitano pudiera seguir su curso. La Nación prohíbe la habilitación de nuevos mercados mayoristas en la Capital, la Nación interviene la Provincia de Buenos Aires para que esta disposición también rija en el conurbano (como unidad diferenciada dentro del territorio provincial, a pesar de que nunca tuvo una institucionalización efectiva como tal) y esa intervención constituya el basamento legal para que la Provincia adecue su adhesión al proyecto de manera compulsiva. Se crea el Ente Realizador del MCBA a pedido de la Capital —que necesita solucionar las externalidades negativas generadas por el funcionamiento de los mercados frutihortícolas y relocalizar la actividad fuera de su jurisdicción; problemática que no era visualizada como un problema de agenda pública en el conurbano— y el organismo queda enmarcado dentro del ámbito municipal porteño, pero aclarándose que las instalaciones del Central pueden localizarse, si así se dispone, dentro de cualquier punto del territorio nacional. Es decir, que la Nación conminó a las partes a adherir a una acción conjunta a pedido de la Ciudad de Buenos Aires, se intervino federalmente a la otra jurisdicción —que es donde se va a instalar el Mercado—, se crea el Ente Realizador y el mismo queda bajo el control político de la ciudad capital. En ese marco, la Capital Federal queda habilitada para conveniar directamente con los municipios bonaerenses sobre el particular desde una posición de fuerza.

Otra de las cuestiones medulares que surgen del análisis realizado es que fue en el transcurso de los gobiernos desarrollistas cuando el proyecto del MCBA avanzó significativamente. Luego de la implementación de la etapa inicial del proyecto impulsada durante el gobierno de Arturo Frondizi, durante la presidencia de Arturo Illia (radical “del pueblo”, caracterizado por una ideología más nacionalista en lo económico que Frondizi) se paralizó su continuidad debido a que se consideraba la construcción del Mercado una obra costosa para el erario público. La dictadura de la Revolución Argentina, denominada como “desarrollista autoritaria” o “burocrático autoritaria” por Guillermo O’Donnell, constituyó otro hito en

la continuidad del proyecto. Como bien se señala en el trabajo de investigación, “el Ente Realizador deja de existir para convertirse en la actual Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA), a través de la Ley N° 17.422. Se concreta, de esta forma, una de las iniciativas que —en el marco del Consejo Nacional de Desarrollo— la Junta de Gobernadores de la Región de Desarrollo Área Metropolitana se había propuesto, “tendiente a cambiar la estructura de la comercialización de los abastecimientos entre los sectores mayoristas y minoristas, mediante la creación de un medio en el que la oferta pueda concurrir con toda libertad y amplitud”. La CMCBA queda conformada como una entidad pública interestadual, con capacidad de derecho público y privado, integrada por los gobiernos de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En función del objeto que se delinea para la Corporación de proyectar, construir y administrar un mercado único concentrador, en el texto de la ley se hace efectiva la expropiación de los terrenos en La Matanza que se habían declarado de utilidad pública en 1963. A partir de la creación de la Corporación, el proyecto del Mercado Central comienza a tomar un gran impulso, se conforma el directorio, y entre 1969 y 1971 comienzan a realizarse una gran cantidad de estudios específicos y complementarios, dándole mayor envergadura al proyecto”. En 1971, en línea con las disposiciones que se tomaban en ese momento en Francia, se sanciona la “Ley de Mercados de Interés Nacional”, que fundamenta la prestación de un servicio público por parte del MCBA y un perímetro exclusivo de incidencia territorial.

Con el advenimiento del tercer peronismo por la vía del voto popular, el proyecto del MCBA registra marchas y contramarchas. El camporismo incorpora a los mercados de la Capital dentro de los mercados de interés nacional, postergándose la continuidad de la iniciativa. Durante el gobierno de Lastiri se vuelve a retomar: dos decretos del año 1973 establecen que la Corporación del Mercado Central deberá concentrar la operatoria frutihortícola en un futuro. Y con el regreso de Juan Domingo Perón a la conducción política nacional, el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional decretado ese mismo año contiene varios lineamientos de política alimentaria, determinándose que el MCBA pasa a ser un instrumento de alta relevancia y se estima su habilitación para 1976. Durante los últimos años del peronismo, comienza la construcción del Mercado (los primeros movimientos de suelos se habían realizado al final de la Revolución Argentina) y avanza hacia su concreción.

Sin embargo, vale señalar que un informe de la FAO finalizado en 1974 —a pedido del gobierno argentino— determinó que resultaba inconveniente la

instalación de un único mercado concentrador en una metrópoli de las dimensiones de Buenos Aires. El mismo recomendaba “un sistema de tres mercados mayoristas consistentes en un mercado principal y dos secundarios”, aprovechando “el mercado único planeado”. El consultor alemán que lideró el equipo de redacción del documento fue el especialista Dieter Link.

Con la llegada al poder de la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional se interviene la Corporación del MCBA, pero no se detiene la obra. La misma continúa (el consorcio franco-español SCET-MERCASA tiene a su cargo la construcción) y en 1977 registra un avance significativo. Como Nación, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires tienen a cargo su financiamiento, en 1978 se firma un convenio donde se especifican metas de inversión y la participación de cada parte. Sin embargo, el 95 % del financiamiento estuvo a cargo del Estado Nacional (el cual accedía al crédito internacional en pleno auge del endeudamiento externo), el 4 % la Provincia de Buenos Aires y el 1 % la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción que —paradójicamente— fue la que más había presionado desde sus inicios por la concreción del proyecto. En definitiva, durante el Proceso la inercia desarrollista de esta iniciativa continuó, a pesar del neoliberalismo imperante en la orientación económica nacional. En 1981 la construcción del MCBA estaba terminada y el predio en condiciones de ser inaugurado.

En este punto, vale señalar que una vez realizada la implantación de un mercado concentrador de expendio alimentario de enormes dimensiones, producto de la planificación tecnocrática de orientación desarrollista, llegaba el momento de insertarlo (“bajarlo”) en la sociedad como nuevo instrumento ordenador de la comercialización frutihortícola. Es decir, tensionando la gobernanza alimentaria metropolitana de hecho existente hasta ese momento. Y aquí es donde comienza a operar un complejo juego de pinzas desde los estamentos militares y la sociedad civil, generándose activas resistencias a la puesta en marcha de este “elefante blanco”. No deja de ser sorprendente que en el marco de una dictadura altamente represiva —como fue el Proceso de Reorganización Nacional— no haya podido inaugurarse la obra, inclusive pensándose en el rédito político que conllevaría para el gobierno la inauguración de la misma.

En este sentido, los intendentes de la Ciudad de Buenos Aires Osvaldo Cacciatore y Guillermo del Cioppo presionaron por la apertura, pero desde la provincia de Buenos Aires el gobernador Ibérico Saint Jean se opuso, su sucesor Oscar Gallino la apoyó y el último gobernador del régimen Jorge Aguado se opuso nuevamente. En 1982, la Corporación del MCBA se enfrentó con una

fuerte oposición a su puesta en funcionamiento: se acusaba al Mercado de iniciativa colectivista, de imponer un perímetro de protección obligatoria de corte estatista reñido con las reglas del libre mercado, de fomentar el cooperativismo (muy mal conceptualizado por la dictadura), de copiar un “modelo fracasado en Francia”, etc. Aquí también entra en escena un complejo juego que dirime fuerzas al interior del sector frutihortícola: la Asociación de Productores de Frutas Argentinas se había opuesto tempranamente a la iniciativa; los mercados del conurbano institucionalizan la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola (CAAF) y, como lobby representativo de ese sector, presentan recursos de amparo ante la Justicia en contra de la inauguración del MCBA (son notables las resistencias que presentan particularmente los mercados de Avellaneda, Tres de Febrero y Beccar). Por otra parte, la apertura del Mercado es apoyada por la Federación Agraria Argentina, que se había agrupado junto con Coninagro y otras organizaciones en lo que se llamó el Consejo Coordinador Frutihortícola; también por la Asociación de Cooperativas Frutihortícolas y la Asociación Patronal Quinteros Unidos (APQU). Promediando los últimos meses de la dictadura se intenta poner en funcionamiento el Mercado —mayo de 1983—, pero su operatoria es reducida.

Por otra parte, durante ese año unos 2.500 agricultores del periurbano se movilizaron políticamente —motorizados por la Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentinas (ACOHOFAR)—, para pedir el inicio de actividades del MCBA, concertando audiencias con los candidatos presidenciales Ricardo Alfonsín (radical) e Ítalo Lúder (peronista). Ello constituyó un hecho inédito, dado el individualismo y la baja capacidad organizativa históricamente reinantes, en particular en el sector hortícola. Los movilizaba la necesidad de contar con precios de referencia de los alimentos que producían —estaban pidiendo una mayor intervención estatal en el sector—, pero también un mayor acceso a los mercados urbanos.

En este punto, el trabajo de investigación realizado por los autores detalla la complejidad de situaciones que se registran desde el regreso del sistema democrático y la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación hasta la inauguración oficial del MCBA un año más tarde. El capital político del nuevo presidente jugó decisivamente a favor de la iniciativa. E incidió sobre la heterogeneidad que se registraba al interior del sector frutihortícola (conflictos entre consignatarios intermediarios del Gran Buenos Aires versus productores del periurbano y del interior que querían acceder a puestos propios o naves de comercialización), lo cual fue fundamental para poder vencer

las resistencias de los mercados del conurbano. En definitiva, se trató de una intensa disputa entre quienes promovían la concentración hacia una gran boca de expendio mayorista frente a quienes defendían la perdurabilidad de los mercados asentados en la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

Como se explica en detalle en el trabajo de investigación citado (Pérez Martín y Barsky, 2019), anteriormente a la inauguración del Mercado “se derogan los decretos N° 146 y 187 del año 1973, los cuales declaraban como mercados de interés nacional a seis mercados de la Capital Federal (incluido el Mercado de Abasto) y a dieciocho mercados del conurbano bonaerense (...) Los días previos y, de acuerdo a la mencionada la Ley de Mercados de Interés Nacional (N° 19.227) y la Ley 10.202 de la Provincia de Buenos Aires, se estableció el cese formal de los mercados mayoristas del conurbano de acuerdo al perímetro de protección establecido”. Se registran enormes presiones contra la apertura, desabastecimiento metropolitano por parte de la denominada “Patria Verdulera” y ello se subsana con el envío de mercadería por parte de provincias del interior, proveedoras de frutas y verduras, que colaboran con Raúl Alfonsín a pesar de no ser de su signo político. De esta manera, el 15 de octubre el presidente de la Nación inaugura oficialmente el Mercado Central de Buenos Aires.

En una entrevista realizada en el año 2010, el operador del Mercado Central Mariano Winograd afirmaba lo siguiente:

“el Mercado Central de Buenos Aires fue concebido en los años sesenta, cuando Argentina aún parangonaba al Brasil del urbanista Oscar Niemeyer. Fue construido en los setenta al elevado costo de 600 millones de dólares, erogados por el último gobierno constitucional antes del golpe de 1976, a cargo de Isabel Martínez de Perón, y la dictadura militar —denominada Proceso de Reorganización Nacional—, en proporciones similares. Fue finalmente inaugurado cuando se recuperó la democracia en 1984, momento durante el cual se convocó a especialistas del sector frutihortícola. Cuando se lo ideó, el Mercado Central iba a ser una catedral de la alimentación, una réplica local de los mercados concentradores frutihortícolas como los de muchas ciudades europeas. Con el paso del tiempo, el proyecto se fue deformando. En definitiva, fue pensado como un instrumento para concentrar la provisión de frutas y verduras a través de una corporación tripartita, imitando el modelo de central mayorista del tipo europeo de posguerra.” (comunicación personal).

En función de lo reseñado, la etapa de diseño e implementación del MCBA resulta central para comprender el funcionamiento del Mercado durante las últimas décadas. Y dar cuenta del esfuerzo económico y político que le llevó a la sociedad en su conjunto constituir una autoridad metropolitana para la concentración de la comercialización frutihortícola. Paradójicamente, la constitución de tal autoridad va a perder fuerza desde los años noventa en adelante con las políticas de desregulación que caracterizaron a la etapa denominada neoliberal, el desembarco de la Gran Distribución (híper y supermercadismo), el resurgimiento de los mercados secundarios y el avance de redes hortícolas (protagonizadas, entre otros, por actores de la colectividad boliviana y organizaciones sociales de la agricultura familiar) “por fuera” de la autoridad de concentración. Asimismo, nuevos fenómenos metropolitanos de reconfiguración del periurbano, potenciados por el avance de las autopistas y el desembarco de nuevos agentes sociales (inmobiliarios, residenciales, industriales, clases acomodadas y segmentos populares) en la periferia de la ciudad, van a potenciar la multiplicación de los mercados de cercanías. Parte de esta temática va a ser sistematizada en el punto 4. del trabajo, respecto de las diversas iniciativas público-privadas que van a surgir en torno a un nuevo mapa de actores que pasan a complejizar el entramado que conforma el abastecimiento alimentario metropolitano.

3. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES (MCBA) A PARTIR DE LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA

Tras su inauguración en 1984, los distintos gobiernos elegidos por el voto popular le imprimieron una orientación diferenciada a la gestión del MCBA, en función de distintas cuestiones de agenda que fueron surgiendo respecto de la coyuntura económica general y de la problemática alimentaria en particular. Durante los primeros años del gobierno de Alfonsín, cuando el MCBA llegó a concentrar cerca del 70 % de la comercialización frutihortícola metropolitana, surgieron importantes resistencias de los operadores a ser formalizados por la vía de la bancarización. Se suponía que la concentración de la operatoria en una sola boca de expendio facilitaría el “blanqueo” de una actividad que históricamente se caracterizó por su escaso registro. Asimismo, y a pesar del perímetro de exclusividad, algunos mercados del conurbano continuaron en

funciones. A partir de ese mismo año, se constituyó en el MCBA la administración del Programa Alimentario Nacional (PAN), creado por Ley 23.056/84. Con el deterioro de la situación social y los estallidos hiperinflacionarios, el MCBA consolidó su rol nodal del Programa. La mirada sobre el MCBA como un instrumento de amortiguación de precios en contextos inflacionarios va a ser retomado por varias administraciones en momentos subsiguientes.

En los años noventa, la gestión del Mercado Central va a estar muy vinculada con las dinámicas políticas del territorio de La Matanza. En 1989 preside el directorio del Mercado Central Juan Carlos Piriz, a quien se vincula con el dirigente local Alberto Pierri, quien presidió la Cámara de Diputados de la Nación entre 1989 y 1999. El presidente Carlos Menem decide la intervención del Mercado en 1993, designando al subcomisario Luis Abelardo Patti para disciplinar, con dispares resultados, situaciones de violencia física que se habían registrado en sus instalaciones. Si bien el gobierno menemista —desde su concepción neoliberal— procuró ceder la administración del MCBA a un consorcio privado, el rol concentrador del Mercado va a ser afectado decisivamente por las desregulaciones económicas motorizadas por el propio gobierno —que finalizaron con el perímetro de protección, lo que se traduce en una multiplicación de los mercados secundarios—, el desembarco de la Gran Distribución (híper y supermercadismo), la crisis de la horticultura familiar tradicional en el periurbano de Buenos Aires y el avance de las redes de producción y comercialización en manos de la colectividad boliviana. De concentrar casi la totalidad de las operaciones frutihortícolas en la década del ochenta, su declinación pasa a ser constante. En el año 2000, el Consorcio del MCBA promueve la implementación de un “Plan Maestro del Mercado Central de Buenos Aires” y la creación una gran plataforma logístico-alimentaria, participando de la etapa preliminar la empresa española Teirlog.

Con el advenimiento de la crisis económica y alimentaria del año 2002, el presidente interino Eduardo Duhalde pensó, como medida paliativa, en utilizar las estructuras del Mercado Central para implementar el proyecto de elaboración de la denominada “Supersopa”, un alimento nutritivo pensado para sectores de bajos ingresos y a realizarse con descartes del Mercado. Como consecuencia de haberse habilitado una vinculación con la Corporación en ese contexto, la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional de Quilmes se hizo cargo de la iniciativa y desde entonces el Programa Supersopa se ocupa de producir alimentos enlatados concentrados, aunque con escasa trascendencia ante la opinión pública. La referencia a esos sucesos busca destacar cómo en

momentos de situaciones socioeconómicas extremas las administraciones nacionales han visualizado al Central como un organismo desde el cual generar políticas de mitigación del hambre.

Durante la administración kirchnerista (2003-2015), el Mercado es visualizado como un instrumento antiinflacionario, particularmente a partir de la segunda mitad de la década del 2000, cuando la inflación adquiere una inercia importante. En 2007, el control del Mercado Central queda bajo la órbita del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y la presidencia la ejerció Carlos Martínez, así como la vicepresidencia (representando a la provincia de Buenos Aires) la asumió Alberto Samid, perteneciente al sector de los mata-rifes. La porción destinada a las transacciones frutihortícolas queda acotada a 39 hectáreas en el sector de naves, mientras que la Gerencia de Proyectos y Desarrollo cede la tierra para alquilarla a empresas (por lo general multinacionales del sector alimentario) y a la constitución de la feria minorista y el Paseo de Compras. El impacto de esta reconversión es significativa: unos años después se estimaba que 200.000 personas concurrían al Central cada fin de semana, fenómeno similar a lo que acontece desde hace muchos años en la ciudad de México y otras ciudades latinoamericanas (el mercado concentrador debilita su rol logístico y se convierte en una feria). Oscar Liverotti, técnico del MCBA, estimaba que para 2010 se comercializaron 840.000 toneladas de hortalizas, es decir que había declinado al 40 % el volumen de alimentos frescos que ingresaban a Buenos Aires vía el Central, de un total de unos 2 millones de toneladas anuales de hortalizas (Barsky, 2013: 210). En 2019, el volumen ascendió a 1.365.000 toneladas por año.

En virtud de la masividad del público que asistía a las bocas de expendio minoristas, se previó la instalación de sucursales del Mercado Central en otros puntos del área metropolitana. En José C. Paz se estableció una sucursal en 2011 y se preveía construir otra en 2015 en el barrio de Colegiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero su autorización fue resistida por la administración del jefe de gobierno Rodríguez Larreta y, aunque se construyó el predio, no llegó a concretarse su apertura. Como se analizará más adelante, desde 2016 el gobierno de Cambiemos implementará ferias itinerantes del Mercado Central denominadas “El mercado en tu barrio”.

Con el advenimiento de la administración del presidente Macri, se nombra en la conducción del Mercado a Fabián Miguelez, operador frutihortícola de trayectoria en el Central y a Marcelo Espinoza, de la Federación de la Papa. El desembarco de representantes sectoriales al frente de la Corporación suponía poner en valor la

actividad frutihortícola. Ante el importante deterioro edilicio que había registrado el MCBA con el paso del tiempo, inicialmente se hizo foco en modernizar las infraestructuras del Mercado y se retoma una idea —similar a la del año 2000— de contar con un Plan Director y construir una plataforma logística de grandes dimensiones. A partir de diciembre de 2016 se realizaron obras de mejoras por alrededor de 200 millones de pesos: “repavimentación de calles, la puesta en valor de las naves, el cerramiento del área de transacciones, la instalación de lámparas LED y de nueva cartelería y señalización”, según se anunciaba. Asimismo, se pensó en constituir un gran hub alimentario en base a una inversión privada estimada en cerca de 400 millones de dólares. Habiéndose estudiado las experiencias del Rungis de París, del Tsukiji de Tokio y del Mercabarna de Barcelona, entre otras, se llegó a la conclusión de que se tomaría como nuevo modelo de referencia a este último mercado. Se anunció que se destinarían 119 hectáreas a la construcción de una plataforma logística multimodal que daría lugar a un gran polo logístico y alimentario nacional, también de depósitos fiscales. Como ejemplo simbólico, pero no relacionado directamente con el sector, se instaló un centro de distribución de la empresa de ventas por internet Mercado Libre.

Sin embargo, en agosto de 2018 Fabián Miguelez renuncia a la conducción de la Corporación y es reemplazado por Belisario Álvarez de Toledo, ex-director ejecutivo de AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) y funcionario saliente del Ministerio de Desarrollo Social. Desde marzo de 2019, se implementó el “Plan de Ordenamiento del Área Transaccional”, procurando que el Mercado sea un espacio de referencia para la oferta y demanda y evitar, a través de horarios de venta establecidos (lunes a viernes de 2 a 10 horas y sábados de 2 a 14 horas), la dispersión de la oferta, la clarificación del precio y el disciplinamiento de los oferentes. Asimismo, a partir del 1° de enero de 2019 comenzó a regir el “Reglamento para el Servicio de Abastecimiento” dirigido a “regular el servicio de abastecimiento de productos perecederos y no perecederos que se realice a través de la Corporación del Mercado Central hacia entes y jurisdicciones de carácter público”, una problemática de relevancia en lo referido al abasto metropolitano y nacional. Pero vale señalar que, en el marco de un fuerte ajuste del gasto público y un creciente deterioro de las variables macroeconómicas generales, se posterga la declamada intención de implementar un hub alimentario del tipo Mercabarna.

Con el regreso del peronismo al poder en diciembre de 2019, a través de la presidencia de Alberto Fernández, se registraron novedades de carácter político en el Mercado Central: Nahuel Levaggi, un representante proveniente de una de

las organizaciones sociales de la agricultura familiar más importantes del área metropolitana, la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), fue designado como su presidente. Desde su arribo, y ante la continuidad del fenómeno inflacionario, la nueva conducción promovió el “Compromiso Social de Abastecimiento”, un acuerdo de precios mayoristas por bulto acordados semanalmente con 40 operadores, con difusión de precios minoristas sugeridos para supermercados, almacenes y verdulerías. E institucionalizó el Área de Alimentación Sana, Segura y Soberana así como implementó el “Programa de Abastecimiento Social para el Armado y Distribución de Bolsones de Verduras de Estación a Bajo Costo”. Ante la emergencia de la pandemia Covid-19, y tomando como referencia la “Guía de Recomendaciones Interinstitucionales para Prevenir Covid-19” de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI) y el Instituto Nacional de Epidemiología (INE) “Dr. Juan H. Jara”, el MCBA emitió su propio “Protocolo de Medidas Preventivas Covid-19. Mercado Mayorista de frutas y hortalizas”. El documento genera recomendaciones a los transportistas, operadores y manipuladores de alimentos para que extremen los recaudos de higiene y la distancia social. La actividad cotidiana del Mercado queda fuertemente pautada por la agenda sanitaria: se prohíbe el acceso al público que realizaba compras minoristas, se llevan acciones de control de temperatura a las personas que ingresan, y de limpieza y saneamiento de las distintas instalaciones (complejo de naves, feria minorista, paseo de compras, centro de salud, etc.).

4. POLÍTICAS Y ACTORES DEL ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO METROPOLITANO. SISTEMATIZACIÓN Y BALANCE DE INICIATIVAS RECIENTES

Con el cambio de administración acaecido en 2015, se produjo —en lo referido a la producción de alimentos— la emergencia de un discurso neomodernizador que se propuso promover, a partir de una creciente liberalización económica, las exportaciones de cereales y oleaginosas para transformar a la Argentina —de acuerdo al relato oficial— en el “supermercado del mundo”. Las medidas económicas estuvieron destinadas a estimular una mayor capitalización del sector agroexportador a través de la disminución o eliminación de retenciones y la quita de regulaciones en las liquidaciones de divisas. En

2018, en el marco de una importante crisis financiera que llevó al país a pedirle auxilio al Fondo Monetario Internacional (FMI), se produjo una profunda reestructuración en los organigramas nacionales: el Ministerio de Agricultura perdió su rango ministerial (adquirido en 2008) y pasó a ser Secretaría. Asimismo, se produjo una profunda reestructuración del área de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial que había trabajado con productores del abasto alimentario de Buenos Aires durante los años anteriores, repercutiendo de manera directa en el trabajo de técnicos territoriales con llegada a distintas zonas del país (muchos de ellos cesaron en sus funciones).

Por otra parte, una serie de movimientos sociales vinculados con las producciones periurbanas (Unión de Trabajadores de la Tierra, Movimiento de Trabajadores Excluidos, etc.) fueron ganando en visibilidad pública en los últimos años a través de la realización de manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires (denominadas “verduras”), que consistieron en la venta a bajo precio de verduras, así como se han multiplicado los nodos de distribución de bolsones alimentarios y las iniciativas agroecológicas, pasando a tener también protagonismo las redes de bancos de alimentos (muchas de ellas surgidas al calor de la experiencia del año 2002). Asimismo, en un contexto de importante suba del precio de los alimentos, deterioro del empleo y pérdida del poder adquisitivo del salario real, pasó a adquirir una creciente visibilidad negativa en la opinión pública la intermediación comercial, algo que se publicitó incluso desde iniciativas oficiales. En definitiva, en los últimos años se produjo una incorporación de la agenda del abastecimiento alimentario en diversos campos de actuación pública, la cual se despliega en la actualidad en un contexto de creciente complejidad política, inseguridad alimentaria e incertidumbre económica.

4.1. Nuevas regulaciones a la producción y trazabilidad de alimentos hortícolas

En febrero de 2015, por Resolución N° 31 el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estableció la implementación del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV) de cumplimiento obligatorio en todo el país, tanto para comercializadores como para transportistas. Su artículo 13 hace referencia a la “Responsabilidad solidaria. Toda persona física o jurídica que origine, realice o cierre el traslado de productos, subproductos y derivados de origen vegetal es solidariamente responsable por

el cumplimiento de la presente norma”. A partir del año 2018, el SENASA comenzó a exigir el DTV-E (electrónico), reemplazando a la primera versión del DTV y al remito comercial de la AFIP, unificando ambos trámites. En octubre comenzó a regir en el rubro de las hortalizas pesadas y en diciembre pasó a ser obligatorio para todos los productos (resolución AFIP-SENASA N° 4.297/18). No sólo el operador económico que remite mercadería abre un expediente de DTV-E, sino también quien lo recibe. Este último debe cerrar la tramitación del mismo. Está pensado como un sistema para tener registro del origen de las mercaderías, un tema que siempre fue de difícil implementación en el sector hortícola, caracterizado por una elevada informalidad y la existencia de canales inorgánicos.

Por otra parte, en julio de 2018 se anunció que las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) serían incorporadas al Código Alimentario Argentino (CAA), pasando a ser obligatorias en 2020 para frutas y en 2021 para hortalizas. Por lo tanto, “toda persona física o jurídica responsable de la producción de frutas y hortalizas deberá cumplir con los siguientes requisitos específicos vinculados a: identificación y trazabilidad; productos fitosanitarios; agua; fertilizantes orgánicos; animales en el predio productivo; manipulación; registros”. Esta iniciativa, también motorizada por el SENASA, se complementa con la “Guía para la habilitación de establecimientos de empaques de frutas y hortalizas de producción familiar y cooperativa”, publicada por el organismo en marzo de 2019.

De esta manera, en los últimos años se siguió consolidando desde dicho organismo una serie de medidas que buscan avanzar hacia una regularización legal, económica y ambiental de la actividad frutihortícola, poniéndose como objetivos lograr “la trazabilidad de las frutas y hortalizas, la identificación del productor y empacador, la promoción de la inocuidad sanitaria de los productos y la información al consumidor” (SENASA, 2008). Como antecedentes significativos, vale mencionar que en el año 2001 había implementado el Sistema de Control de Frutas y Hortalizas Frescas (SICOFHOR) y el 1° marzo de 2008 anunció la apertura de la inscripción de los productores agrícolas de todo el país en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios (RENSPA), comenzando su primer año por los fruticultores y horticultores. A nivel del abastecimiento de la principal aglomeración del país, en noviembre de 2009 el SENASA había instituido al interior de su organigrama el Centro Regional Metropolitano, diferenciando por primera vez al espacio metropolitano como espacio de intervención, al igual que lo había hecho el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) al crear la Estación Experimental Area Metro-

politana de Buenos Aires (EEA INTA AMBA) en el año 2010, agrupando las agencias localizadas alrededor de Buenos Aires.

5. CONCLUSIONES: LA TRAYECTORIA OSCILANTE DEL MERCADO CENTRAL Y SU POTENCIAL COMO INSTRUMENTO ORDENADOR DEL ABASTO ALIMENTARIO METROPOLITANO

La diversidad de actores y situaciones vinculadas al abastecimiento metropolitano implica una serie de discusiones respecto del “carácter inorgánico” que se registra en muchos de los procesos que conforman el abastecimiento alimentario de la aglomeración Gran Buenos Aires. La especialista Margaret Pasquini, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes (Colombia), sostuvo en un trabajo reciente que: “teniendo en cuenta las tendencias de urbanización, la evidente vulnerabilidad de las áreas urbanas a las fluctuaciones de precios de los alimentos y los problemas persistentes de salud pública ligada a la dieta, no es sorprendente que las ciudades están emergiendo como actores significativos en la transformación de los sistemas agro-alimentarios a través de iniciativas para re-diseñar sus sistemas de abastecimiento. Para Johannes Wiskerke, estas estrategias alimentarias urbanas hacen parte de un nuevo modelo de gobernanza alimentaria asociado al surgimiento de una nueva geografía agro-alimentaria integrada y territorial que busca “re-anclar” los sistemas productivos en el territorio fundándolos en las cualidades y características socio-culturales y ambientales de una región, “reconectar” actores en una red alimentaria regional y “entrelazar” la producción de alimentos con otras actividades” (Pasquini, 2012).

Como se ha analizado a lo largo del trabajo, durante 25 años la sociedad invirtió importantes recursos y denodados esfuerzos políticos para constituir su primera autoridad metropolitana en la comercialización frutihortícola, el MCBA. El mismo, tomado de un esquema de mercado diseñado en la posguerra, como el Rungis de París, se inaugura cuando esas condiciones de origen habían cambiado. Por otra parte, se implementa cuando estudios especializados cuestionaban que se instituyera un único mercado concentrador en una metrópolis de las características de Buenos Aires. Una vez inaugurado, logró durante los primeros años cumplir en gran medida con su rol de mercado concentrador, hasta que una década más tarde una serie de profundas desregulaciones llevadas a cabo desde la administración menemista desdibujaron profundamente ese rol.

Por lo tanto, desde la vuelta de la democracia cada gobierno le imprimió una orientación distinta al Mercado, en función de su visión ideológica y de las problemáticas de coyuntura que fueron surgiendo respecto de la alimentación y la economía en general. El alfonsinismo se encontró con importantes resistencias para regularizar a los operadores frutihortícolas y posicionó al MCBA como nodo administrador de su plan alimentario nacional, en el marco de un creciente deterioro económico. En un contexto de estabilidad inflacionaria y auge del neoliberalismo, el menemismo pensó en concesionarlo a un ente privado y el delarruismo imaginó la constitución de una gran plataforma alimentaria, algo que va a ser retomado por la administración macrista. El duhaldismo lo pensó jugando un rol mitigador del hambre en el contexto de una profunda crisis socioeconómica y durante el kirchnerismo se desdibujó parte de su rol como mercado frutihortícola y, así como se instituyó una feria minorista de enormes dimensiones y convocatoria, en un contexto de creciente inflación también se pensó en abrir sedes del mercado en otros puntos de la Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires como instrumento para disciplinar a otros formadores de precios (Gran Distribución, híper y supermercadismo). Durante el macrismo se realizaron mejoras de infraestructura y se vislumbró la idea de constituir un hub alimentario similar al de Barcelona traccionado por la inversión privada, pero nada de eso ocurrió. En el último año de su administración estableció nuevas regulaciones horarias de carga y descarga para hacer más eficiente su operatoria. Con la asunción del nuevo gobierno peronista, hay un regreso a la idea de pensar al MCBA como instrumento anti-inflacionario y se pactan acuerdos de precios mayoristas con el fin de incidir en la cadena minorista. Pero en el nuevo e inesperado contexto de la pandemia Covid-19 se establece un protocolo de actuación y se extreman las medidas sanitarias.

Como se ha mencionado, a pesar de la declinación que ha experimentado como autoridad metropolitana desde inicios de los años 90, el MCBA continúa siendo uno de los mercados que mayor volumen de frutas y hortalizas opera a nivel mundial. Es decir, que sigue constituyendo una referencia fundamental en precios y volumen para el mercado nacional y metropolitano. Por lo tanto, sigue presentando un enorme potencial para jugar un rol protagónico a la hora de repensar la gobernanza alimentaria. Como afirman Angellucci y Bellingui (2005: 14), a pesar de constituirse la Corporación como un ente tripartito, donde están representados Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, los resultados de la gestión bajo ese modelo han estado muy lejos de ser óptimos. Concluyen

afirmando que “pareciera, a la luz de los distintos resultados de los modelos de gestión, que no fuera tan importante el modelo en sí, sino el conjunto de planes, programas y acciones específicos que se desee llevar adelante, elaborados con una visión integral de la problemática urbana. Si ese conjunto de variables está convenientemente definida (proyectos concretos analizados con perspectiva metropolitana) el modelo de gestión tendrá que ver con la posibilidad de dar agilidad operativa a las acciones, antes que con un criterio preconceptual sobre un modelo de gestión general capaz de responder mejor a cualquier tipo de prestación de servicios.”.

En los últimos años, mientras se imagina la constitución de una plataforma alimentaria de grandes proporciones y el Estado Nacional avanza en la implementación de instrumentos de regulación y control sobre la frutihorticultura (como la DTV-e y las BPA), el precio de los alimentos continúa siendo prohibitivo para amplias franjas de la población y la vulnerabilidad social muy amplia en diversos sectores productivos primario-intensivos. Ello da cuenta de una gobernabilidad alimentaria metropolitana inacabada y se relaciona, entre otros factores, con que el sector de los alimentos frescos posee importantes distorsiones en la cadena de comercialización minorista, ineficiencias logísticas, carece de precios sostén, de instancias anticíclicas, es vulnerable en extremo a las variaciones del tipo de cambio, registra niveles mínimos o inexistentes de coordinación territorial entre zonas de producción, etc. De esta manera se verifica la fragmentación institucional que caracteriza a la gestión pública y privada como conjunto. Todas las complejidades descriptas deben estar presentes a la hora de idear un nuevo rol de intervención del Mercado.

Bibliografía

- Angelucci, Ricardo y Bellingui, Guillermo (2005).** “La problemática del abasto en la Región Metropolitana y la gestión del Mercado Central de Buenos Aires”. VII Seminario Nacional de la Red de Centros Académicos para el Estudio de Gobiernos Locales. Buenos Aires, 15 y 16 de septiembre.
- Barsky, Andrés (2013).** Gestionando la diversidad del territorio periurbano desde la complejidad de las instituciones estatales. Implementación de políticas públicas para el sostenimiento de la agricultura en los bordes de la Región Metropolitana de Buenos Aires (2000-2013). Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.
- Barsky, Andrés (2018).** “La gestión del Estado en los bordes de la ciudad Análisis de las políticas públicas para el sostenimiento de las producciones agrícolas periurbanas en la Región Metropolitana de Buenos Aires (2000-2017)”. En: Pobreza urbana, vivienda y segregación residencial en América Latina. Daniela Soldano, Alicia Novick, Cristina Cravino y Andrés Barsky (compiladores). Editorial Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires.
- Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas (2009).** “Estrategias conjuntas para un objetivo común”. Documento final del Taller Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas. INTA-SAGPyA-SENASA. Buenos Aires, 24 de noviembre.
- García, Matías, Le Gall, Julie y Miérez, Liliana (2008).** “Comercialización tradicional de hortalizas de la región metropolitana bonaerense”. Boletín Hortícola, 13(40), 8-15, diciembre.
- Ministerio de Agroindustria (2017).** “Mesa Nacional de Periurbanos Orgánicos”. Facundo Soria.
- Pasquini, Margaret (2012).** “Sistemas alimentarios urbanos y desarrollo regional”. Bogotá: Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, Universidad de Los Andes. Disponible en línea: <http://cider.uniandes.edu.co/Noticias/2011_04/10182011_sistemasalimentariosurbanos.asp>
- Pérez Martín, Joaquín y Barsky, Andrés (2019).** “El diseño del abastecimiento alimentario a la gran ciudad durante el Proceso de Reorganización Nacional: El caso del proyecto del Mercado Central de Buenos Aires”. Mundo Agrario, 22(50), Universidad Nacional de La Plata (en prensa).
- SENASA (2008).** “Cronograma gradual de inscripción en el Renspa para los productores agrícolas”. Buenos Aires: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

- SENASA (2019).** Guía para la habilitación de establecimientos de empaques de frutas y hortalizas de producción familiar y cooperativa. Norma comentada y medidas de gradualidad. Buenos Aires, marzo.
- Viteri, María Laura y Competella, Ana Laura (2019).** “Mercados mayoristas. Mucho más que ventas de frutas y hortalizas”. En: Mercados. Diversidad de prácticas comerciales y de consumo. Viteri, María Laura; Moricz, Mariana y Dumrauf, Sergio (compiladores). IPAF, Ediciones INTA, Buenos Aires.

Otras fuentes:

- AAPRESID Institucional, 2/3/18. “AAPRESID presenta un programa para garantizar la sustentabilidad en la producción agropecuaria”.
- Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas, 12/4/17. “Producido por la agricultura familiar. La Comisión Asesora busca un sello de calidad”.
- Infobae, 23/3/19. “De la huerta al vecino, sin químicos ni intermediarios: Crecen los emprendimientos agroecológicos”.
- Infocampo, 6/11/09. “Buenos Aires: El SENASA inauguró las oficinas del Centro Regional Metropolitano”.
- Instituto para la Producción Popular. www.produccionpopular.org.ar
- Inta Noticia, 17/4/18. “El periurbano ya cuenta con una plataforma de innovación”.
- Inta Noticia, 24/5/19. “Normativas para mercados frutihortícolas”
- La Izquierda Diario, 9/4/19. “Inaugurarán en Buenos Aires el primer mercado mayorista agroecológico”. Roberto Andrés.
- La Nación, 12/4/97. “La evolución de los mercados centrales”.
- La Nación, 27/7/00. “Impulsan una reconversión total del Mercado Central”.
- La Nación, 25/9/01. “El Mercado Central, con un nuevo perfil”.
- La Nación, 13/5/17. “Macri relanza el Mercado Central, copiará al de Barcelona”. Pablo Fernández Blanco.
- La Nación, 4/9/19. “Encuesta. Qué pasa con el gasto en alimentos en los hogares argentinos”. Joaquín Pérez Martín.
- Más Cerca es Más Justo (proyecto). www.mascercaesmasjusto.org.ar
- Mercado Central, 25/9/18. “Tips para venir de compras al Mercado Central”.
- Notas Periodismo Popular, 29/3/19. “INTA: Se aprobó el ajuste y cierre de institutos de agricultura familiar”.
- Primer Plano On Line, 6/10/16. “Lanzan en Morón y Hurlingham el plan “El Mercado en tu Barrio”, que el Gobierno Nacional acordó con Duhalde”.

Revista Internos, 20/5/19. “Belisario Alvarez de Toledo y su gestión en el Mercado Central de Buenos Aires”. Camila Alberoni.

Secretaría de Agroindustria (Dirección de Prensa y Comunicación), 8/3/18.

“Reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.

Senasa, 2/7/18. “Mejores alimentos: Incorporarán las BPA al Código Alimentario Argentino”.

Tiempo Argentino, 26/8/18. “Irregularidades y conflictos de intereses provocan la salida del presidente del Mercado Central”, Federico Trofelli.

Gloria amasa
dulzuras
fecunda su horno
de repulgues desnudos

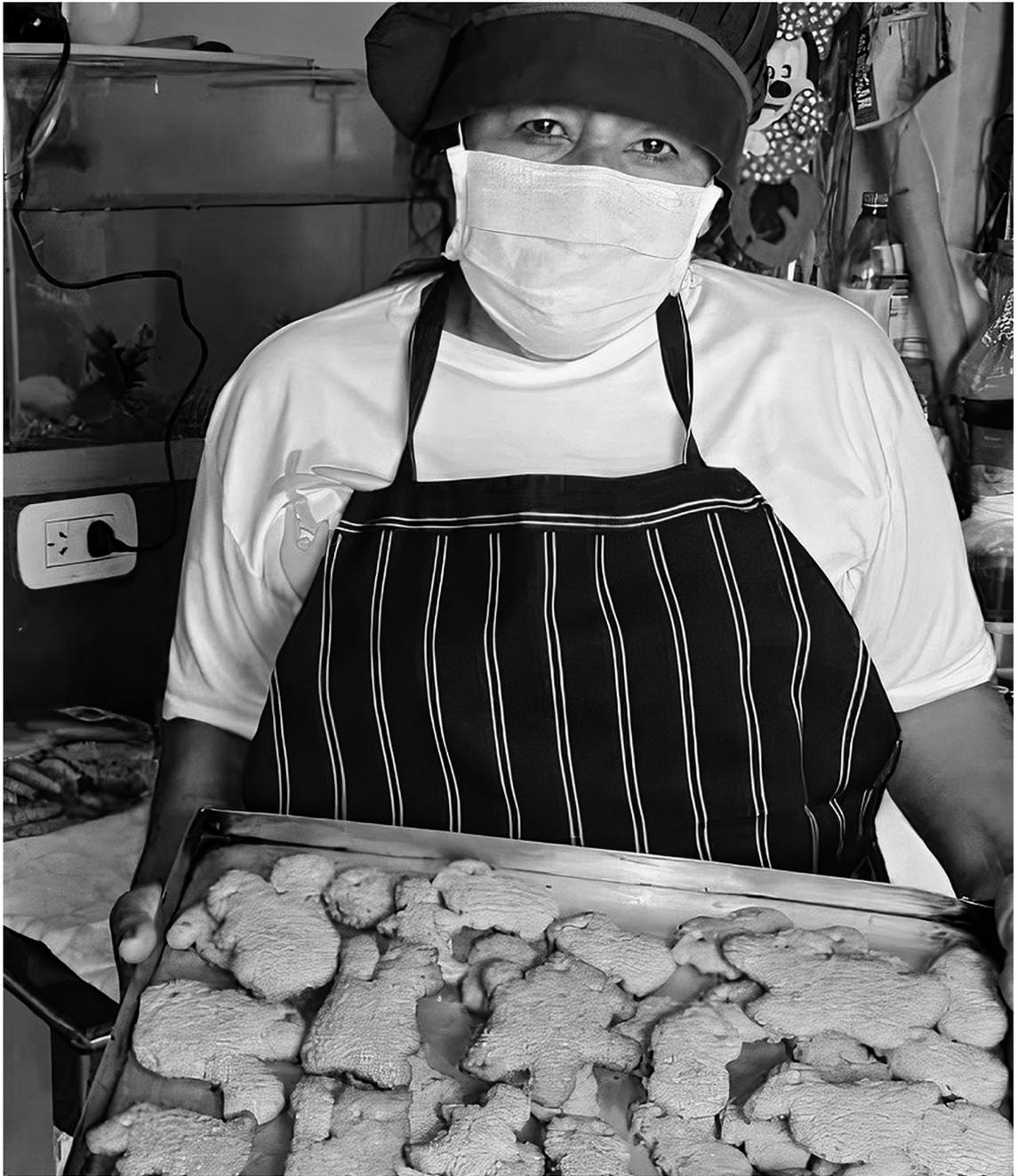
siluetas diversas
flotan dichosas
en eufóricas
asaderas metálicas

furtivas voces nacen
de harinas limpias
el horno le habla
Gloria lo escucha

el milagro sucede
las dulzuras festejan
su existencia
entre bocas rosadas.

Poema: **Susana Novick**
Foto: **Sofía Macarena Torrejón**







CAPÍTULO VI

ACORTANDO LOS TIEMPOS DE LA CIENCIA PARA ACTUAR EN EMERGENCIA. COMERCIALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN CONTEXTO DE PANDEMIA COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL: “LA FERIA CON VOS”

Alejandra Ricca • María Carolina Feito • Noelia Vera⁵⁹

1. INTRODUCCION

Analizamos una experiencia de comercialización alternativa a los mercados convencionales concentradores, para productores de la AF que abarca dos partidos del AMBA (La Matanza e Ituzaingó), desarrollada mediante una estrategia de articulación entre distintos tipos de actores: dos instituciones académicas (la Universidad Nacional de La Matanza - UNLaM y la Universidad Nacional de Hurlingham - UNAHUR); una de intervención e investigación en el ámbito agropecuario (la Estación Experimental Area Metropolitana de Buenos Aires del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - EEA AMBA INTA) y varias organizaciones de productores locales. Se trata del proyecto denominado “*La Feria con Vos*”, que desarrollamos con apoyo del INTA Area Metropolitana de Buenos Aires desde junio 2020 por la necesidad de reconvertir dos ferias que coordinamos hace varios años: “*Del productor al consumidor, la soberanía alimentaria entra a las aulas*” que se desarrolla en el predio de la UNLaM en San Justo, partido de La Matanza, y “*Feria Agroecológica ITU-AMBA*”, así denominada porque es desarrollada por

59. Una primera versión de este trabajo fue presentada en el II Congreso Internacional de Desarrollo Territorial en octubre 2020.

el Municipio de Ituzaingó y el INTA AMBA, en el predio de la mencionada Experimental en el partido de Ituzaingó.

La experiencia que analizamos de comercialización de la agricultura familiar constituye una herramienta para el desarrollo territorial, basada en el enfoque del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción transformación distribución y comercialización de alimentos.

Durante 2019 realizamos un acompañamiento relacionado con la normativa, basado en el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, para prevenir y reducir al mínimo posibles problemas relacionados con la cultura de inocuidad, mediante controles físico químicos, registros, observaciones y sugerencias, con protocolos que permitieron mejorar elaboración, manipulación, etiquetado y exhibición de alimentos en las ferias. Con el objetivo de formalizar los feriantes, realizamos capacitaciones y articulaciones conjuntas con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria —SENASA— y el Instituto Nacional de Alimentos, dependiente de la Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos —INAL/ANMAT, y otros organizadores de ferias que derivaron en la constitución de la Red de Ferias en Universidades en noviembre 2019. Todo esto gracias a la articulación interinstitucional e interdisciplinaria. Este trabajo previo nos permitió diseñar *“La Feria con Vos”*, una experiencia innovadora enmarcada en proyectos de investigación de ambas universidades, con comercialización de canastas de productos elaborados artesanalmente que distribuimos mediante nodos donde los consumidores las retiran en varios puntos de zona oeste del AMBA y entregas a domicilio en Capital. El armado participativo de canastas permitió repartir equitativamente la rentabilidad de los feriantes, presentando variedad de productos y precios.

El aprendizaje conjunto desarrollo lazos solidarios entre productores y consumidores, mejorando acceso a una alimentación de calidad, incrementando el agregado de valor, en un proyecto de desarrollo territorial participativo e inclusivo.

Nuestro objetivo es mostrar la importancia de los canales alternativos de comercialización de la Agricultura Familiar como herramienta para el desarrollo rural de Argentina, especialmente a nivel local, mostrando la importancia de este sector agropecuario para la economía nacional, como actor productivo y en su rol de proveedor de alimentos para el mercado interno. Utilizamos metodología cualitativa con trabajo de campo etnográfico, realizado entre marzo y noviembre de 2019, basado en entrevistas a los feriantes, técnicos extensionistas, visitantes y consumidores, así como observaciones, durante varias ediciones de

las Ferias y participando en reuniones de la asamblea de feriantes hasta marzo de 2020. Realizamos análisis de datos secundarios de fuentes bibliográficas y estadísticas nacionales sobre agricultura familiar y ferias en Argentina.

2. EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL

La alimentación es un Derecho Humano reconocido internacionalmente desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales redefinió el concepto de derecho a la alimentación con el fin de que no se centrara sólo en garantizar la “ausencia de hambre”, sino que pusiera su enfoque en el derecho de todas las personas a una “alimentación adecuada”, haciendo referencia a la importancia de la disponibilidad de alimentos en calidad y cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales de los individuos, sin sustancias nocivas y culturalmente aceptables. Diversos organismos supranacionales (FAO, OMS) coinciden en que el hambre, el sobrepeso y la obesidad global forman parte de un mismo problema: el sistema alimentario actual; según las últimas estimaciones de la FAO, más de 2000 millones de personas carecen de acceso a alimentos sanos, inocuos, nutritivos y suficientes, mientras que otros 2000 millones de adultos padecen obesidad o sobrepeso. En los niños, el panorama es aún más preocupante ya que en el año 2018 se calculó que el sobrepeso afectaba a 40 millones de niños menores de cinco años (FAO 2017). Esto constituye una clara violación al derecho humano a una alimentación adecuada.

Una de las mayores problemáticas vinculadas a la alimentación actual es el cambio en el patrón alimentario de la población como consecuencia de cambios culturales y en la accesibilidad a los alimentos (Zapata, Roviroso, & Carmuega, 2016) propiciadas por la proliferación de productos industrializados, saturados de azúcar, harinas refinadas y grasas, obtenidos bajo producción en monocultivo intensivo, que generan dudas acerca de la sustentabilidad de la alimentación. Estas tecnologías de alto impacto sobre el medio ambiente producen el corrimiento de la frontera agrícola sobre superficies de bosque nativo deforestado, la contaminación de suelos, cursos de agua y pérdida de la biodiversidad, entre otros (Duchin, 2008; OMS & FAO, 2015 y FAO & OPS, 2017). Se registra, en este sentido, la preocupación por la escalada del uso de agroquímicos y la contaminación del ambiente con consecuencias para las personas e impactos

sobre la salud pública (Carneiro et al, 2015). La FAO sostiene que es la agricultura familiar la que puede terminar con esta situación, por lo tanto el rol de los productores familiares adquiere gran importancia.⁶⁰ El 29 de mayo de 2019 la FAO realizó el lanzamiento del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (UNDF 2019-2028, por sigla en inglés) y un Plan de Acción Mundial para impulsar el apoyo a los agricultores familiares, para crear un entorno propicio que fortalezca la posición de la AF y maximice las contribuciones de los AF a la seguridad alimentaria y la nutrición, ya que producen el 80% de los alimentos del mundo⁶¹. Sin embargo, ellos viven en situaciones de precariedad extremas, con sus necesidades básicas insatisfechas, que los llevan a un éxodo del campo a la ciudad, y alientan a sus hijos a no continuar la actividad (Vera, 2019).

Al igual que en el resto del mundo, en Argentina la alimentación está en una crisis de sustentabilidad, de equidad y de comensalidad (Aguirre, Díaz Cordova, & Polischer, 2015). Desde los sectores expertos en salud se comienzan a implementar enfoques para formular directrices alimentarias que priorizan los alimentos mínimamente procesados, mientras la comunidad se interesa crecientemente en el origen de los alimentos que llegan a su mesa. En este contexto, el rol de la AF resulta fundamental para facilitar el acceso de la población a alimentos mínimamente procesados, de alta calidad nutricional y a un costo accesible; abonando así a la consecución del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada.

En septiembre 2019, el Congreso aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria Nacional hasta 2022, aumentando un 50% las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición. La importante, compleja y con tantas aristas, cuestión alimentaria, es una cuestión de Estado: es innegable su rol en políticas que permitan el acceso de la totalidad de la población a los alimentos sanos, a precio justo, así como reconocer el ineludible el rol que cumple la AF como proveedor de alimentos sanos, de calidad, y en mercados de proximidad, por ello la importancia de los canales cortos de

60. Declaraciones de la Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, el 29 de mayo de 2019 en Roma, en un diálogo internacional coorganizado por la FAO y el FIDA para debatir los desafíos y oportunidades de la agricultura familiar.

61. Declaraciones del Director General de la FAO, José Graziano da Silva, el 29 de mayo de 2019 en Roma.

comercialización (Caracciolo, 2015 y 2019; Viteri, Moricz y Dumrauf, 2019). En Argentina, la normativa vinculada a la producción y comercialización de alimentos está básicamente destinada a reglamentar la actividad realizada por aquellos sectores más concentrados de la cadena, generalmente vinculados al modelo del “agronegocio” y esquemas similares. Estas normativas no contemplan las características propias de los productores familiares, lo cual se transforma en un obstáculo importante para el desarrollo del sector (González, E.; C. Gómez y M. Moricz, 2013).

De acuerdo con lo señalado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, existe *seguridad alimentaria* cuando toda la población, y en todo momento, tiene acceso físico, social y económico a alimentos seguros y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias, para una vida activa y saludable. Es decir, ésta depende de que exista disponibilidad, acceso y una adecuada utilización biológica de los alimentos. *Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN)* “es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo” .

El concepto de *soberanía alimentaria* fue utilizado públicamente por primera vez en el año 1996, en la Cumbre Mundial ya mencionada, y se desarrolló con el tiempo, definiéndose en el año 2002 como: “el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propia políticas agrícolas; laborales; pesqueras; alimentarias y de tierra; de forma que sean ecológica, social, económica, y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas”. Lo que significa que “todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada. Y a los recursos para la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.” A través de la propuesta de Soberanía Alimentaria se puede conseguir un auténtico derecho a la alimentación, logrando producir alimentos de manera sostenible. La Soberanía Alimentaria defiende el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Sitúa a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de e incluye a las futuras generaciones. Ofrece una estrategia para resistir y dismantelar el comercio libre y corporativo y el

régimen alimentario actual, para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca hacia su gestión por productores y productoras locales. La Soberanía Alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sustentabilidad ambiental, social y económica. La Soberanía Alimentaria promueve el comercio transparente, que garantice ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición.

Por otra parte, el enfoque territorial privilegia el territorio local, como la unidad donde resulta más plausible la instalación de procesos de desarrollo sostenible (Rodríguez Bilella y Tapella, 2008). El concepto de “territorio” es instrumento privilegiado de la comprensión de una realidad compleja, integrando en una totalidad condicionamientos estructurales y acciones de los actores como sujetos competentes capaces de producir innovaciones adaptativas (Albadaejo y Bustos Cara, 2004; Manzanal, 2006).

3. COMERCIALIZACIÓN DE LA AF

Podemos considerar la comercialización, siguiendo a Caracciolo (2016, p. 43) como el “proceso que va de la tranquera del productor hasta el comprador”. La institucionalidad de apoyo a los procesos comerciales debería considerar un enfoque de tramas de valor, a fin de que las unidades económicas de la AF puedan desarrollar una gestión comercial que les permita generar valor agregado y satisfacer las necesidades de sus integrantes, al tiempo que ampliar sus emprendimientos en los mercados de manera sostenible (Caracciolo, 2016).

Para implementar procesos de desarrollo rural, son importantes las tramas institucionales conformadas por organismos públicos y privados dirigidas a organizaciones de pequeños productores para favorecer su inclusión económica y social. Estas tramas en general promueven participación política, posicionamiento en la cadena productiva, acceso a recursos (tierra y agua), gestión y ejecución de proyectos de infraestructura, mejoramiento de la producción.

Por otro lado, los modelos informales de vinculación con los mercados son comunes pero poco comprendidos y no considerados en el apoyo de intervenciones para el desarrollo debido a su carácter informal y fuerte sesgo en contra de los comerciantes. Estos modelos tienen información y experiencias importantes

para generar vínculos de mercados sostenibles y prestación de servicios, sobre todo allí donde la organización formal del agricultor es débil (Vorley et al., citado en Caracciolo, 2015).

La importante, compleja y con tantas aristas, cuestión alimentaria, es una cuestión de Estado: es innegable su rol en políticas que permitan el acceso de la totalidad de la población a los alimentos sanos, a precio justo, así como reconocer el ineludible rol que cumple la AF como proveedor de alimentos sanos, de calidad, y en mercados de proximidad, por ello la importancia de las ferias en general y las realizadas en universidades en particular (Ricca, Feito y Vera, 2021).

Los conceptos de cadenas cortas y redes agroalimentarias otorgan herramientas para repensar los mercados agroalimentarios y las relaciones entre consumidores y productores. Se destaca la importancia de la agricultura familiar en el proceso de creación de las cadenas cortas de comercialización, dado que los consumidores se benefician con las ferias orgánicas y agroecológicas, como forma de incentivar y valorar a los agricultores familiares al tiempo que los consumidores tienen la garantía de acceso a productos saludables. Las discusiones sobre las redes agroalimentarias, estimulan y difunden la idea de que el consumo de los alimentos sanos y producidos de forma sostenible pasa a tener más mercado, lo que acerca al agricultor y al consumidor. Se requieren nuevas estrategias de abastecimiento y cambiar la relación con los consumidores, lo que puede ser proporcionado por las cadenas cortas de comercialización de alimentos. El poder público, el mercado y la sociedad civil son protagonistas importantes en este proceso de reinventar modelos de comercialización. Cada vez más los consumidores quieren saber de dónde vienen los alimentos consumidos y de qué forma se producen. Esto también valora la producción de la agricultura familiar. Las cadenas cortas tienen un rol indispensable en la forma de organización de los mercados y permiten mejorar tanto la renta de los productores como las condiciones de alimentación de la población. También constituyen espacios de organización de la producción y comercialización de la agricultura familiar y otorgan alternativas al desarrollo rural (Gazolla & Schneider, 2017).

Estos canales cortos de comercialización tienen las siguientes ventajas: generación de dinamización de las economías locales conectando productores y consumidores, ya que el dinero permanece en el circuito local; permite la participación de mujeres porque se desarrollan en espacios de proximidad, reducen el consumo de energía por la cercanía de los productos al espacio del mercado. Todo esto conlleva que el desarrollo local contribuya al mismo

tiempo, al desarrollo nacional. Las dificultades de la AF para insertarse en los mercados, dada su heterogeneidad y desigualdades existentes en ellos, puede deberse a causas productivas, costos, logística, calidad, aspectos bromatológicos, impositivos, institucionales, financieros, etc. Si consideramos los mercados para la AF no debemos descuidar otros tipos de intercambios entre agentes económicos como la reciprocidad, distribución, etc. Si bien los mercados son centrales en economías complejas como la argentina, es posible pensar en otros mercados más justos y menos concentrados (Caracciolo, 2016) y que fomenten la soberanía alimentaria como eje de una estrategia de desarrollo que pretenda ser sostenible.

En el mundo de los alimentos sabemos que por las manos de los elaboradores pasa el equilibrio existente entre productos elaborados de calidad e inocuos y productos potenciales de convertirse en riesgosos que pueden comprometer la salud y calidad de vida. Por lo que entender y concientizar sobre la *Cultura de Inocuidad*, como una forma complementaria al abordaje tradicional de esta problemática, permite superar el paradigma de la regulación, fiscalización y control de los procesos como único abordaje posible de un proceso de garantía de alimentos seguros, involucrando al conjunto de la sociedad (hábitos, costumbres, tradiciones, responsabilidad social, capacitaciones, pruebas (Frank Yiannas, 2009).

Siguiendo con este enfoque, una mirada hacia el comportamiento y los hábitos, pero aplicado a los pequeños productores, venta en ferias, mercados, se nos plantea como un gran desafío. La creatividad e innovación conducen al cambio y este puede llevar a lograr mitigar riesgos. El acompañamiento técnico especializado debe ser continuo.

4. LAS FERIAS BAJO ANÁLISIS

La feria de UNLaM surge de la articulación existente desde 2009 entre UNLaM y EEA AMBA INTA, con actividades conjuntas de relevamientos en territorio basados en investigaciones y extensión rural⁶². En 2015 se aprobó la propuesta en Rectorado, concretándose hasta noviembre 2019 diecisiete

62. Esta feria es parte de las actividades desarrolladas en el marco del PICT 1389/2015 cuyos resultados presenta este libro.

ediciones de la Feria en el predio de San Justo de la Universidad. Participan unos treinta feriantes, con productos como: verduras, plantas de vivero, cactus, yerba, hongos frescos y secos, blends de té, pastas caseras, arándanos y derivados, mermeladas y dulces, miel y derivados, panificados, patio de comidas, quiosco saludable, hilados, artesanías con objetos naturales, aromáticas, aceites esenciales. Se realizaron numerosas reuniones entre técnicos de INTA AMBA y docentes investigadores de UNLaM, e internas entre autoridades UNLaM y equipo organizador, así como asambleas de productores/elaboradores participantes. Se constituyó un Reglamento de funcionamiento; se desarrolló una estrategia de difusión, talleres, una encuesta a consumidores y publicaciones científicas, conformándose una entidad colectiva superadora de las diferencias entre organizaciones participantes (Feito, 2020). Se realizó una encuesta cuantitativa que determinó los hábitos alimentarios de los consumidores de la feria (Jager et al, 2018)

La Feria de ITU AMBA surge en el marco de un proyecto “Feria de emprendedores y pequeños productores locales” mediante una articulación institucional entre EEA AMBA, INTA y Gobierno Municipal de Ituzaingó desde el año 2014, como una alternativa de comercialización diferenciada para la población local, reafirmando el compromiso social en forma integral, participativa y con responsabilidad hacia el comercio justo.

Hasta el comienzo de la cuarentena en marzo 2020, era un espacio de comercialización semanal en un lugar público, de integración y fortalecimiento de Pequeños Emprendimientos Productivos locales o asociativos de pequeña escala, acompañado por el estado, mediante el MINAGRO, INTA AMBA y Municipio Ituzaingó, que funcionaba en el predio de la Experimental en el partido de Ituzaingó. Esta feria transmitió una cosmovisión de AF Urbana desde sus pilares: producción de hortalizas agroecológicas de estación, plantas en maceta de aromáticas y hortícolas, autoconsumo, comercialización en algunos casos de parte del excedente y transformación, valor agregado de lo producido. Surge así la transformación de la materia prima de la huerta en alimentos saludables al alcance de todos.

Ante la aparición de un caso de intoxicación por botulismo en la CABA en mayo de 2019, los organizadores de ferias en universidades comenzaron a consultar a los organismos nacionales de control de alimentos: el Instituto Nacional de Alimentos dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (INAL-ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), derivando reuniones que culminaron

en la constitución, en noviembre de 2019, de la Red de Ferias en Universidades, con varias Altas Casas de Estudios participantes, sumándose instituciones académicas, junto al INAL, la Coordinación Nacional para Agricultura Familiar del SENASA (SENAF) y la EEA INTA AMBA, con la finalidad de potenciar las acciones aprovechando capacidades institucionales, en una articulación interdisciplinaria e interinstitucional.

La estrategia general de la propuesta consistió en trabajar metodológicamente tomando elementos del enfoque IAP (Investigación-acción participativa). Esto incluyó la articulación con las capacidades instaladas en EEA AMBA y la UNLaM y el enfoque de análisis de riesgo. Entre octubre y diciembre de 2019 se realizaron una serie de capacitaciones específicas complementarias a los cursos de manipulación de alimentos en temas como: elaboración de conservas seguras, botulismo, registros, información fiscal y manejo de instrumental. Esto permitió acompañamiento a productores y elaboradores en implementar mejoras, orientado hacia el control preventivo de los riesgos en procesos de elaboración, exhibición y comercialización.

Aplicamos una metodología cuali y cuantitativa, con desarrollo de trabajo de campo basado en reuniones de feriantes y equipo técnico realizadas en la universidad y el INTA; en entrevistas a los feriantes, observaciones visuales generales y específicas de los puestos. También se realizó observación participante en el marco del desarrollo de la feria, para relevar interacción entre feriantes y clientes, las actitudes y tipos de consultas de los consumidores que se acercaban a los puestos. Se realizaron monitoreos bromatológicos en cumplimiento con la normativa vigente según el Código Alimentario Argentino (CAA), en productos al azar durante las ferias, que derivaron en recomendaciones, registros de observaciones y sugerencias con enfoques basados en el sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC) que puedan reducir al mínimo la aparición de problemas relacionados con la inocuidad de los alimentos con devolución personalizada a los feriantes. (Feito, Vera y Ricca, 2019).

5. “LA FERIA CON VOS”

En marzo de 2020, se declara la pandemia mundial por COVID-19 y en Argentina comienza una cuarentena que evidenció la importancia de los circuitos cortos de comercialización. A partir de la suspensión de las ferias locales (ITU AMBA, FERIA UNLaM, ferias francas municipales, de cercanía, populares y de-

productores/artesanos), dados los antecedentes previos del equipo conformado y teniendo en cuenta los protocolos según normativa vigente por COVID-19 y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), el equipo técnico convocó a feriantes de ITU AMBA y de otras ferias, en el marco de un Proyecto Piloto contando con el apoyo institucional de la EEA AMBA de INTA. Surge así *“La Feria con vos”* para la comercialización de canastas con productos diferenciados a través de nodos de consumo, la logística, comunicación y difusión de productos artesanales de las organizaciones de la agricultura familiar. La fecha de lanzamiento fue el 4 de junio pasado. Acciones concretas tales como acompañamiento técnico, acciones correctivas, mejoras en manipulación, presentación y exhibición de productos, sistematización de información, aprendizaje en difusión y manejo de información en redes sociales, en uso de herramientas informáticas, capacitaciones online variadas, entrega puerta a puerta (“delivery”) son llevadas a cabo de manera rutinaria y diaria.

Se llevaron a cabo cinco entregas quincenales de ocho canastas diferenciadas en cuanto a cantidad y variedad de productos elaborados y costos que fueron desde los 320 hasta los 1.660 pesos. En fechas festivas (25 de mayo, 9 de julio, Día del Niño), se acompañó con preparaciones específicas (pastelitos, loco, empanadas, dulces). Así, en las diferentes propuestas se podían encontrar, entre otros productos, miel, quesos saborizados, aceite de oliva, distintos tipos de panificados, chocolate, vinagre, especias, yerba estacionada, prepizzas, conservas, tortas y mermeladas, como también productos congelados, que incluyeron empanadas, chipa y viandas veganas. Las canastas se distribuyeron en bolsas con logo, específicamente encargadas, en cinco nodos ubicados en Zona Oeste del periurbano bonaerense (San Justo, Hurlingham, Isidro Casanova, Ituzaingó, Villa Luzuriaga), entre los cuales se incluyó, a través del Consejo Local Asesor de la Agencia Ituzaingó de la EEA AMBA INTA, la articulación con la Tecnicatura Superior en Economía Social para el Desarrollo Local del terciario ISFD46 de La Matanza, mediante la participación de estudiantes que ofrecieron sus domicilios particulares como nodos de distribución de las canastas, para la realización de sus prácticas, y que a modo de conclusión realizaron un análisis FODA (Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas) sobre la experiencia llevada a cabo en la Feria con Vos.

Para asegurar la rentabilidad equitativa entre feriantes, se logró distribuir la misma cantidad de productos en la totalidad de las canastas ofrecidas y vendidas, que a lo largo de las entregas se mantuvieron entre veinte y veinticinco canastas totales. Esto permitió generar un ingreso, dar a conocer los productos

artesanales como una categoría específica ponderando a los feriantes, e ingresar en mercados de proximidad (dado que los consumidores no podían abandonar sus hogares por el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio —ASPO—, excepto para compras de cercanía).

Destacamos que esta modalidad surgió y pudo llevarse a cabo dado los antecedentes de articulación interinstitucional e interdisciplinaria del equipo técnico, con el trabajo previo ya comentado, que se venía realizando con las ferias ITU AMBA y UNLaM, en prevención del riesgo e inocuidad de los alimentos.

Aún quedan acciones pendientes (como la de constituir una organización asociativa, o presentarse a concurso de proyectos de investigación/extensión), que requieren estructuras cada vez más formales para hacer frente a las nuevos desafíos y paradigmas culturales.

Las transformaciones de la comercialización en el contexto de pandemia evidenciaron la oportunidad de llegar del productor al consumidor sin presencialismo y con productos elaborados artesanalmente.

La producción de alimentos se encuadra en un contexto normativo que tiene por objeto garantizar la calidad e inocuidad de los productos que llegan a los consumidores. En ese marco, no se han incorporado aún en forma suficiente las especificaciones propias de la producción que se realiza a pequeña escala, cuyo objetivo principal es en muchos casos la provisión de alimentos para autoconsumo y la venta de sus excedentes. Elaborar de manera artesanal productos con valor agregado, transformándose en productos diferenciados, tratando de superar las reglamentaciones distritales, son limitantes sin la posibilidad de instrumentar normas que se adecuen a la situación de los productos sin descuidar la salud de los consumidores, basadas en el reconocimiento de la producción artesanal como una categoría específica y/o la adecuación de las normativas municipales y provinciales para determinados productos que actualmente no se encuentran fácilmente en el mercado (como ser la fruta deshidratada y las hierbas aromáticas).

En este entorno cambiante se requiere de un entendimiento desde la cultura organizacional. Para mejorar el desempeño en inocuidad alimentaria de un feriante/emprendedor, es necesario abordar el riesgo tempranamente y considerando elementos como: entorno, materias primas, establecimiento, lugar de elaboración, lugar de exposición, transporte, hábitos, además de brindar retroalimentación y orientación (tanto positiva como negativa) basándose en los resultados de los análisis cuali y cuantitativos aplicados a los productos ofrecidos. Temperaturas incorrectas de pasteurización, conservación, cocción inadecuada,

equipos contaminados e higiene personal deficiente, cambios de escalas, mayor producción en menos tiempo, son algunos de los factores contribuyentes más comunes de los brotes de enfermedades de transmisión alimentaria.

6. CONCLUSIONES

Las ferias locales constituyeron históricamente una de las estrategias de comercialización más efectivas para los pequeños productores. Su funcionamiento constituye una manifestación de “*circuitos cortos de comercialización*”, caracterizados por una relación directa entre el productor o fabricante y consumidores, sin intermediarios o a través de un intermediario representado por otra persona vinculada por relaciones de proximidad y en términos colaborativos y solidarios. Esta forma de comercialización favorece un proceso de desarrollo territorial sustentable, al propiciar lazos de solidaridad entre productores y consumidores. La variedad de la oferta y la mayor diversidad de producciones que tienen cabida en las ferias y mercados locales, facilita acceder a una alimentación de mayor calidad (con mayor variedad, mejores cualidades nutritivas, más saludable y a precios justos). Al ser los tramos más cortos en la cadena producción— comercialización, mejoran las condiciones para identificar demandas y posibilidad de readecuar la oferta sobre la base de los requerimientos del consumidor, realimentando posibilidades de aumentar diversidad de las producciones y rescatar productos y saberes. Al acortarse las distancias espaciales entre producción y consumo, disminuyen los costos de transporte y al incrementarse oportunidades para el agregado de valor local, la renta de los productores aumenta incidiendo en la economía del territorio local. La generalización de estas experiencias repercute en la creación y consolidación de lazos sociales y sentido de pertenencia y valorización de la comunidad local.

La relevancia de la AF, sus potencialidades actuales y futuras para el sostenimiento de un proyecto de desarrollo territorial con inclusión social y su papel destacado en la provisión de alimentos sanos para el conjunto de la población, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria, constituyen motivos suficientes para que las políticas públicas difundan y valoricen la comercialización alternativa, con realización de ferias periódicas en distintas instituciones.

Este sector productivo, a pesar de su relativa informalidad, debe ser considerado por su aporte económico al desarrollo nacional y requiere políticas diferenciales que consideren sus particulares características. Los productos

elaborados por este sector tienen un intrínseco valor cultural y reconocimiento comercial, son ampliamente demandados por los consumidores. Constituyen canales alternativos de comercialización dentro del mercado interno, aportan a soberanía y seguridad alimentaria, promueven mejoras en los sistemas productivos y alternativas para el agregado de valor en origen y contribuyen al desarrollo rural de los territorios.

En el contexto de pandemia COVID-19, se desarrolló un aprendizaje y experiencias conjuntas, tanto para feriantes como para el equipo técnico facilitador. Los feriantes se empoderaron en un contexto de alta incertidumbre, mediante el fortalecimiento del asociativismo. También se fortalecieron las cadenas de valor, dinamizando tramas de relaciones, con incorporación de la dimensión pedagógica.

Como resultados, se revalorizaron los canales cortos de comercialización tradicional con nuevas estrategias que se puedan replicar en otras experiencias; surgió una nueva concepción de la importancia del asociativismo (en la feria era venta individual), de cultura de inocuidad y se generó un proceso de desarrollo territorial local participativo e inclusivo.

Bibliografía

- Albaladejo, C. y Bustos Cara R. (2004).** Desarrollo Local y Nuevas Ruralidades en Argentina. Bahía Blanca: Ediuns, Co-Edición UNS-IRD- INRA- UTM. 456 pag.
- Bilella, P. y E. Tapella (2008).** “Transformaciones globales, modos de vida y desarrollo rural”. Pp 3-33 en Transformaciones globales y territorios. Desarrollo rural en Argentina. Experiencias y aprendizajes. Buenos Aires: La Colmena.
- Caracciolo, M. (2015).** “Situación de la institucionalidad de apoyo a la innovación comercial y de los procesos de gestión comercial de la agricultura familiar en la Argentina”. Bs As: IICA. Disponible en: <<http://www.iica.int>>. Acceso en: 12 de septiembre 2017.
- Caracciolo, M. (2016)** “Soberanía alimentaria y mercados alternativos”. Monografía. Programa en Economía Solidaria. Escuela de Economía y Negocios. Universidad Nacional de Gral San Martín/Centro de Estudios y Formación en Economía Social y Solidaria La Yumba, Cooperativa de Consumo Ltda.
- Caracciolo, M. (2019).** “Espacios comerciales alternativos de la agricultura familiar: criterios para su análisis y diferenciación”. En: Viteri, L.; Moricz, M. y Dumrauf, S. (2019). ”Mercados: diversidad de prácticas comerciales y de consumo”. Ed INTA, Bs As.
- Carneiro, F. F. (Org. ., Augusto, L. G. da S., Rigotto, R. M., Friedrich, K., & Búrigo, A. C. (2015).** Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO. <https://doi.org/10.1016/B978-84-458-2066-7.00003-3>
- Duchin, F. (2008).** Sustainable Consumption of Food: A Framework for Analyzing Scenarios about Changes in Diets. Journal of Industrial Ecology, 9(1–2), 99–114. <https://doi.org/10.1162/1088198054084707>
- Carneiro, F. F. (Org. ., Augusto, L. G. da S., Rigotto, R. M., Friedrich, K., & Búrigo, A. C. (2015).** Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO. <https://doi.org/10.1016/B978-84-458-2066-7.00003-3>
- FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2017).** El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria. Roma, FAO.
- Feito, M. C. (2020).** Comercialización de la agricultura familiar para el desarrollo rural: feria de la Universidad Nacional de La Matanza. Revista de Economía e Sociología Rural, 58(1), e187384.

- Feito, M.C; Vera, N. y Ricca, A. (2019).** Control de alimentos en ferias de UNLaM e INTA AMBA. Primer Congreso Nacional de Alimentos ANMAT, diciembre 2019.
- Frank Yiannas, (2009).** Food Safety Culture. Creating a Behavior-Based Food Safety Management System
- Gazolla, M., & Schneider, S. (Orgs.). (2017).** Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas: negócios e mercados da agricultura familiar. Porto Alegre: UFRGS Editora.
- Jager, M; Feito, MC; Pelizzari, C; Mateu, S., Battista, S. y Solari, C (2018).** Hábitos de consumo: el caso de la Feria de Productores de la Universidad Nacional de La Matanza". En: Revista Realidad Económica, año 47, N 314, pp 115-143.
- Manzanal, M. (2006).** "Regiones, territorios e institucionalidad del desarrollo rural". En Manzanal M, Neiman G y Latuada M (coord), Desarrollo rural. Organizaciones, instituciones y territorio. Buenos Aires, Edit. CICCUS.
- OMS, & FAO. (2015).** Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2). Informe de la Secretaría mixta FAO/OMS de la Conferencia., 1-76. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4436s.pdf>
- Ricca, A.; Feito, MC. y Vera, N. (2021)** Comercialización de la agricultura familiar en Argentina como herramienta para el desarrollo territorial: las ferias ITU-AMBA y UNLaM. En: Eva Menardi (comp.) II Congreso Internacional de Desarrollo Territorial. Nuevos desafíos en la construcción de los territorios. Los desarrollos en América Latina. EduTecne, Bs As. ISBN 978-987-4998-60-6. Libro digital PDF. Disponible en: <file:///C:/Users/Acer/Documents/EVENTOS%202020/CONGRESO%20DESARROLLO%20TERRITORIAL%20rafaela/libro%20congreso%20DT%202020.pdf>. Pp. 645-651.
- Vera, N. (2019).** Situación nutricional y estado de seguridad alimentaria en productores hortícolas agroecológicos del periurbano bonaerense. En: XI Jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales. FACE-UBA, Buenos Aires. Retrieved from <https://www.ciea.com.ar/web/CIEA2019/CIEA2019.htm>
- Viteri, L.; Moricz, M. y Dumrauf, S. (2019).** "Mercados: diversidad de prácticas comerciales y de consumo". Ed INTA, Bs As.
- Zapata, M. E., Roviroso, A., & Carmuega, E. (2016).** La mesa argentina en las últimas dos décadas (CESNI). Buenos Aires. Retrieved from <http://www.cesni.org.ar/archivos/biblioteca/LA-MESA-ARGENTINA-EN-LAS-> Rodríguez

LOS/LAS AUTORES/AS

María Abelina Acosta Felquer: Profesora (2006) y Licenciada en Geografía (2011) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Especialista en Desarrollo Rural (2016) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctora en Geografía (2019) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Becaria Postdoctoral del CONICET (2019-2021). Profesora titular de la Universidad en la Cuenca del Plata (2017-2019). Profesora adscripta en el Seminario Recursos Naturales y Política Ambiental (2012-2014) de la Universidad Nacional La Plata (UNLP). Profesora en el nivel medio de enseñanza (2007-actualidad). Investigadora y colaboradora en proyectos de investigación en la UNLP (2010-2019) y Universidad Nacional de La Matanza (desde 2015). Abocada al estudio de problemáticas ambientales, transformaciones territoriales, políticas públicas y desarrollo rural. Email: abelina.acosta@yahoo.com.ar

Andrés Barsky: Profesor Universitario en Geografía y Licenciado en Geografía graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1992 y 1997. En 1997 obtuvo la Especialización Internacional en “Integración y Políticas Agropecuarias en el Mercosur”, otorgada por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), la Universidad Federal de Santa María (UFSM, Brasil) y la Universidad de la República (Udelar, Uruguay). En 2002 egresó de la Especialización “Desarrollo Local en Áreas Metropolitanas” en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). En 2003, obtuvo el título de “Maestría en Estudios Sociales Agrarios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y en 2013 obtuvo el título de Doctor en Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB, Cataluña). Se desempeña desde 1994 como profesor adjunto ordinario en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), como investigador en el Instituto del Conurbano de la UNGS desde 2002, como profesor de la Maestría en Estudios Agrarios de FLACSO desde 2013 y de la Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de

Agronomía de la UBA desde 2016. Ha sido coordinador del Departamento de Geografía y Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) entre 2009 y 2014, coordinador de Investigación del Instituto del Conurbano de la UNGS entre 2014 y 2016 y del Programa de Posgrado de Estudios Urbanos (PEU) de la UNGS entre 2016 y 2018. Desde diciembre de 2019 se desempeña como coordinador de Investigación del Área de Ecología, en esa misma institución. Investigador de trayectoria en las temáticas de agricultura periurbana, ordenamiento territorial del borde periurbano y abasto alimentario. Email: andresbarsky@yahoo.com.ar

Susana Carmen Battista: Licenciada en Sociología. Universidad del Salvador (1974) Diploma Superior en Ciencias Sociales, Orientación en Sociología. FLACSO, Argentina. Especialización en Desarrollo Local, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Centro Internacional de Formación, Turín (Italia). Curso y Diploma en Economía Brasileña. Universidad Nacional de General San Martín. Instituto de Estudios Brasileños. Buenos Aires. Docente – Docente Investigadora en UNLaM entre 1999 y 2019. Fue Profesora Titular Interina de Psicología de las Organizaciones y Sociología en el Departamento de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Matanza. Fue representante por la Universidad Nacional de La Matanza ante la REDVITEC e integrante del Comité Ejecutivo entre 2014 y 2015. Fue representante Alterna ante el Foro de Universidades para la Agricultura Familiar hasta el año 2018. Email: susana.battista@gmail.com

María Carolina Feito: Licenciada (1990) y Doctora (1999) en Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires; Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Argentina (2004). Docente de la Escuela para Graduados de la FAUBA (2006). Docente de la Universidad Nacional de La Matanza (2011). Docente Invitada en la Universidad Autónoma de Chile (2006-2018). Miembro de: Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina (1990); Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar Región Pampeana (2009); Núcleo Argentino de Antropología Rural (2009); Asociación Iberoamericana de Antropólogos en Red (2014); Grupo de Investigadores en Políticas Públicas para Agricultura Familiar del MERCOSUR (2017). Especialista en temas sociales rurales: mercado de trabajo; migraciones; procesos de trabajo; comercialización; sistemas agroalimentarios; políticas de desarrollo rural; agricultura familiar; sistema agroalimentario. Email: carofeito@gmail.com

Beatriz Liliana Giobellina: Arquitecta, FAU-UNT, Argentina (1983). Diploma de Psicóloga Social, 1ª Escuela de Psicología Social de Tucumán, Dr. Enrique Pichon Riviêre (1990-1991); Especialista Internacional en Ordenación del Territorio y el Medioambiente, UPV, España, y Universidad Nacional Tucumán, Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU-UNT) (1995). Master Universitario en Dirección de la Innovación Empresarial, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. INEDE–Instituto de Estudios de la Empresa (2010). Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia en Régimen Jurídico, Ordenación del Territorio, el Medio Ambiente y el Urbanismo (2011). Investigadora de INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) (2013). Creación y Coordinación del Observatorio O-AUPA (Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología) de Córdoba, con sede en AER Córdoba de INTA (2014). Profesora Adjunta Arquitectura IIIC, FAUD-UNC (Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) (2012) y Profesora Titular (interina) 2016-2019. Directora y codirectora de tesis de posgrado con becas CONICET, CONAE, UNC y sin beca. Especialista en temas de sustentabilidad, planificación territorial, infraestructuras verdes, alimentación de ciudades, sistemas productores de alimentos de proximidad, agricultura familiar, conflictos convivencia entre producción y asentamientos urbanos. Email: b.gibellina@gmail.com / Web: <http://inta.gob.ar/personas/giobellina.beatriz>

Mariano Jäger: Licenciado en Economía, UBA (1986). Especialista in Economía del Sistema Agroalimentare Internazionale, Centro di Formazione per l'Assistenza allo Sviluppo (CeFAS), Viterbo, Italia (1988); Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Madrid, España. (1994); Especialista en Gestión Inteligente del Agua, Columbia University. Nueva York, Estados Unidos (2020); Doctorando en Historia, Universidad Torcuato Di Tella, Departamento de Estudios Históricos y Sociales (en curso). Becario de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia para realizar la Especialización en Economía del Sistema Agroalimentario Internacional. (1987/88). Asesor del Ministro Consejero Agrícola. Embajada Argentina en Roma- Conserjería Agrícola (1988-1989). Roma, Italia. Becario de la Fundación ARGENTARIA. Madrid, España (1993-1995). Experto de la Commission on Environmental Economic and Social Policies. Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) desde 1999. Experto de la Commission on Sustainable Livelihoods, desde 2000. Coordinador Comité Argentino de la Unión Mundial

de Conservación de la Naturaleza (UICN) (2003-2006). Miembro del Comité Académico Asesor de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) (2013-2015). Actualmente es Investigador Docente Categoría 1 del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de Universidades; Profesor titular de Economía Ecológica del Doctorado en Economía; Profesor de Economía General en el Departamento de Ingeniería e Investigaciones tecnológicas y Director del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Matanza (desde 2003). Email: mariano@jager.com.ar

Joaquín Pérez Martín: Ingeniero Agrónomo (2008), Universidad de Buenos Aires; Máster en Desarrollo Sustentable (2011), Universidad de Uppsala, Suecia; Doctor en Geografía (2021), Universidad Autónoma de Barcelona, España. Docente de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (2011 a la actualidad), becario del Programa Especial en Estudios Urbanos y Regionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (2018/2019) y becario doctoral del Instituto del Transporte de la Universidad Nacional de San Martín (2020 a la actualidad). Especialista en logística y comercialización agroalimentaria: logística urbana, supermercado, abastecimiento de alimentos, comercio urbano, sectores lácteo y frutihortícola. Email: joapm@agro.uba.ar

Alejandra Patricia Ricca: Lic en Química, Orientación Analítica (1994), Magister en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2000), Dra en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (UNL) (2007). Docente de grado y postgrado; Investigadora Fac. de Ing. Química, UNL (1994-1997). Investigadora sobre Inocuidad y contaminantes químicos de los alimentos. Responsable del Laboratorio de contaminantes químicos en Alimentos en Área de Protección de Alimentos ITA, INTA (1997-2014). Referente Nacional en Micotoxinas y Residuos de Pesticidas (2001-2014). Docente Universidad Del Salvador, INTA, IRAM, en la Maestría en Gestión de la Calidad Agroalimentaria (2003-2010). Miembro del Comité Técnico del Área Estratégica Tecnología de Alimentos INTA (2006-2008). Directora del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA), Centro de Agroindustrias (CIA) de INTA (2008-2014). Participación en Comité Alimentos del Plan Agroalimentario 2010-2011. Representante Institucional en la Comisión Nacional de Investigación en Agroquímicos (CNIA), Ministerio de Salud de Buenos Aires (abril 2009-2011). Representante del INTA ante el Comité de Residuos de Plaguicidas del Codex Alimentarius (2006-2014). Miembro del Comité Académico y Docente

de la Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Universidad Nacional de San Luis. Posgrado FICES/UNSL(desde 2013). Investigadora Referente Inocuidad, Calidad y Valor Agregado en EEA AMBA INTA (desde 2016). Docente Investigadora en Universidad Nacional de Hurlingham (desde 2018). Email: alejandra.ricca@gmail.com

Noelia Marcela Vera: Licenciada en Nutrición, UBA (2011). Especialista en Políticas Públicas para promoción de la Igualdad, CLACSO (2017). Doctoranda de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, correspondiente al área de Ciencias Éticas, Humanísticas y Sociales Médicas (desde 2016). Docente en la Escuela de Nutrición de Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (desde 2006) y en la Carrera de Nutrición del Depto Salud de la Universidad Nacional de La Matanza (desde 2015). Miembro del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar Región Pampeana (desde 2018) e integrante del equipo organizador de la feria de productores de la Universidad Nacional de La Matanza (desde 2018). Participa de diversos proyectos de extensión universitaria vinculados al intercambio de saberes con población vulnerable y productores hortícolas del periurbano bonaerense. Gerenta del Area de Alimentación Sana, Segura y Soberana del Mercado Central de Bs As (desde 04/2020). Email: lic.veran@gmail.com





